

afkar / ideas

Revista para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Núm. 62, primavera de 2021

España 6 € / Marruecos 24 dirhams / Argelia 125 dinares / Túnez 2,5 dinares / Francia 6 € / Bélgica 6 €



Pandemia y autoritarismo

Ignacio Álvarez-Ossorio □ Pierre Vermeren □ Louisa Dris-Aït Hamadouche

¿Normalización árabe con Israel?

Acuerdos de Abraham □ Marruecos □ Palestina □ EEUU

Giuseppe Dentice □ Elisabeth Marteu □ Itxaso Domínguez de Olazábal

Marina Ottaway □ Ellen Laipson



Ideas para la acción en el Mediterráneo

EuroMeSCo está compuesta por 104 institutos de 29 países europeos y del sur del Mediterráneo, siendo así la red más importante de centros de investigación y think tanks en el Mediterráneo. Actualmente, EuroMeSCo trabaja en un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) EuroMeSCo: Connecting the Dots. Este proyecto tiene como finalidad contribuir en la formulación de políticas inclusivas a través de la investigación en relación con las prioridades de la política europea en cuanto a su Vecindario Sur, con especial atención al desarrollo económico, la migración y la seguridad.



MISIONES CLAVES

Advocacy

EuroMeSCo tiene por objetivo aumentar la capacidad de influencia de los institutos de investigación y reflexión así como contribuir activamente al desarrollo de políticas. Con este fin, los resultados de las investigaciones, todos disponibles on-line en la web oficial, son ampliamente compartidos con expertos y responsables de instituciones nacionales, europeas e internacionales especializados en relaciones euromediterráneas.

Investigación

EuroMeSCo impulsa la reflexión sobre las políticas euromediterráneas a través de programas conjuntos de investigación, que involucran institutos e investigadores de especialidades y orígenes diversos, a través de sus publicaciones: *Policy Studies, Papers, Policy Briefs y Recommendations, Spot Ons* e informes.

Diálogo

A través de numerosas actividades, como las conferencias anuales, talleres, seminarios, debates y webinars, EuroMeSCo ofrece una plataforma para el diálogo entre los investigadores de la red, expertos y los principales actores políticos de la región euromediterránea, para debatir las actuales tendencias y desafíos de la región y reforzar las capacidades de estos centros.

IEMed.

Secretaría de EuroMeSCo

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
Girona, 20 08010 Barcelona
T (+34) 93 244 98 50 | F (+34) 93 247 01 65
www.euromesco.net
euromesco@iemed.org
[@euromesco](https://twitter.com/euromesco)



í n d i c e

9 / DIEZ AÑOS DE GUERRA EN SIRIA, ENTREVISTA CON **Zaina Erhaim** POR JORDI BERTRAN

“La brutalidad y el enfoque sectario del conflicto por parte del régimen precipitaron la guerra. Creíamos que la comunidad internacional haría algo. También que algunos oficiales del ejército no dispararían contra la gente. Nos equivocamos tanto en ambos casos...”.

14 / MÁS ALLÁ DEL PROCESO DE PAZ, **Giuseppe Dentice**

La entente entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin se enmarca en el intento de EEUU de superar el conflicto israelí-palestino, uno de los temas más divisorios de la región, con el fin de crear un frente unido de nuevos socios contra la amenaza –percibida– de Irán y Turquía.

34 / PANDEMIA Y AUTORITARISMO: LA TORMENTA PERFECTA, **Ignacio Álvarez-Ossorio**

En un contexto de crisis económica y de aumento exponencial de la pobreza, los regímenes árabes recurren a medidas coercitivas para frenar el descontento, aumentando la brecha entre gobernados y gobernantes, con el riesgo de desencadenar una tercera ola revolucionaria.

■ Editorial	3
■ Revista de prensa	6

GRAN ANGULAR

Acuerdos de Abraham: perspectivas regionales..... 18

Elisabeth Marteu

La normalización de las relaciones de algunos países árabes con Israel supone un cambio de paradigma en la región. La duda es saber si otros podrían dar el paso.

Palestina y los acuerdos arabo-israelíes: ‘¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?’ 22

Itxaso Domínguez de Olazábal

Los acuerdos han sido recibidos con escepticismo por la población, y como traición por parte del liderazgo palestino cada vez más debilitado.

Israel-Marruecos

Marina Ottaway

Además del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, el acuerdo exige el reconocimiento de EEUU de la anexión marroquí del Sáhara Occidental, un conflicto que el derecho internacional no ha sabido abordar.

El presidente Biden y los Acuerdos de Abraham..... 29

Ellen Laipson

Aunque puedan considerarse un avance, no es probable que estos acuerdos sean la piedra angular de la estrategia de la Administración Biden en la región, cuya prioridad es el restablecimiento de un proceso destinado a contener el programa nuclear de Irán.

IDEAS POLÍTICAS

Marruecos y Túnez ante el reto político de la Covid-19 38

Pierre Vermeren

Las medidas sanitarias parecen tener un cariz más de seguridad, con el fin de sofocar las tensiones sociales de poblaciones agotadas por la pobreza, la falta de ingresos y los meses de confinamiento.

El ‘Hirak’ argelino ante la pandemia 42

Louisa Dris-Aït Hamadouche

El Hirak ha vuelto a tomar las calles con la misma fuerza y las mismas consignas. Prueba de una clara fractura entre gobernantes y ciudadanos, su resiliencia, a pesar de las limitaciones, se enfrenta a la resistencia del régimen actual.

í n d i c e

Canarias: gestión local y de emergencia para unos flujos migratorios entre continentes . 46 *Xavier Aragall Flaqué*

Durante 2020, se ha producido un aumento del número de llegadas a las islas Canarias desde la costa africana. Priorizar el retorno y reforzar el control fronterizo y los acuerdos de cooperación, sobre todo en materia de control en los países de origen y tránsito, no evitara que la crisis migratoria se repita.

TENDENCIAS ECONÓMICAS

Consecuencias de la Covid-19: una lección para repensar la sostenibilidad de las finanzas públicas 52 *Roger Albiniana*

Más allá de los efectos de la pandemia, la región enfrenta retos estructurales como el mercado laboral, la economía informal, la falta de financiación de las pymes o un déficit del modelo de gobernanza. Es necesario reorientar el gasto público hacia educación, sanidad y políticas de protección social.

Transición hacia una energía limpia en el Norte de África . . . 56 *Agencia Internacional de la Energía*

La crisis actual plantea a los países norteafricanos la necesidad, cada vez más urgente, de reevaluar sus estrategias energéticas y de acelerar la transición hacia una energía limpia y sostenible. La agenda para la eficiencia energética pone de manifiesto el potencial de creación de empleo en la región, especialmente en industria, construcción y transporte.

La región MENA pos-Covid: de la transformación digital a la transformación a través de lo digital 60 *Mondher Khanfir*

La conectividad universal es un elemento clave tanto de la recuperación tras la Covid-19, como de la realización de proyectos de desarrollo más globales. La región debería reflexionar sobre el ritmo de su integración tecnológica y económica, diseñando estrategias con la colaboración público-privada en todos los ámbitos y todos los niveles.

DIÁLOGOS

Proliferación de crisis 64 *Rana Yazaji*

Las organizaciones culturales, inmersas ya antes en una crisis, han debido adaptar sus actividades, trastocando unas tradiciones y concepciones establecidas.

La cultura marroquí en tiempos de la Covid-19 68 *Entrevista con Neila Tazi Abdi*

“Marruecos ganaría mucho si promocionara mejor su patrimonio para convertirlo en cadena de transmisión de la política cultural, turística y educativa. Esto permitiría ofrecer a la juventud medios de emancipación.”

La resiliencia como medio de supervivencia 72 *Lilia Weslaty*

Frente a la pandemia, los artistas del mundo árabe siguen sufriendo la mala gobernanza de los Estados. El virus no ha hecho sino exacerbar una situación ya deplorable.

Publicaciones 75

La verdadera independencia de Egipto se produjo en 1956 cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez y se deshizo de las garras coloniales europeas, por mucho que Francia, Gran Bretaña e Israel intentaran evitarlo en una guerra que las nuevas potencias mundiales abortaron. Suez se convirtió en epítome de la soberanía, de la identidad y del poder egipcio. Esta arteria vital para el comercio mundial ha sido símbolo y fuente de recursos desde entonces. En 2020 los ingresos procedentes del tráfico por el Canal aportaron alrededor de 5.600 millones de dólares, uno de los tres pilares de la economía egipcia junto con el turismo y las remesas. Se calcula que por él pasan unos 100 buques al día, un 13% del comercio marítimo que acapara entre el 70% y el 80% del comercio mundial.

De ahí que cuando el portacontenedores *Ever Given* quedó encallado en el Canal de Suez, el comercio mundial pendió de un hilo. Las pérdidas, y los buques en espera, se amontonaban y la operación para desencallar el buque se convirtió en un pulso a contrarreloj para las autoridades egipcias. No es de extrañar que seis días después, cuando lograron liberar el canal, el presidente Abdelfattah al Sisi mostrara el logro como un motivo de orgullo nacional. De hecho, su ampliación en 2015 fue uno de los megaproyectos insignia de su gobierno y del complicado periodo posrevolucionario. Al Sisi supo capitalizar políticamente el infortunio del *Ever Given*; ahora está por ver quién paga la factura que la Autoridad del Canal estima en 9.600 millones de dólares entre indemnizaciones, pérdidas, daños en la carga y costes de reflotar el buque. Pero los egipcios lo celebraron y recuperaron parte del orgullo herido por el declive de unas últimas décadas marcadas por la pérdida de peso político de Egipto en la región y la creciente dependencia de sus patrocinadores del Golfo.

Egipto, y su presidente, sacan pecho, y así lo demuestran también en otros contenciosos regionales, como la construcción y llenado de la Gran Presa del Renacimiento Etíope. Fracasadas las negociaciones, Al Sisi lanzó duras amenazas a sus vecinos al Sur. El caudal del Nilo es una "línea roja" y una gota de agua puede generar mu-

cha inestabilidad. Y las amenazas de Al Sisi no pueden tomarse a la ligera en el clima de ensalzamiento patriótico marca de la casa desde su llegada al poder.

Qué mejor pues que el bálsamo del esplendor pasado para dejar de lado que en plena crisis de la Covid-19, la economía egipcia sigue decreciendo (del 5,9% de crecimiento en 2019 a un 3,5% estimado en 2021), que un 29,7% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y que unos 15 millones de egipcios no podrán permitirse comprar la vacuna que, según parece, va a venderse.

Así cabe interpretar el "Desfile Dorado de los Faraones", el *show* de factura millonaria con la excusa de trasladar a las 22 momias desde el Museo Egipcio de la Plaza Tahrir hasta el nuevo museo en El Fustat. Allí Al Sisi las esperaba con honores para anunciar que el traslado marcaba "el renacimiento de una vieja nación que quiere recuperar el lugar que le corresponde en el mundo moderno". Pan y circo, trufado de dorados, simbolismos y la sensación de estar en la mirada del mundo entero, de ser de nuevo *umm ad-dunia*, madre de la civilización, como se considera Egipto a sí mismo. El subidón de orgullo patriótico fue descomunal y egipcios de todas las clases pensaron que tal demostración de *grandeur* faraónica sería el acicate para atraer a esos millones de turistas perdidos (de 13,1 a 3,5 millones en el último año).

Sin embargo, parece difícil que el turismo, como el comercio y los negocios, vuelvan rápidamente a la normalidad. El desfile fue una anécdota más cuya factura acabará en las espaldas de unos cuantos, como la de Suez o la de la remodelación de la Plaza Tahrir, que de paso ha conseguido borrar las trazas de la revolución que inspiró al mundo en 2011. Otro símbolo más de que el régimen piensa perpetuarse, anclado en el ensalzamiento patriótico y en demostraciones de fuerza, mientras tantos activistas y opositores languidecen en prisión.

Desde Europa contemplamos con perplejidad y asombro y con cierta frustración cómo el autoritarismo atávico se afianza cada día más en un país que, por historia, geografía y por su peso cultural y demográfico, sigue siendo el centro del mundo árabe. ■

**'Grandeur'
y sombras en Egipto**



**ESTUDIOS DE
POLÍTICA
EXTERIOR S.A.**

IEMed.
Instituto Europeo del Mediterráneo

afkar/ideas

Revista para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Directores

Senén Florensa, Josep Piqué

Redactoras jefas

Lurdes Vidal, Gabriela González de Castejón

Redacción

Jordi Bertran, Elisabetta Ciuccarelli, Julia García

Infografía

Adriana Exeni

Colaboraciones

Ignacio Álvarez-Ossorio, Xavier Aragall

Roger Albinyana, Batoul Benyamina Abdessadok

Louisa Dris-Aït-Hamadouche, Giuseppe Dentice, Itxaso Domínguez

Zaina Erhaim, Olivia Isabell Glombitza, Sadja Guiz, Miguel Hernando de Larramendi

Mondher Khanfir, Ellen Laipson, Élisabeth Marteu, Oumaya Amghar Ait Moussa

Marina Ottaway, Neila Tazi, Pierre Vermeren

Lilia Weslaty, Rana Yazagi

Redacción, administración y publicidad

Estudios de Política Exterior SA, Núñez de Balboa 49, 28001 Madrid. Tel. 00 34 91 431 26 28

www.politicalexterior.com

IEMed, Girona 20, 08010 Barcelona. Tel. 00 34 93 244 98 50

www.iemed.org

Suscripciones

Núñez de Balboa, 49 - 28001 Madrid

Tel.: 00 34 91 431 27 11- Fax: 00 34 91 435 40 27

suscripciones@politicalexterior.com

© 2021. Estudios de Política Exterior SA (Madrid)

© 2021. Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona)

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso expreso de los editores.

ISSN: 1697-0403 / Depósito Legal: M-49925-2003

Foto de portada: PATRICK BAZ/AFP/VIA GETTY IMAGES

afkar/ideas es una revista editada por

Estudios de Política Exterior SA (Madrid) y el Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona).

Los artículos publicados no reflejan los criterios de **afkar/ideas** expuestos en sus notas editoriales.

La revista recoge distintos estudios y opiniones, fiel a su propósito de animar el debate periódico sobre la evolución de España, el Magreb y la Unión Europea.



Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

Estudios de Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se oponen expresamente a que cualquiera de las páginas de **afkar/ideas**, o partes de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de la totalidad o parte de las páginas de esta obra sólo podrá ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos –www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

#PolExt200

Las ‘primaveras árabes’, diez años después



Santiago Alba Rico

Eugenio Bregolat

Alfonso Casani et Irene Fernández-Molina

Youssef Cherif, Hafsa Halawa

et Özge Zihnioglu

Sergio Colina Martín

Andrea Dessì

Paolo Gerbaudo

Raquel González et Irene Bernal

Miguel Hernando de Larramendi

Ramón Jáuregui

Salvador Martí i Puig

Manuel Muñiz

Jaime de Ojeda

José Antonio Sanahuja

Louly Saney et Dipayan Ghosh

Francisco Sánchez

Steven Shapin

Ernest Urtasun

¡CONSÍGUELO!

politicaexterior.com

Facebook - Twitter

Biden, Israel y los palestinos Editorial-Al Ahram Hebdo (03-03-2021)

“¿Cómo va a llevarse el presidente estadounidense, Joe Biden, con el gobierno israelí de derechas de Benjamín Netanyahu? No es un secreto para nadie que las orientaciones del nuevo jefe de la Casa Blanca no son del gusto del primer ministro israelí. Al contrario que Donald Trump, que apoyó a ultranza a los israelíes, Biden ha dado a entender que quiere unas relaciones más equilibradas en Oriente Próximo. (...) ha anunciado su intención de reconsiderar algunas decisiones de Trump relacionadas con los palestinos. Así pues, el representante estadounidense ante la ONU, Richard Mills, ha declarado que Estados Unidos va a ‘restablecer sus relaciones con la Autoridad Palestina y va a reanudar la ayuda económica y humanitaria’, reafirmando el respaldo de Washington a la solución de dos Estados. (...)

Los medios de comunicación han comentado mucho la llamada telefónica ‘tardía’ del presidente Biden al primer ministro israelí (...), un mes después de la llegada de Biden a la Casa Blanca, mientras que (...) Trump y Obama llamaron (...) solo dos días después de su toma de posesión. (...) Resulta evidente que Biden prefiere tratar con un primer ministro de centro o de izquierdas, (...) y sabe perfectamente que el primer ministro israelí es un oportunista. Pero ¿pueden las preferencias personales de Biden cambiar la política estadounidense? (...) No nos engañemos. El

nuevo presidente estadounidense no llegará hasta el punto de cambiar todas las decisiones de Trump a favor de Israel. Las políticas estadounidenses con respecto a Israel no cambiarán en lo esencial”.

Diez años de una guerra sin salida Editorial-La Vanguardia (15-03-2021)

“La guerra civil en Siria empezó el 15 de marzo del 2011, en pleno estallido de las primaveras árabes, con un grafiti en la ciudad de Deraa que decía ‘Es tu turno, doctor’, en alusión al presidente Bashar el Asad, que es oftalmólogo. Diez años después, el dictador sirio (...) sigue en el poder gracias al apoyo ruso e iraní, la retirada militar de EE.UU. y el papel de Turquía contra los kurdos.

En estos dos lustros ha habido dos puntos de inflexión decisivos. El primero fue en el 2013, cuando el presidente Obama renunció a los bombardeos que esperaban muchos sirios para hacer respetar sus ‘líneas rojas’ tras un ataque químico por parte del régimen. El segundo fue en el 2015, cuando el ejército sirio combatía en varios frentes y el Estado Islámico vivía su era de esplendor imponiendo un califato en amplias zonas de Siria e Irak. En ese momento Rusia (...) puso toda la potencia militar y logística al servicio de El Asad.

(...) La retirada americana, ordenada por Donald Trump, fue otro regalo para el dictador, quien ha logrado mantenerse en el poder y obtener una pírrica victoria militar. El

Asad ha traspasado todas las líneas rojas en su represión, pero lo ha hecho con total impunidad gracias al apoyo de Rusia y China en la ONU. (...) Con el respaldo de Moscú, Teherán y Hizbulah, El Asad gobierna un país en ruinas, fragmentado, con una gravísima crisis económica y una gran lista de sanciones internacionales. (...) No ha habido reconciliación en las zonas recuperadas por el Gobierno, sino sumisión, y nadie duda de que Bashar el Asad ganará cómodamente las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

(...) El gran perdedor es el pueblo sirio, con casi medio millón de muertos en estos diez años, con doce millones de desplazados y refugiados dentro y fuera de sus fronteras, y con millones de personas con graves secuelas físicas y psicológicas. La guerra ha dejado sin futuro a toda una generación de sirios y el 90% de menores necesita asistencia humanitaria, situación agravada por la Covid.

Toda solución del conflicto pasa por actores externos como Rusia, Irán, Turquía y, en menor medida, EE.UU. Y la cuestión de fondo ya no gira sobre la permanencia de El Asad en el poder, sino sobre cómo Occidente piensa convivir con él. (...)

Política migratoria de la UE: vidas y valores Editorial-El País (18-03-2021)

“Tras un periodo de cierto retroceso por la pandemia, los flujos migratorios vuelven al Mediterráneo. El

goteo de muertes de migrantes es incesante y –pese a que la reiteración parezca provocar la indiferencia de algunos– convoca a Europa a una reflexión también constante sobre si sus políticas son eficaces y si están a la altura de sus valores. (...)

Desde que en 2014 terminó la operación Mare Nostrum (...) la política de rescates ha contado cada vez con menos recursos y más dificultades. Los programas de intervención han basculado cada vez más hacia las tareas de control de fronteras y persecución de las mafias que al rescate y la ayuda humanitaria. (...)

Aunque los flujos migratorios se han reducido drásticamente desde la crisis de 2015, siguen siendo una causa importante de muertes evitables. Varios factores han agravado las condiciones en que se producen las travesías (...) En primer lugar, la política de la UE de delegar las funciones de control y rescate a los países de partida, entre los que se encuentra Libia, un Estado fallido. (...) Las trabas administrativas y, en algunos momentos, el hostigamiento que sufren las organizaciones humanitarias han reducido la capacidad operativa de las naves dedicadas al rescate. A ello hay que añadir el creciente uso de medios aéreos, que facilitan las tareas de vigilancia, pero no tanto las de salvamento.

(...) La Comisión impulsa con escaso éxito un proyecto de reforma de toda esta política. No es realista pensar que puede florecer pronto. El consenso solo está en el concepto fortaleza asediada. No

parece la respuesta más adecuada y, desde luego, no es suficiente. (...) el control de fronteras no debería impedir una mayor atención a salvar vidas y respetar los derechos humanos.”

Argelia: salir del punto muerto tras dos años de revuelta

Editorial-Le Monde
(23-02-2021)

“(...) Dos años después de iniciarse, (...) el *Hirak* (...) tiene un primer mérito: sigue vivo. Pero, sobre todo, el *Hirak* expresa con tenacidad la exasperación de una población que se ahoga en un sistema político opaco con instituciones democráticas ficticias, en el que los militares siguen manejando los hilos.

Sin embargo, (...) el balance es desigual. Es cierto que los argelinos han conseguido que se marche el presidente Buteflika después de 20 años de reinado. Y es cierto que han ridiculizado, al abstenerse masivamente, las pretensiones de su sucesor, Abdelmadjid Tebbune, el candidato de los militares elegido en unas elecciones presidenciales amañadas (...).

Pero los vanos compromisos del mismo tipo esgrimidos numerosas veces en el pasado, la sucesión de fases de represión y de apaciguamiento que el país encadena desde el fin de la sangrienta década de 1990, han llevado al país mucho más allá del hastío, hasta una cólera sorda exacerbada por la inercia del régimen. El *Hirak*, un movimiento para expulsar a los dirigentes que reclama un

cambio de régimen, pero que no tiene ni un programa claro, ni liderazgo, no ha logrado obligar a una negociación al pequeño grupo de hombres procedentes del aparato de seguridad y del Ejército que lleva las riendas del país. Este punto muerto, a menudo denunciado, parece total.

Ahora bien, los dirigentes argelinos ya no pueden dar largas eternamente. La crisis sanitaria y la brutal caída de los precios de los hidrocarburos socavan el principal pilar del régimen: su capacidad para comprar la paz social gracias a las rentas del petróleo que representan el 60% de los ingresos del Estado. (...) Esta vez no bastarán unas reformas superficiales. Resulta urgente iniciar un verdadero diálogo entre el poder y la oposición, incluyendo a representantes del *Hirak* y de la sociedad civil. (...) Cuanto más tarde en entablarse de manera sincera el proceso hacia un Estado de derecho digno de ese nombre, hacia un verdadero control parlamentario y una justicia independiente, más se agravarán las tensiones y más alto puede ser el precio que tenga que pagar el pueblo argelino”.

Libia: el nuevo gobierno investido

RFI-(15-03-2021)

“El primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibah, y su gobierno de unidad nacional, que deben pilotar la transición hasta las elecciones previstas para el próximo 24 de diciembre, prestaron juramento el 15 de

marzo. El nombramiento de Abdul Hamid Dbeibah se produjo en un trasfondo de acusaciones de corrupción hace más de un mes (...) en el marco de un proceso político auspiciado por la ONU para sacar a Libia de una década de caos y de violencia.

(...) Desde hace años, el país está escindido en dos bandos: el Gobierno de Unidad Nacional (GNA) de Fayed al Sarraj, en el oeste, reconocido por la ONU, y el gabinete paralelo de Abdullah al Thani, no reconocido por la comunidad internacional, en el Este, una región controlada por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar. Ni Fayed el-Sarraj, ni Abdullah al Thani estuvieron presentes en la jura del cargo ese lunes.

Abdul Hamid Dbeibah y su gobierno de transición asumieron oficialmente sus funciones en un país que sigue lastrado por las luchas de influencia, el peso de las milicias, la presencia de combatientes extranjeros y también la corrupción. Tendrán la ardua tarea de organizar unas elecciones a finales de año, pero también la de intentar reactivar una economía exhausta y de unificar a las instituciones”.

El príncipe heredero saudí no rinde cuentas

Editorial-Financial Times-(28-02-2021)

“El informe desclasificado de la inteligencia estadounidense sobre el brutal asesinato de Yamal

Jashoggi valora de forma condenatoria el rol del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman en la atrocidad. [El informe] llega a la conclusión de que aprobó una operación para ‘capturar o matar’ al periodista en el consulado del reino en Estambul. No deja lugar a dudas de que las afirmaciones de Riad de que se trataba de una operación no autorizada, de la que el príncipe heredero no tenía conocimiento, eran falsas. (...)

Debe aplaudirse a la administración Biden por publicar el informe (...) Pero, para disgusto de muchos, el príncipe Mohammed sigue sin ser sancionado (...), mientras que aún se desconoce el paradero del cuerpo desmembrado de Khashoggi. En otras palabras, Estados Unidos lo hace responsable, pero no le hace rendir cuentas. (...)

El príncipe Mohamed ha supervisado una brutal represión contra todos los indicios de disidencia y ha encarcelado a miembros de la realeza, empresarios, blogueros y académicos. El asesinato de Jashoggi fue simplemente el acto más atroz. (...) Despues de sobrevivir a la crisis diplomática, ha podido dejar atrás la matanza. Puede que no sea tan bienvenido como antes en algunas capitales occidentales, pero muchos en negocios y finanzas continúan cortejándole. (...).

El informe de inteligencia debería hacer pensar a todos. El atractivo de los petrodólares ha triunfado durante demasiado tiempo sobre la moral. (...)" ■

www.iemed.org/publicacions-es

COLECCIONES

Joint Policy Study

IEMed Policy Study

IEMed. Mediterranean Yearbook

Papers IEMed

Papers IEMed joint series with EuroMeSCo

Euromed Survey of Experts and Actors

Quaderns de la Mediterrània



10 años de guerra en Siria

“La brutalidad y el enfoque sectario del conflicto por parte del régimen precipitaron la guerra. Los que ayudaron a Al Assad a sobrevivir fueron los islamistas y los extremistas que liberaron de las prisiones”.

ENTREVISTA con Zaina Erhaim por Jordi Bertran

En marzo de 2021 muchos medios de comunicación han recordado que hace 10 años empezó la guerra de Siria. Pero no debería olvidarse que ese mismo mes de 2011 no había guerra en Siria si no calles llenas de gente animada y esperanzada en un futuro mejor que participaba por primera vez en manifestaciones. En esa revuelta ciudadana también estaba una recién licenciada en periodismo, Zaina Erhaim (1985), que respiró el ambiente del momento en manifestaciones en Damasco, y también en Idlib, su ciudad natal, junto a su madre y otras parientes. De vuelta en Londres, donde estudiaba, trabajó a distancia para los Comités de Coordinación Local que organizaban las protestas ciudadanas durante ese 2011. Luego, cuando la represión ya hacía tiempo que había precipitado el estallido de violencia, volvió en 2013 a la Siria controlada por los rebeldes como periodista y coordinadora de un proyecto en Alepo del Institute for War and Peace Reporting, una entidad creada por periodistas para dar voz a quien lucha contra la desinformación, el discurso del odio y la propaganda en situaciones de conflicto. En 2015, su labor periodística, su secularismo y sus críticas a los abusos de los yihadistas le valieron ser expulsada del país. También le valieron ser nominada como periodista del año por Reporteros sin Fronteras.

Ahora vive refugiada en Londres, desde donde ha atendido por videoconferencia a AFKAR/IDEAS.

AFKAR/IDEAS: ¿Qué recuerda de ese año 2011 en el que estalló la revuelta en Siria?

ZAINA ERHAIM: Describiría el recuerdo que tenemos todos de aquellos días como una caja negra polvorienta. Es demasiado traumático volver atrás, abrirla y comprobar lo que ha pasado. En 2011 trabajé *online* desde Londres entre 16 y 18 horas al día durante semanas en la puesta en marcha de la Oficina de Comunicación de los Comités de Coordinación Local. Ahora, con motivo de un artículo, he intentado retomar el contacto con algunas de las personas con las que colaboraba y que estaban sobre el terreno. Y he descubierto que algunas se radicalizaron y se volvieron extremistas. Uno se unió al Daesh, otro cometió un atentado suicida para el Ejército Libre Sirio, muchos fueron asesinados en prisiones del régimen porque se mantuvieron no violentos y siguieron abogando por una revolución pacífica, y muchos otros estaban tan desesperados y hartos de tanta guerra que se marcharon y empezaron una nueva vida fuera. Y francamente, yo estoy en este último grupo. No voy a cortar completamente con Siria, pero he estado trabajando últimamente sobre Irak, Libia, Marruecos o Líbano y es un alivio, en cierto sentido, abrir otros horizontes tras tantos años centrada en Siria con la desesperación que ello conlleva. Es una manera de tirar hacia adelante.

A/I: ¿Cómo vivió las manifestaciones de 2011?

Z.E.: En el verano de 2011 tuve la oportunidad de volver desde Londres –donde estudiaba un máster en Periodismo Internacional– a Damasco y participar en una manifestación en el distrito este de Guta. Era en realidad mi primera manifestación. Y también participé en una en mi ciudad natal, Idlib, con mi madre y mi hermana, mis primas y mis amigas de toda la vida, en una especie de manifestación dirigida por mujeres. Antes de 2012 pude volver un par de veces más a Siria y empecé entonces a escribir sobre lo que veía en colaboraciones con medios como *Al Hayat* y *Al Quds Al Arabi*, pero también en un blog que creé como proyecto universitario. Era de lo poco que se filtraba fuera del país en inglés firmado por ciudadanos sirios.

A/I: Quizá es doloroso hacerle recordar en qué momento se truncó todo, ahora que intenta girar página.

Z.E.: No puedo pasar página, ojalá pudiera. Creo que fue determinante para precipitar el conflicto la brutalidad usada por el régimen y su enfoque sectario del conflicto. El régimen usó y propagó desde un principio vídeos y contenidos en redes sociales, falsos en muchos casos, para alimentar el odio y llevar al país a una guerra civil. Por ejemplo, recuerdo que se distribuían vídeos

Creíamos que la comunidad internacional haría algo, que nuestro ejército no dispararía contra civiles

donde se podía ver a alauitas, reconocibles por el dialecto, torturando a suníes. El régimen sabía además que su principal amenaza eran los activistas seculares no violentos y por eso fueron los primeros en ser encerrados junto a los periodistas. Y los que ayudaron a [Bashar al] Assad a sobrevivir fueron en realidad los islamistas y los extremistas que liberaron de las prisiones.

También empezó a torcerse todo cuando perdimos la ilusión en que la comunidad internacional haría algo. Al contrario de lo que ocurrió en la masacre de Hama (1982), esta vez estábamos documentando todo lo que estaba pasando y creímos que eso haría reaccionar a la comunidad internacional. También había una cierta esperanza en que algunos oficiales del ejército no obedecieran las órdenes de disparar contra la gente. Nos equivocamos tanto en ambos casos...

También tuvieron su papel algunos países, que empezaron a financiar grupos armados para que sirvieran a sus propios intereses.

Pero si tuviera que precisar un momento exacto del punto de inflexión definitivo, diría que fue el asedio a Daraa, que empezó el 25 de abril de 2011. Nuestros propios tanques dispararon contra una ciudad donde nadie tenía armamento capaz de contrarrestar una ofensiva de ese alcance. Ahí empezamos a ver cómo los Comités de Coordinación, nacidos desde la base social del país, se disolvían y el conflicto escalaba hacia una guerra total.

A/I: Tras un año trabajando para BCC Arabic, volvió a Siria como re-

portera y como coordinadora del Institute for War and Peace Reporting en Alepo. ¿Qué se encontró?

Z.E.: Así es, en verano de 2013 fui afortunada porque pude moverme por el sector rebelde del país: Alepo, pero también Deir El Zor, Latakia, Idlib y Raqqa.

Y los mejores recuerdos que tengo son de Raqqa, donde las mujeres jugaron un rol muy importante en la revuelta de 2011. Era la primera vez que estaba allí y fue fascinante ver cómo las mujeres se paseaban tranquilamente sin cubrirse la cabeza, con los labios pintados, delante de yihadistas de Ahrar al Sham. Ese verano había todavía más de 50 organizaciones de la sociedad civil y ONGs locales en Raqqa y no había ni una sola en la que las mujeres no fueran la mitad. Y en las manifestaciones contra la presencia de Ahrar Al Sham, las mujeres iban en la cabecera. Yo, que venía de un suburbio de Alepo donde era la única mujer que no llevaba hiyab integral, volví a ser yo misma. Fue el último lugar en el que sentí la atmósfera de liberalización política que había traído 2011. Que luego Raqqa fuera reconocida únicamente como la capital del califato de Daesh me resultaba muy fastidioso porque fue allí donde tuve, por última vez en Siria, la sensación de libertad personal y política. Pero todo eso fue antes de que Daesh se impusiera, empezara a luchar contra los rebeldes y todo se volviera muy caótico. Había muchos conflictos en un solo y esa paradoja no estaba bien cubierta ni en prensa local ni en la internacional. Fuimos ingenuos en describirlo como un conflicto bidimensional, con buenos y malos, cuando

había de todo en ambos bandos. Y ofrecer esa definición plana de lo que pasaba también jugó un papel claro en la polarización del conflicto. Desde mi ubicación en el área rebelde de Alepo, que algunos podían considerar “la de los buenos”, yo iba escoltada por dos combatientes islamistas que estaban dispuestos a defender mi vida hasta las últimas consecuencias, mi vida era preciosa para ellos. Pero si me quitaba el pañuelo o hablaba públicamente sobre los atropellos de su bando, podrían haberme matado sin ningún problema.

A/I: ¿Cómo valora la injerencia externa en la guerra?

Z.E.: Creo que todas las干涉encias, especialmente las militares, fueron de mirada corta en el caso de Estados Unidos y de la coalición. No tenían estrategia e incluso cuando intervinieron contra Daesh, el hecho de que no se hiciera nada contra los yihadistas iraníes, que estaban luchando en una tierra extranjera, fue uno de los aspectos que más alimentaron la sectarización del conflicto en la región. Los suníes veían ahí un doble rasero y vi entonces entre ellos a muchos moderados que se sintieron interpelados a unirse a posiciones más extremistas. Así que incluso cuando EEUU hizo lo correcto al acabar militarmente con Daesh, estaba en realidad abriendo un frente ideológico que sigue vivo.

Por lo que respecta a los iraníes, estuvieron allí desde el principio y en las líneas del frente. Cuando se produjo la evacuación de Alepo, la existencia de puntos de control iraníes,

Al Assad obedece a dos países [Rusia e Irán] y no está en condiciones de ejercer solo el poder en Siria

rusos y del ejército sirio fijó en la mentalidad de la gente la noción de que había tres autoridades en el país. Y que el ejército regular sirio era el último en esa jerarquía.

De hecho, cuando se empezó a decir que el régimen había ganado, me preguntaba ¿qué es lo que ha ganado?, ¿cuándo ha ganado? Desde mi punto de vista, ahora Al Assad obedece a dos países y no está en condiciones de ejercer solo el poder en Siria. Creo, en definitiva, que él también ha perdido.

A/I: Aunque la sociedad siria ha perdido más.

Z.E.: Todos perdimos. Los que estamos desplazados, en el exilio, los que se quedaron y a duras penas pueden conseguir el sustento diario. No importa en realidad en qué lugar del país estabas porque todo el mundo sufre las secuelas de la guerra. Algo que se ha complicado además ahora con el impacto de la Covid-19. Por mucho que el ministerio de Sanidad sirio insista en que solo han muerto unos centenares de personas, solo hace falta seguir los obituarios y muestras de consuelo en Facebook y redes sociales (solo en mi Facebook veo una veintena diarios) para darse cuenta de que el alcance real de la pandemia es mucho más grande. Según una investigación con la que estoy colaborando, en Damasco hay más del doble de muertes que en un año normal.

A/I: En medio de ese conflicto, y en tanto que coordinadora en Alepo del Institute for War and Peace Repor-



Zaina Erhaim delante de un muro pintado con la palabra “libertad” en diferentes idiomas. Alepo, 27 de mayo de 2014./Z.E.

ting, consiguió formar a periodistas locales.

Z.E.: Sí, algo de lo que me siento muy orgullosa. Al principio empecé invitando a los que ya hacían periodismo ciudadano, pero solo venían hombres. No había ninguna mujer local periodista en ese momento y era algo que, como feminista convencida, quise cambiar. Pedí a una amiga que hacía un taller de trabajos manuales en el mismo centro que preguntara a sus alumnas si querían apuntarse. El primer día vinieron cinco. Al siguiente día ya eran 14. La mayoría eran amas de casa, que venían con

sus hijos y cuyos maridos y familias menospreciaban el taller y no creían que ellas pudieran dedicarse al periodismo. Tuve incluso que poner a un docente a hacer de canguro de los niños. Pero lo importante es que al menos cinco de las que participaron en esa formación se han convertido no solo en reporteras y sostén económico de sus familias, sino que también acabaron formando a otras. Para mí, para quien el conflicto ha supuesto dolor y pérdida, ésa es la única satisfacción que tengo ahora de ese periodo: haber podido dar a esas mujeres la oportunidad de convertirse en periodistas. De lo contra-

Toda una generación de mujeres eran niñas cuando la revuelta empezó, no tienen ninguna educación

rio, no lo hubieran conseguido porque la mayoría de las formaciones de ese tipo se hacían fuera de Siria. Muy pocas mujeres podían salir a Líbano o Turquía para formarse, mientras yo podía hacerlo en su casa. Y si no lo hubiera hecho no tendríamos ahora unas 50 periodistas trabajando en Idlib y Alepo, lo cual me hace sentir que mi experiencia en Alepo valió la pena.

A/I: ¿Aunque la labor periodística que se puede hacer ahora sea tan limitada?

Z.E.: Efectivamente, ahora todo es completamente diferente. Está claro que no pueden abordar grandes temas, pero aunque solo puedan denunciar cuestiones sociales, como los problemas en los centros de salud, ya es un logro. Desgraciadamente también he visto cómo muchos periodistas se han pasado a la propaganda. Se mueven por intereses sectarios. Es una de las consecuencias de una guerra tan caótica; y creo que esto se aplica a la región, lo puedes ver también en Líbano o Irak.

Pero creo que conseguimos cosas fundamentales, como que esas periodistas adquirieran la libertad que les da la autonomía económica, y que consigan publicar y denunciar temas sociales. Y francamente, si alguna me pregunta mi opinión sobre temas más espinosos, la disuado de publicarlo porque dentro de Siria nadie va a ser capaz de defenderla. Acabo siempre recomendándole que guarde el tema para cuando pueda ser publicado sin temer por su propia seguridad o la de su familia.

A/I: ¿Cree que estas y otras mujeres que se han convertido en sostén económico de sus familias durante la guerra pueden ser decisivas en el futuro?

Z.E.: De entrada, creo que hay muchas situaciones diferentes, incluso en una misma provincia, y que no es posible generalizar. Por ejemplo, en algunos municipios se ha vivido con el temor de que mujeres e incluso niñas de 13 o 14 años fueran forzadas a casarse con miembros de grupos armados. Entonces las casaban con primos para garantizar que no serían forzadas a casarse o que se las llevaran secuestradas. En ese sentido, se han dado pasos atrás para la mujer. En cambio, en otras áreas es cierto que se han visto obligadas a convertirse en el sostén económico de las familias por la ausencia de los hombres. Ciertamente, para las que se han empoderado y se han independizado es difícil que haya una vuelta atrás. Pero no debemos olvidar que hay toda una generación de mujeres que eran niñas cuando la revuelta comenzó y que no tienen ninguna educación. Han perdido 10 años de su vida.

E igualmente, cuando la historia se escriba, volveremos a ver que las mujeres son dejadas de lado. No van a ser tomadas seriamente y sus historias no se contarán a no ser que alguna mujer lo haga.

A/I: ¿Cree que es posible hablar ya de la reconstrucción del país?

Z.E.: No soy una experta en política. Ahora es inconcebible hablar de elecciones o períodos de justi-

cia transicional. Sin un primer gesto de liberación de todos los detenidos y de admisión por parte del régimen de tantas muertes bajo torturas, no hay ninguna posibilidad de empezar ni tan siquiera a considerar la reconstrucción.

Sin este tipo de reconocimiento, no quiero que mi casa sea reconstruida, prefiero que quede en ruinas. No quiero que sea reconstruida al precio de esos cientos de miles de víctimas, muchas de las cuales no estaban ni siquiera implicadas en ningún bando.

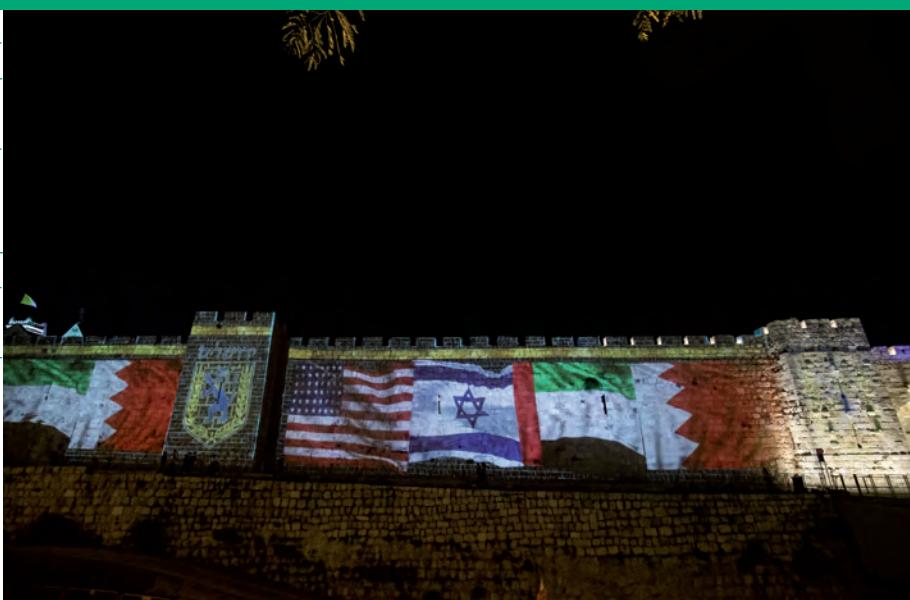
Sin ese dossier resuelto, ninguna organización o país que respete los derechos humanos debería participar en ningún tipo de esfuerzo de reconstrucción.

A/I: Comentaba al inicio de esta entrevista que se está abriendo a otros horizontes.

Z.E.: Estoy haciendo trabajo de consultoría y de formación en comunicación con un par de organizaciones internacionales que trabajan en Irak, Marruecos, Egipto, Líbano y Libia. Y acabo de fundar en Reino Unido la organización Shams For Equity And Social Justice con la que quiero promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ en el Norte de África y Oriente Medio.

Y entre mis proyectos siempre está poder explicar algún día todas las historias de lo que viví en Alepo. Quizá consiga quitarme un peso de encima y pasar al menos un poco la página de la tristeza y el dolor que me acompañan desde entonces. ■

- 14** Más allá del Proceso de Paz
- 18** Acuerdos de Abraham: perspectivas regionales
- 22** Palestina y los acuerdos arabo-israelíes: ‘¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?’
- 25** Israel-Marruecos
- 29** El presidente Biden y los Acuerdos de Abraham



Proyección de las banderas de EEUU, Israel, EAU y Baréin en los muros de la Ciudad Vieja tras la firma de los Acuerdos de Abraham. Jerusalén, 15 de septiembre de 2020./ MOSTAFA ALKHAROUF/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Normalización con Israel en Oriente Medio

En septiembre de 2020, se firmaron, con la mediación de Estados Unidos, los Acuerdos de Abraham, que suponen la normalización de las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Unos meses más tarde sería el turno para Marruecos y Sudán. En el caso de Marruecos, supone además, el reconocimiento de EEUU de la anexión marroquí del Sáhara Occidental, un conflicto que la comunidad internacional no ha logrado solucionar. Sin duda, estos pactos reflejan una ruptura geopolítica y un cambio de paradigma en el mundo árabe. La cuestión es saber si otros países de la región seguirán la misma estela. Hasta ahora, salvo Egipto y Jordania, ningún país árabe había reconocido a Israel.

Sin embargo, el pragmatismo parece haberse impuesto, Israel ha dejado de ser el enemigo principal y los países se vuelcan más en sus propios intereses. El conflicto israelí-palestino parece haber pasado a un segundo plano, lo que ha sido calificado como traición por la población y liderazgo palestinos. Solo Irán y Turquía, potencias musulmanas no árabes, han condenado públicamente los pactos, presentándose como grandes defensoras de la causa palestina. En cuanto a la Administración Biden, no es probable que estos acuerdos constituyan la piedra angular de su estrategia en Oriente Medio, donde su prioridad es el restablecimiento de un proceso destinado a contener el programa nuclear iraní.

Más allá del Proceso de Paz

La entente Israel-Emiratos Árabes Unidos-Baréin abre nuevos focos de tensión, mientras el conflicto palestino se desliza cada vez más hacia el anonimato.

Giuseppe Dentice

El año 2020 fue importante para Oriente Medio y, en particular, para la evolución del proceso de paz israelí-palestino y todas las implicaciones reales (incluidas las geopolíticas) derivadas del mismo. La propuesta de paz de Estados Unidos, representada por el llamado “Acuerdo del Siglo”, el anuncio de un plan unilateral israelí para anexionar los territorios ocupados en Cisjordania y los acuerdos para la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y las monarquías árabes del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin (conocidos también como Acuerdos de Abraham), representan elementos importantes que se reflejan en el marco del proceso de paz de Oriente Medio, pero también forman parte de una iniciativa diplomática y geopolítica más amplia promovida por EEUU para transformar el paradigma político y de seguridad contemporáneo de la región. Las claves para entender la entente entre Israel-EAU-Baréin están precisamente en el intento de EEUU de superar el conflicto israelí-palestino con el fin de crear un frente unido de nuevos socios (más que aliados) contra la amenaza (percibida) de Irán y Turquía. De hecho, asistimos a la idea de un nuevo Oriente Medio que intenta superar uno de sus temas más divisorios (como es la cuestión israelí-palestina) para construir un sistema regional original.

Origen y evolución de los Acuerdos de Abraham

Aunque inesperados, pero no del todo impredecibles en la dinámica siempre fluida de la política de Oriente Medio, los Acuerdos de Abraham entre Israel y EAU (13 de agosto de 2020) plantean la intención de abrir nuevos escenarios en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), que ya lucha con múltiples líneas de ruptura. Un acuerdo muy importante que, además del intercambio de embajadores y la apertura de oficinas diplo-

máticas (EAU, sin embargo, ha abierto su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén), prevé la firma de protocolos bilaterales en comercio internacional y marítimo, seguridad, turismo, tecnología y telecomunicaciones, pero también en los sectores como agricultura, inteligencia, defensa, salud y energía. Menos de un mes después (11 de septiembre de 2020), Baréin siguió el ejemplo de Emiratos (probablemente Manama hará lo mismo con su embajada) y se convirtió en el segundo país del Golfo en normalizar las relaciones con Israel. El 15 de septiembre, Emiratos Árabes Unidos y Baréin normalizaron formalmente los lazos con Israel mediante la firma de una declaración oficial en Washington, durante la presidencia de Donald Trump.

Si bien se hace referencia al contexto del proceso de paz, los Acuerdos de Abraham son muy diferentes a otras iniciativas del pasado (por ejemplo, los acuerdos –esos sí de paz– con Egipto en 1979 y Jordania en 1994). De hecho, los acuerdos en cuestión ni acercan ni alejan las perspectivas de paz en Oriente Medio, pero representan un elemento novedoso en la medida en que están vinculados a múltiples factores que no son centrales para la cuestión palestina y, en cambio, son mucho más relevantes para la geopolítica y la geoestrategia regional de los agentes directamente implicados en estas dinámicas. En este sentido, los acuerdos entre Israel-EAU-Baréin parecen prefigurarse como multiplicadores de situaciones límite, con efectos visibles ya en el corto-medio plazo. En esencia, son entendimientos que se entredan y al mismo tiempo corren el riesgo de motivar nuevas tensiones en las que, sin embargo, el conflicto palestino se desliza cada vez más hacia una condición de anonimato, abriendo una etapa de “nueva normalidad” en Oriente Medio. Los acuerdos, en general, pueden dar un cierto impulso a los alineamientos regionales, especialmente en las relaciones entre Israel y los actores árabe-africanos, para adoptar soluciones parecidas. Por ejemplo, Sudán y Marruecos firmaron acuerdos similares con Israel, el 23 de octubre y el 12

Giuseppe Dentice es director de la Oficina MENA del Centro de Estudios Internacionales/Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.).

de diciembre de 2020 respectivamente, contribuyendo a forjar un nuevo mapa de la política exterior israelí en la región.

En otras palabras, estos acuerdos se presentan como dos iniciativas capaces de dar un cierto punto de inflexión en los alineamientos en Oriente Medio, sin alterar el marco político de relaciones ya surgidas en la región tras el acuerdo nuclear iraní entre los líderes del P5+1 y Teherán, el 14 de julio de 2015. No es casualidad que los primeros intentos de convergencia y colaboración extraoficiales entre israelíes y agentes del Golfo se remonten a esos años. De hecho, algunos analistas políticos se quedaron atónitos cuando en una reunión pública organizada por el Council on Foreign Relations en Washington (15 de junio de 2015) encontraron al general saudí, Anwar Eshki, y al embajador israelí, Dore Gold –figuras relevantes e influyentes en sus respectivos lugares de origen–, discutiendo sobre los desafíos y amenazas del futuro de Oriente Medio. Desde ese encuentro y siguiendo esta perspectiva, por tanto, el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos no representa un factor de novedad absoluta, ya que las relaciones bilaterales entre los dos países han sido extraoficialmente sólidas durante al menos una década y las convergencias tácticas y estratégicas son igualmente evidentes en varios expedientes regionales (frentes anti-iraní y anti-turco, y contra los regímenes sensibles al islam político). No obstante, el acuerdo presenta una secuencia de efectos y consecuencias que se ramifican y afectan a múltiples dimensiones simultáneas, en particular, al principal invitado de piedra de estas discusiones, el proceso de paz de Oriente Medio.

Impactos regionales de los Acuerdos de Abraham

Aunque la cuestión israelí-palestina sea un tema muy vivo y sentido por la opinión pública de Oriente Medio –incluso en los años posteriores a los acuerdos de Oslo (1993), como el fracaso de los acuerdos de Camp David II (2000)–, desde la década de los 2000, el dossier ha influido poco en las agendas políticas de las principales cancillerías de Oriente Medio, resultando en ocasiones un deber demasiado gravoso de sostener, a pesar de la retórica oficial que sugiere una gran atención y apego a las condiciones de los palestinos. También en virtud de esto, el proceso de paz siempre se ha presentado como funcional a las ambiciones y aspiraciones de la potencia regional del momento: en el pasado lo fue para Egipto, mientras que hoy es un ganador en las visiones de la diarquía de los saudí-emiratíes. El proceso de paz no es solo la pieza pendiente del acuerdo del 15 de septiembre; aunque no se mencione directamente en el texto, los signatarios lo convierten en instrumento y

“moneda de cambio” para definir otros debates y aspectos mucho más destacados en sus respectivas agendas de política exterior. En esencia, el proceso de paz ha vuelto a ser un instrumento de legitimidad política más que un objetivo final para garantizar y proteger las justas ambiciones palestinas. Para Israel, estaba en juego un tablero diplomático más amplio que involucrara directamente a la segunda economía árabe y a un actor árabe principal en el apoyo a las estrategias de Tel Aviv en Oriente Medio. Además, el acuerdo también fue instrumental para la “pequeña Esparta”, que garantizaba el acceso privilegiado a determinados activos (seguridad, tecnología y telecomunicaciones) en los que Israel es la auténtica potencia regional. En ambos casos, el uso funcional del conflicto palestino era necesario para el propósito común: para Emiratos Árabes Unidos, el acuerdo tenía que mostrar la imagen de un país fuerte y capaz de no sucumbir al enemigo histórico israelí, mostrándose como una potencia resuelta capaz de construir una narrativa positiva (nacional y regional) del acuerdo mismo, también a favor de las supuestas aspiraciones palestinas. Para Israel, el acuerdo es un éxito total porque representa su aceptación definitiva como actor y parte integral de Oriente Medio. Esto también ha sido claramente un éxito diplomático que ha contribuido a fortalecer la imagen interna de Benjamín Netanyahu en Israel.

Los Acuerdos de Abraham, en cierto sentido, suponen una continuidad de todas las demás experiencias del pasado, en las que son los agentes regionales e internacionales los que hacen sopesar los intereses partidistas, decidiendo también el destino de los palestinos, cada vez más divididos entre ellos. Claramente, el acuerdo israelí-emiratí fue percibido por los palestinos como una traición en la que ven desaparecer no solo las oportunidades de paz real en la región, sino también, y, sobre todo, la posibilidad de tener el establecimiento de un auténtico Estado independiente en Cisjordania, sin que Israel lleve a cabo los proyectos de anexión previstos por el “Acuerdo del Siglo” (o plan Trump). En otras palabras, este acuerdo reconoce y determina inequívocamente una normalización del *status quo*, que es la ocupación militar israelí de Cisjordania, aunque en la retórica del acuerdo, los israelíes y los emiratíes expresan una relectura sesgada sobre el tema de la anexión. De hecho, según los emiratíes, Israel no llevará a cabo más anexiones, reconociendo *de facto* como legítimas las realizadas hasta ahora (en este sentido, ¿deben entenderse como tales tanto el Golán como Jerusalén Oriental?) y favoreciendo indirectamente una reedición del plan Abdallah de 2002. Por el contrario, desde el punto de vista de Tel Aviv, el acuerdo con Abu Dhabi no cuestiona el proyecto de anexión del 30-40% de Cisjordania, como también contempla el plan Trump. También a la luz de esto, la hipótesis de que el acuerdo firmado en-



Firma de los acuerdos de normalización de las relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en la Casa Blanca. Washington, 15 de septiembre de 2020. /PHOTO BY THE WHITE HOUSE/TIA DUFOUR/HANDOUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

tre Israel y Emiratos Árabes Unidos pueda presentarse como un acuerdo sobre un modelo binacional o federal (también mencionado en los primeros borradores del plan Trump), en el pasado se habría descartado y rechazado en el mundo árabe, pero hoy se presenta una opción.

Impacto internacional de los Acuerdos de Abraham

En este sentido, el acuerdo del 15 de septiembre incorpora plenamente las pruebas indirectas del proyecto estadounidense: dividir al frente árabe; fomentar la interdependencia entre los países socios de Washington y Tel Aviv, incluso mediante una serie de acuerdos económicos y de seguridad; y crear un nuevo contexto regional con el “frente pragmá-

tico árabe”, el primer escudo militar contra los enemigos de Estados Unidos e Israel (la referencia a la Alianza Estratégica de Oriente Medio, más conocida como la “OTAN Árabe”, se hace evidente aquí). Si la referencia principal es Irán y sus representantes regionales (Hezbolá *in primis*), las referencias subyacentes a las fuerzas del islam político y a los Estados que han apoyado estas opciones a lo largo de los años (Catar y Turquía) no son menos importantes. Aunque Doha y Ankara son aliados de Estados Unidos y tienen relaciones fluctuantes con Tel Aviv, sus respectivas posiciones geopolíticas e intereses corren el riesgo de entrar en conflicto con Israel y EEUU. También por este motivo es muy importante que Washington y Tel Aviv creen un nuevo escenario favorable de alineaciones regionales, en el que los principales países árabes (Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) apoyen las iniciativas israelíes dividiendo aún

más a los no alineados (como en el caso de la delicada posición jordana, contraria al plan Trump e, indirectamente, al acuerdo entre Abu Dabi y Tel Aviv), pero también apoyando las inusuales sinergias israelí-emiratíes en el Mediterráneo, entre Líbano y la Franja de Gaza. Con esto en mente, Israel apunta cada vez más a vincularse a Emiratos también para contener las influencias turco-cataríes e iraníes en la Franja de Gaza, donde a lo largo de los años Ankara, Doha y Teherán han forjado fuertes lazos con Hamás. De hecho, Israel ve en Emiratos la posibilidad de influenciar en Hamás de una manera instrumental para sus intereses de seguridad, dividiendo aún más el campo palestino y permitiendo que Abu Dabi desempeñe un papel importante en la cuenca del Mediterráneo-Oriente Medio.

Al mismo tiempo, no es de extrañar que los Acuerdos de Abraham se vinculen también a los proyectos geopolíticos de Estados Unidos en Oriente Medio, proporcionando así el trasfondo ideológico sobre el que se implantaron otras iniciativas, como por ejemplo la Alianza Estratégica de Oriente Medio (MESA), el proyecto de cooperación político-militar de Oriente Medio patrocinado abiertamente por la presidencia Trump y perseguido a través de la combinación "Acuerdos de Abraham-Acuerdo del Siglo". Este proyecto multidimensional ha sido ampliamente apoyado por Israel, Arabia Saudí y EAU y representa un importante factor de cambio en un futuro de Oriente Medio pos-americano. También a la luz de esto, los rivales internacionales (como Rusia y China) y las potencias regionales (como Irán y Turquía) podrían, de alguna manera, intentar llenar la brecha política y de seguridad dejada por Washington, proponiéndose como nuevos actores indispensables en Oriente Medio. Ante esta perspectiva, la presidencia de Joe Biden podría confirmar el planteamiento de su antecesor, delegando en parte a los socios regionales tareas precisas en los campos de gestión, seguridad y defensa de sus intereses políticos, energéticos y comerciales. En esencia, la Casa Blanca podría intentar convencer a los socios de la necesidad, así como de la conveniencia, de invertir más recursos en sus defensas nacionales que, en un futuro próximo, serán fundamentales en el desarrollo de un dispositivo de seguridad colectiva mutua. Un mayor reparto de la carga y una mejor capacidad militar de los socios de Oriente Medio permitirían a Washington concentrar su atención en otras zonas estratégicas (como la región del Indo-Pacífico), como también se expresa en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.

Por tanto, la Administración Biden podría confirmar esta tendencia, fomentando una mayor cooperación e interdependencia entre los actores de Oriente Medio, incluso a nivel oficial. El objetivo final es impulsar un cambio global en la relación Golfo-Israel, pasando de una simple y limitada convergencia de inte-

reses a un verdadero diálogo estratégico de seguridad regional, que quizás también incluya a algunos socios europeos (Francia en primer lugar), y que garantice mayores perspectivas de estabilidad a favor de una desconexión militar y política ordenada de Estados Unidos en la zona.

Conclusiones y perspectivas

Si los acontecimientos en curso apuntan a lanzar un proceso general de transformaciones políticas en toda la región, involucrando directamente a Irán y Turquía en un contexto competitivo, pero menos polarizado, esto conducirá casi definitivamente a dejar de lado la cuestión israelí-palestina en favor de la estabilidad del sistema de Oriente Medio. Por el contrario, si las iniciativas descritas hasta ahora apuntan a un relanzamiento de las negociaciones israelí-palestinas, es difícil entender cómo podrían suceder, teniendo en cuenta la pérdida de autoridad y el descrédito sufrido por la parte negociadora palestina ante una situación cada vez más compleja y en un entorno positivo para Israel. Más allá de cualquier hipótesis, hay una certeza: la solución de dos Estados es cada vez menos aplicable.

En conclusión, los Acuerdos de Abraham son algo diferente que no tiene comparación con el pasado y que experimenta los efectos de la contemporaneidad, ligado a factores no directamente centrados en la cuestión palestina, sino mucho más relevantes, como son elementos de geopolítica, estrategia regional o, en definitiva, de orientación de la política exterior por parte de los actores de Oriente Medio. En este sentido, el acuerdo parece verse a sí mismo como un multiplicador y amplificador de situaciones extremas, con efectos visibles ya en el corto y medio plazo. Básicamente, un acuerdo que enreda y al mismo tiempo abre nuevas tensiones, en las que, sin embargo, el conflicto palestino se desliza cada vez más hacia una condición de anonimato, abriendo una etapa de nueva normalidad. ■

Acuerdos de Abraham: perspectivas regionales

La normalización de las relaciones de algunos países árabes con Israel supone una ruptura geopolítica y un cambio de paradigma en la región. La duda es saber si otros podrían dar el paso.

Elisabeth Marteu

Los Acuerdos de Abraham, firmados el 15 de septiembre de 2020 tras una larga negociación a tres bandas entre Israel, dos Estados del Golfo (Emiratos Árabes Unidos y Baréin) y Estados Unidos, han marcado un punto de inflexión en la geopolítica de Oriente Medio. La victoria del realismo geopolítico sobre el simbolismo transnacional de la causa palestina ha suscitado escasas reacciones en los gobiernos del mundo árabe. A la prudencia de los mandatarios, deseosos de salvaguardar las buenas relaciones con la administración Trump, se ha sumado el desinterés de una parte de la opinión pública árabe, así como el temor a disentir y ser objeto por ello de una dura represión. La “facilidad” con que la población de la región ha comprado el principio de “paz árabe-israelí sin paz israelí-palestina” podría empujar a otros dirigentes a dar el paso, como Sudán y Marruecos que normalizaron sus relaciones con Israel en octubre y diciembre de 2020, respectivamente. Sin embargo, la formación de una nueva Administración en Estados Unidos debería frenar estas veleidades, pues el equipo de Joe Biden está más interesado en restaurar las relaciones con Irán que en propiciar el acercamiento entre Israel y sus vecinos árabes.

Los Acuerdos de Abraham, ¿símbolo de la transformación del mundo árabe?

Históricamente, ha existido un consenso entre los Estados árabes en virtud del cual ninguno tendría relaciones con Israel, al que consideran un país enemigo. La resolución de Jartum, votada el 1 de septiembre de 1967, tras una cumbre de la Liga Árabe, por ocho países (Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Argelia, Kuwait y Sudán), explicitaba en su párrafo tercero la llamada regla de los “tres noes”: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel.

El primer país árabe en romper este consenso fue Egipto, con el tratado de paz de Camp David de 1978;

le siguió Jordania, tras los acuerdos de Oslo de 1993. Si bien formalizaban un reconocimiento mutuo, estos acuerdos no permitieron normalizar y agilizar los intercambios entre las poblaciones de los respectivos países. Las relaciones siguieron siendo esencialmente económicas (circulación de mercancías, intercambio de energía, etc.) y de seguridad, entre las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. El resto de países árabes han mantenido una posición oficialmente anti-israelí en el seno de la Liga Árabe, pero las posturas nacionales han sido diversas y, a veces, contrarias entre sí. Argelia, Libia, Siria e Irak, que en su día pidieron el boicot a Egipto, han defendido siempre una línea dura. Marruecos y Omán, por su parte, han adoptado una postura moderada y aun indiferente. Las relaciones entre Israel y Túnez, país que dio cobijo a los dirigentes de la Organización para la Liberación de Palestina (incluido su número dos, Abu Yihad, asesinado por el Mossad en Túnez capital en 1988), han evolucionado en consonancia con la situación palestina. En el Golfo, el plan de paz propuesto en 1981 por el príncipe heredero saudí, Fahd ibn al Aziz, hacía de la resolución del conflicto israelí-palestino una condición *sine qua non* para la seguridad regional. En los años noventa y 2000 se produjo un discreto acercamiento entre Israel, Catar y Omán y, más tarde, Baréin y EAU, merced al nombramiento de Mohamed bin Zayed como príncipe heredero de Abu Dabi y ministro de Defensa de la federación en 2004. En 2002, los saudíes presentaron un nuevo plan de paz, conocido como “Iniciativa de Paz Árabe”, que proponía el reconocimiento de Israel como contraprestación a la creación de un Estado palestino.

EAU, Baréin y Marruecos nunca han sido, pues, la punta de lanza en el activismo antiisraelí. Cada uno ha encontrado un interés estratégico nacional en la normalización con Israel (en el caso de Abu Dabi y Manama, un frente común contra Irán y Turquía; en el de Rabat, el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental). Además, ninguna de estas monar-

Elisabeth Marteu es doctora en Ciencia Política, profesora en Sciences Po Paris.



Hombres palestinos protestan para condenar la normalización de las relaciones entre Israel y Baréin. Franja de Gaza, 12 de septiembre de 2020. /MAHMUD HAMS/AFP VIA GETTY IMAGES

quías ha encontrado oposiciones internas. Los Acuerdos de Abraham reflejan, por tanto, una importante ruptura geopolítica y un cambio de paradigma en el mundo árabe, en el cual la causa palestina parece no actuar ya como cemento ideológico y para el que Israel ha dejado de ser el principal enemigo. Los gobiernos se vuelcan ahora en sus propios intereses y seguridad nacional, en una región traumatizada por las revueltas árabes de 2011, los apresurados cambios de régimen y el afianzamiento de la amenaza terrorista a largo plazo.

Ahora se plantea la cuestión de si otros países árabes podrían dar el paso de la normalización. EEUU ha presionado a Omán y a Arabia Saudí: Mascate parece querer salvaguardar la paz en las relaciones con Irán y mantenerse al margen de los conflictos regionales. Riad, por su parte, se muestra intranquilo y teme que un acercamiento a Israel pueda echar por tierra su posición como cabeza del mundo suní y guardián de los lugares santos del islam. El hecho de que EAU haya sido el primer país en aceptar la normalización en 2020 atestigua su papel cada vez más protagonista en la región. La federación ocupa un lugar central en el espectro político de Oriente Me-

dio y se presenta como un aliado inquebrantable de Washington, principal artífice del acercamiento árabe-israelí. Los Acuerdos de Abraham (a los que han seguido los acuerdos firmados por Sudán y Marruecos) echan así por tierra la iniciativa de paz saudí de 2002. Los saudíes saben que corren el riesgo de quedar al margen. Sin embargo, la normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel aún no se ha consensuado internamente y es probable que se aplace hasta el final del mandato del rey Salmán. Dependerá también del futuro político del príncipe heredero, Mohamed bin Salman (MBS), quien se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de un acercamiento a Tel Aviv.

La nueva administración Biden, impaciente por reevaluar sus relaciones con el heredero saudí (Bin Salmán estaría involucrado en el asesinato de Yamal Jashoghi, según un informe desclasificado de la inteligencia estadounidense) y también por retomar el acuerdo nuclear con Irán, no augura una nueva ola de normalizaciones bajo mediación americana. Los asesores sobre Oriente Medio de Biden quieren romper con la política exterior de Trump, si bien su prioridad no es promover el acercamiento de Israel a los países árabes ni

respaldar un frente antiiraní. Ya se ha anunciado la reapertura de la representación palestina en Washington y el restablecimiento de la ayuda humanitaria (especialmente por mediación de la UNWRA). En este sentido, es poco probable que Washington siga mediando con Omán y Arabia Saudí en lo que respecta al restablecimiento de las relaciones árabe-israelíes. Por el contrario, es muy probable que siga estrechándose la relación entre Tel Aviv y Riad, pues ambos países comparten temores con respecto a Irán y la vuelta de EEUU al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

La opinión pública árabe y la cuestión palestina

En una encuesta realizada por el Arab Barometer entre 2018 y 2019, a la pregunta de si unos acuerdos de normalización con Israel podrían resultar beneficiosos para el mundo árabe, respondió afirmativamente el 32% de los sudaneses, el 23% de los egipcios, el 19% de los libaneses, el 14% de los jordanos, el 13% de los marroquíes, el 12% de los argelinos y el 9% de los tunecinos. Otra encuesta realizada por el mismo organismo en noviembre de 2020 en Argelia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos y Túnez mostró que menos de uno de cada 10 ciudadanos árabes estaba a favor de los Acuerdos de Abraham. Las críticas fueron especialmente duras en Jordania (3% a favor) –poblada por una mayoría de palestinos y de descendientes palestinos– Libia (7%), Túnez (8%) y Marruecos y Argelia (9%). La sorpresa la dio Líbano, que resultó ser el país más favorable al acuerdo de normalización con Israel, aunque con un apoyo inferior al 20%. Estas cifras, sin embargo, merecen analizarse en función de la confesión religiosa, pues expresaron su apoyo a los acuerdos la mitad de los cristianos, frente a solo el 11% de los drusos, el 6% de los sunfes y menos del 1% de los chiíes. Estos datos reflejan las diferentes sensibilidades políticas heredadas de la historia de cada uno de estos grupos confessionales en Líbano (son factores de peso la postura mantenida durante la guerra de Líbano, el peso de Hezbollah, etcétera).

La variable generacional no parece demasiado relevante, pues en Líbano los más favorables a la normalización son los mayores de 30 años, mientras que en Argelia lo es la población de entre 18 y 29 años. En el primer caso, esto podría ser un síntoma de fatiga; en el segundo, revelaría el deseo juvenil de dejar atrás la sistemática oposición a Israel. Que este grupo de edad tenga una imagen más positiva de Israel podría estar relacionado con la desconfianza que los jóvenes expresan hacia sus propios líderes. En resumen, el principal enemigo de la región no sería ya Tel Aviv, sino los propios gobiernos de los países árabes, a me-

nudo agotados, corruptos e incapaces de satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía. En cualquier caso, los datos recopilados siguen sin ser lo suficientemente consistentes como para extraer conclusiones generales. Para ello deberían cruzarse datos como la edad con otras variables, como el nivel socioeconómico, la participación en el mercado laboral y los antecedentes activistas. Los círculos militantes, ya sean asociaciones de derechos humanos o movimientos de oposición (chiíes en la península Arábiga, Hermanos Musulmanes, etc.) son más proclives a defender la causa palestina. En la estela del panarabismo, del panislamismo y de los movimientos transnacionales de derechos humanos, estos grupos mantienen una postura fuertemente contraria a Israel y EEUU.

Así pues, la mayoría de la opinión pública árabe sigue oponiéndose a los acuerdos de normalización con Israel si no se da previamente una solución a la cuestión palestina, lo que discrepa claramente con la postura política de varios gobiernos de la región. Con todo, las posturas generales han evolucionado claramente y son pocos los que hoy día se oponen públicamente a sus gobiernos en este asunto. Los acuerdos firmados con EAU, Baréin, Sudán y Marruecos no han suscitado grandes protestas ciudadanas en el mundo árabe. No se han producido pronunciamientos masivos, más allá de las críticas en redes sociales y algunos medios opositores, a las que se han sumado algunas manifestaciones (como las celebradas en los Territorios Palestinos o las convocadas por grupos islamistas en Marruecos, por ejemplo).

La normalización está siendo mejor acogida en la península Arábiga. Una encuesta realizada por The Washington Institute for Near East Policy en noviembre de 2020 puso de manifiesto la positiva evolución de la opinión pública sobre Israel en EAU y Arabia Saudí. Los emiratíes (47% a favor) y bareiníes (45%) son los más entusiastas con la normalización, seguidos de los saudíes (41%) y los catáríes (40%). Estas cifras contrastan con las del Levante mediterráneo y el Norte de África. Destaca asimismo lo rápidamente que se ha alineado la opinión pública con las decisiones del gobierno: en 2018, el 44% de los encuestados emiratíes se oponía a establecer relaciones con Israel; en junio de 2020, solo el 4% de los ciudadanos emiratíes apoyaba tener relaciones comerciales y deportivas; en octubre, tras la firma de los Acuerdos de Abraham, este porcentaje alcanzó el 18%. Independientemente de que los entrevistados procurasen no criticar a sus dirigentes en público, estas cifras muestran un cambio claro en percepciones y opiniones. A la pregunta de cuáles deberían ser las prioridades de la nueva administración estadounidense, el 28% de los saudíes respondió “encontrar una solución al conflicto israelí-palestino”, mientras que el 25% consideraba que “se debería trabajar para acotar la influencia y actividades de Irán”.

La idea defendida por Donald Trump y Benjamín Netanyahu de que una paz árabe-israelí no debía depender ya de la paz entre Israel y Palestina parece imponerse de este modo en una parte de la opinión pública árabe, tanto por la “normalización” del lugar de Israel en Oriente Medio como por la necesidad de volcarse en problemas internos más inmediatos.

Los palestinos son conscientes del desinterés y la fatiga que una parte de la región muestra hacia su situación. Según una encuesta realizada en septiembre de 2020 por el Palestinian Center for Policy and Survey Research, el 86% de los palestinos encuestados creía que el acuerdo con EAU solo beneficiaba a Israel, el 80% calificaba la normalización de “traición”, “abandono” o “insulto”, y el 70% opinaba que otros países árabes seguirían la estela de EAU. Estas desilusionadas reacciones iban acompañadas de un importante descenso en el número de palestinos que seguían creyendo en la solución de los dos Estados: solo un 39% en septiembre pasado, frente al 45% tres meses antes.

Las potencias no árabes (Turquía e Irán): nuevos adalides de Jerusalén y los palestinos

El realismo geopolítico de las capitales árabes se ha materializado en la ausencia de una condena –ya sea por parte de los gobiernos nacionales o de la Liga Árabe– a los acuerdos de normalización. Muchos países árabes han visto en su aceptación –tácita o expresa– un medio de apaciguar o fortalecer sus relaciones con Washington. Solo la Autoridad Palestina convocó una reunión de urgencia, al final de la cual denunció la “traición a Jerusalén, Al Aqsa y la causa palestina” por parte de EAU y otros países árabes.

Los únicos países de la región que han condenado públicamente los acuerdos de normalización han sido Irán y Turquía, potencias musulmanas no árabes que ahora se presentan como principales defensoras de Jerusalén y de la causa palestina.

En las décadas de los cincuenta y setenta, Israel e Irán, aliados no árabes de EEUU, mantuvieron relaciones comerciales y de seguridad en un contexto de auge tanto del ascenso soviético como del panarabismo. La “doctrina de la periferia” desarrollada por el fundador de Israel, David Ben Gurión, que consistía en forjar alianzas con países no árabes, promovió naturalmente el acercamiento a la monarquía iraní prooccidental. Tanto es así que, en 1977, el sha de Irán y Shimón Peres, entonces ministro de Defensa de Israel, firmaron un acuerdo secreto de cooperación balística. Este acuerdo fue cancelado tras la revolución islámica de 1979, cuando el ayatolá Jomeini denunció los vínculos del sha con Israel, aliado de EEUU. Desde entonces, el discurso antiisraelí y antisionista de la República Islámica no ha he-

cho más que afianzarse, especialmente bajo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013). Así, Irán ha tildado los Acuerdos de Abraham de “estupidez estratégica”, afirmando que “reforzarán el eje de la Resistencia” en la región y asegurando que la normalización de las relaciones con el Estado de Israel “no será perdona da”.

Turquía fue el primer Estado de mayoría musulmana que reconoció a Israel, en 1949. Además, adoptó una política de neutralidad respecto al conflicto israelí-palestino durante la guerra fría. Israel y Turquía estrecharon lazos y profundizaron sus relaciones económicas a lo largo de la década de los noventa. No obstante, tras las tensiones suscitadas por la operación israelí “Plomo Fundido” contra la Franja de Gaza (diciembre de 2008-enero de 2009), las relaciones entre Turquía e Israel se deterioraron de forma notable en 2010, a raíz del abordaje del buque turco Mavi Marmara. Desde entonces, las relaciones bilaterales no han vuelto a la situación anterior a la crisis. De hecho, desde su elección, en 2014, Recep Tayyip Erdogan se presenta como el heraldo de la causa palestina. Turquía acoge a militantes de Hamás, y convocó la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica cuando Estados Unidos reconoció Jerusalén como capital de Israel, en 2017, y acusó a Tel Aviv de “terrorismo de Estado” y “genocidio” tras la nueva operación militar israelí contra Gaza, en 2018. Sin embargo, Turquía nunca ha cortado sus vínculos económicos con Israel, e incluso ha dado señales de apaciguamiento tras la elección de Biden, consciente de su aislamiento en el Mediterráneo y Oriente Medio y deseosa de hacer llegar a sus aliados un mensaje de buena voluntad. Pero para Ankara, con la firma de los Acuerdos de Abraham, EAU “traiciona la causa palestina por sus intereses”, lo que supone una “hipocresía imperdonable”. Las diatribas turcas contra Emiratos se inscriben en una inestable coyuntura regional, que enfrenta, por un lado, a los partidarios del eje contrario a los Hermanos Musulmanes e Irán (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Baréin, Arabia Saudí, apoyados por Israel y Jordania) y, por otro, a Turquía, Catar e Irán, que convergen circunstancialmente.

En este sentido, la cuestión palestina, y, con ella, la del tercer lugar más sagrado del islam, parece imponerse como una nueva falla en la rivalidad geopolítica que mantienen las potencias regionales musulmanas. Debido a la exasperación del pueblo palestino y el deterioro de su liderazgo político, la causa palestina podría bien quedar al cargo de dos potencias no árabes de la esfera política islámica, bien favorecer el acercamiento a formas más radicales de contestación de los regímenes árabes, a menos que la nueva Administración estadounidense se proponga mediar de nuevo en el conflicto israelí-palestino para reequilibrar su diplomacia en Oriente Medio. ■

Palestina y los acuerdos arabo-israelíes: ‘¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?’

Los acuerdos han sido recibidos con escepticismo por la población y como una traición a la causa palestina.

Itxaso Domínguez de Olazábal

En la última escena de la historia de *Hombres en el Sol*, parte de la reputada *Trilogía Palestina* del autor palestino Ghassan Kanafani, tres refugiados palestinos de generaciones diferentes, escondidos en un camión cisterna en busca de una vida mejor en Kuwait, mueren sofocados. Cuando el conductor del camión descubre sus cuerpos, se pregunta compungido por qué no avisaron de lo grave de su situación: “¿Por qué no golpearon las paredes de la cisterna? ¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?”. A pocos escapa hoy el paralelismo de este acto con la realidad que atraviesa el pueblo palestino, a pesar de que sus miembros llevan años advirtiéndonos de ello a lo largo de las varias etapas de su toma de conciencia.

Acuerdos de normalización y anexión: del ‘de facto’ al ‘de iure’

Los acuerdos de normalización entre Israel y varios países árabes han sido presentados como un punto de inflexión para la causa palestina. Aunque todavía es pronto para afirmar si esto es así, muy particularmente en vista de que la realidad global nos ha enseñado a no dar nada por sentado, es innegable que son numerosos los sucesos que de una u otra forma han afectado a la causa palestina a lo largo de los últimos meses y años. Muchos de ellos presentan un patrón que podríamos denominar “del *de facto* al *de iure*”, que arroja luz sobre lo estructural de gran parte de las cuestiones que engloban el contexto en la Palestina histórica, en especial el conflicto palestino-israelí: la realidad sobre el terreno presenta unas dinámicas particulares con las que los palestinos han aprendido a sobrevivir, pero que no resultan aparentes ante el resto del mundo hasta que no son consagradas por un actor externo. El anuncio israelí de anexionar una porción de Cisjordania el 1 de julio de 2020 representaba un ejemplo destacado de formalización de una anexión que ya existe *de facto* en una “realidad de un Estado” de soberanía israelí en el conjunto del antiguo mandato británico. Así, con la aten-

ción del planeta en un único acto, se consigue desviar la atención de la realidad sobre el terreno y moldear la narrativa en torno a la misma.

En el caso de los acuerdos de normalización, estos también simbolizan el reconocimiento de una situación real pero no publicitada ni formalizada, y por este motivo han sido recibidos con escepticismo entre un número considerable de palestinos, conocedores de las relaciones que ya existían y se fortalecían, en varios ámbitos, entre varios países árabes e Israel. En este sentido, resulta interesante analizar la evolución del apoyo real –más allá de las declaraciones de solidaridad de cara a la galería–, político y económico, a la causa palestina a lo largo de las décadas, marcada por la instrumentalización de la desposesión de los palestinos para favorecer los intereses de distintos régimenes a nivel regional, pero también global. En la actualidad, y de forma crítica tras la primera guerra del Golfo, los palestinos llevan tiempo siendo considerados un “peso”, cada vez menos justificable de cara a nuevas tendencias en el sistema estatal árabe, poco alineadas con el contexto en el que fue suscrita la Iniciativa de Paz Árabe (IPA), de cara a las respectivas prioridades nacionales, a un campo político internacional distinto, e incluso a una parte de las élites (sobre todo en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo). La penúltima muestra de este hastío la representó el apoyo sin dubitaciones, pero con distintos niveles de publicidad, de las capitales del Golfo arábigo al mal llamado “Acuerdo del siglo”, como evidenció el foro “Peace to Prosperity” para presentar los aspectos económicos de la estrategia, celebrado en Manama (Baréin) el 25 de junio de 2019.

Una ‘traición’ a la causa palestina

De cara a la galería, que era donde estos países más profusamente han puesto énfasis en su defensa de los derechos palestinos, estas recientes decisiones han representado una traición para la causa palestina, y así es como ha sido percibido y presentado prin-

cipalmente por el liderazgo palestino, abandonado por los que consideraba sus aliados tradicionales. Figuras importantes de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) condenaron la normalización como una “puñalada” y una desviación de la IPA. Rechazaron los Acuerdos de Abraham con desdén como una excusa de emiratíes y barainíes para perseguir sus propios intereses, sin interés genuino por el cacareado aplazamiento de la anexión por parte de Israel. Incluso en el caso de que este aplazamiento hubiese representado un pilar de estas negociaciones –y esto está por ver, ya que toda la operación bien podría haber sido una estrategia de Israel para ser recompensado por no completar su amenaza–, la actividad ilegal de asentamientos israelíes, un pilar de la anexión *de facto*, continua en Cisjordania, y el bloqueo se mantiene sobre la Franja de Gaza.

A la imposibilidad de paz se añaden otras falsas promesas de potenciales ventajas de estos acuerdos para los palestinos, tanto en relación con un posible acuerdo de paz que siga los parámetros del formulado por la Administración Trump, como respecto a oportunidades como el turismo o el desarrollo tecnológico, en los que palestinos de un lado y de otro de la Línea Verde nunca han sido los beneficiarios preferentes. Mientras, un Israel más envalentonado explota la asimetría de poder en asuntos como el reparto de vacunas para la Covid-19 en Gaza y Cisjordania, o su ofensiva contra una investigación por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional. Las consecuencias negativas se hacen asimismo sentir para los palestinos en la diáspora que residen en regímenes autoritarios que han aceptado oficializar las relaciones bilaterales con Israel, como es el caso de Egipto (destaca el arresto del activista Ramy Shaath), o Emiratos Árabes Unidos, también en Jordania y Baréin.

La batalla por la supervivencia del liderazgo oficial palestino

Para el liderazgo oficial palestino, los recientes acontecimientos representan una amenaza suplementaria: ser percibidos como una evidencia de que su estrategia, eminentemente basada en la internacionalización de la causa palestina ante el fiasco



Un palestino comprueba el censo electoral para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebrarán en mayo y julio de 2021, respectivamente. Gaza, marzo de 2021. /MOHAMMED ABED/AFP VIA GETTY IMAGES

del “proceso de paz”, ha fracasado. Otros factores recientes que han contribuido a este pesimismo incluyen el daño causado por la ruptura de consensos multilaterales en torno al conflicto palestino-israelí por parte de Trump, una Europa esclerotizada ante la colonización israelí rampante, y una creciente percepción de que un liderazgo palestino avejentado no dispone de mecanismos, incluso quizás tampoco de voluntad, de avanzar en los derechos palestinos. Un caso de estudio privilegiado a este último respecto lo representan los reiterados anuncios de Mahmud Abbas de poner fin a la coordinación en materia de seguridad con Israel, seguidos de pronto restablecimientos de una cooperación que en última instancia garantiza la supervivencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y el sistema que con ella fue inaugurado en 1995. Aunque florecieron comentarios que apuntaban a que el liderazgo podría “radicalizarse” alineándose con Hamás, Irán y otros actores demonizados en la región, estos análisis no entienden hasta qué punto la ANP cooptada por Al Fatah, pero también Hamás, se ha comprometido con el lenguaje y discurso político del proceso de paz, en particular con la inevitabilidad de la solución de dos Estados independientemente de su viabilidad.

Hamás también condenó los acuerdos de normalización, sin por ello enmendar su estrategia o narrativa. En aras de supervivencia de ambas facciones, un corolario inmediato fue el relanzamiento de las conversaciones entre Al Fatah y Hamás. Mahmud Abbas imploró a Naciones Unidas el (re)lanzamiento de un “proceso de paz genuino”. Su círculo de poder tampoco disimuló la necesidad del liderazgo de volver a congraciarse con diferentes donantes internacionales, garantes de su longevidad ante una comprometida situación financiera. Los destinatarios principales son la nueva administración estadounidense y la Unión Europea, a través de un mensaje de que los líderes están listos para el *business as usual* en el marco de una “vieja normalidad” difícilmente compatible con el nuevo contexto. La única alternativa, y quizás esperanza, la representaba salvar los muebles mediante la celebración de elecciones para “renovar su mandato democrático”. Estos donantes han abrazado los acuerdos de normalización arabo-israelíes sin mostrar preocupación por las limitadas perspectivas de paz, y parecen únicamente interesados en una democracia nominal, esto es, en que los palestinos acudan a las urnas independientemente del contexto real de la arena política palestina.

Una vez que los acuerdos de normalización dejaron de ser noticia, desde la ANP se prohibieron, aunque discretamente, críticas mayores a estos pactos. Su reacción fue, en este sentido, completamente diferente ante el acercamiento oficial entre Israel y Marruecos. De forma similar a su postura ante donantes internacionales, el liderazgo oficial vuelve a erigirse como una entidad captiva de las expectativas internacionales, consciente de que no puede permitirse una enemistad con sus vecinos, ni desde el punto de vista político ni económico. Así, por ejemplo, fueron incapaces de conseguir que la Liga Árabe no se abstuviera de condenar los Acuerdos de Abraham.

La arena política palestina en un momento de transición

La sucesión de acontecimientos ha llegado, tal y como se ha señalado, en un momento clave para la causa palestina. La sensación de trascendencia se referiría tanto al cambio de paradigma que cada vez más actores proponen con respecto al conflicto palestino-israelí, con un rol destacado de los propios palestinos que reclaman un retorno al origen colonial del mismo y a la centralidad de la Nakba de 1948, pero también a las referencias crecientes al crimen de *apartheid* a lo largo y ancho del territorio de la Palestina histórica. La causa palestina también enfrenta un momento de cambio en lo que respecta a la arena política palestina, resultado de la combinación entre varias dimensiones: la generacional, la de frag-

mentación y reconstrucción entre campos políticos palestinos, y la de un cada vez mayor énfasis en los lazos interseccionales entre palestinos pero también en el seno de otros espacios de solidaridad internacional.

La celebración de elecciones es presentada como una prueba de fuego, pero son cada vez más los palestinos, sobre todo jóvenes, que denuncian que ninguna práctica puede ser realmente democrática en un marco autoritario y represivo que es el que representaría la ANP y Hamás. Varios informes de la red de intelectuales palestinos Al Shabaka ponen énfasis sobre esta fractura generacional y social. Denuncian, en este sentido, que los comicios planteados equivalen a celebrar las trampas de la condición de Estado en ausencia de genuina soberanía, como una de las ilusiones más insostenibles del sistema pos-Acuerdos de Oslo. Concretamente, solo los palestinos que viven en Cisjordania (con dudas de que Israel permita la participación en Jerusalén Este) y la Franja de Gaza serían potenciales participantes, confirmando la marginación desde hace años e incluso décadas a la que están sometidos los millones de palestinos no incluidos en esas categorías.

¿Qué hay de la comunidad internacional?

La sociedad interestatal se mantiene, sin embargo, apática ante la evolución del contexto en la Palestina histórica, en parte absorta por otros problemas y prioridades, en parte cautiva de su oposición férrea ante cualquier planteamiento alternativo del conflicto. La estrategia principal, consecuentemente, parece volcada en volver a exigir concesiones a los palestinos, prácticamente obligados a reanudar las negociaciones de paz con Israel en el marco de una conferencia de paz internacional. La puesta en marcha de elecciones permitiría al liderazgo oficial palestino adelantarse a las acusaciones israelíes en torno a su voluntad de negociar. De momento, nada parece indicar que el mismo tipo de presión será ejercida sobre Tel Aviv, lo que representaría una bendición implícita de su política de hechos consumados de larga data.

En el 30º aniversario de la Conferencia de Madrid, el principal riesgo lo representa aferrarse a la misma metodología que llevó a los Acuerdos de Oslo y, por lo tanto, a las insuficiencias y consecuencias perniciosas de los mismos, en un contexto en el que los palestinos son quizás aún más débiles, y en el que el respeto al derecho internacional no parece ser el caballo ganador. En un contexto en el que, sin embargo, también será crecientemente posible que las nuevas generaciones se cuestionen no solo la legitimidad, sino también la sostenibilidad, de los acuerdos adoptados por líderes gerontocráticos en nombre de una población que no ha renunciado a sus derechos inalienables. ■

Israel-Marruecos

El acuerdo entre ambos países implica el reconocimiento por EEUU de la anexión marroquí del Sáhara Occidental, un conflicto que el derecho internacional no ha sabido abordar.

Marina Ottaway

El acuerdo entre Israel y Marruecos alcanzado en diciembre de 2020 con la mediación de Estados Unidos es una negociación entre los dos países que proporciona a ambos beneficios sustanciales sin ningún coste. El acuerdo –anunciado el 10 de diciembre de 2020 por la Casa Blanca y no aplicado aún en su totalidad en el momento de escribir estas líneas– exige el mutuo reconocimiento y el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Marruecos e Israel, así como el reconocimiento estadounidense de la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, acción ilegal a tenor del derecho internacional. Tanto Israel como Marruecos salen ganando con el acuerdo. Israel obtiene el reconocimiento de un sexto país árabe (tras Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán) y, por su parte, Marruecos consigue que una gran potencia reconozca sus aspiraciones sobre el Sáhara Occidental, algo que persigue desde hace casi medio siglo. La Administración Trump no ganaba nada, aparte de demostrar su inquebrantable apoyo a Israel, pero tampoco perdía, pues no consideraba que quebrantar el derecho internacional tuviera coste.

Sin embargo, la negociación sí implica un peaje, que pagarán los saharauis, cuyo derecho a la autodeterminación en virtud del derecho internacional se ha desdido sin miramientos, y los palestinos, quienes ven cómo la comunidad árabe pierde fuelle en su determinación de no reconocer al Estado de Israel mientras no se solucione la cuestión palestina. Las víctimas colaterales de la negociación son las Naciones Unidas, apartadas de una cuestión de la que supuestamente estaban al cargo y, más ampliamente, la comunidad internacional.

Este acuerdo es fruto de diversos factores. Uno de ellos es, sin duda, el desprecio de la administración Trump por el derecho internacional y su apoyo incondicional a Israel, el mismo que le llevó a trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y a cambiar de opinión sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania el pasado mes de no-

viembre. El segundo factor de peso –que suele pasar por alto– es la fatiga internacional ante una coyuntura aparentemente irresoluble que parece prolongarse indefinidamente, tanto en los territorios palestinos como en el Sáhara Occidental. En marzo de 1979, meses después de que Israel y Egipto firmaran el tratado de paz de Camp David, los miembros de la Liga Árabe votaron la expulsión de Egipto y el traslado de la sede de la organización de El Cairo a Túnez (Egipto fue readmitido en 1989 y la sede de la Liga Árabe volvió a El Cairo en 1991). Entre 2020 y principios de 2021, sin embargo, otros cuatro países árabes decidieron reconocer a Israel, y apenas se produjeron algunas críticas veladas entre el resto de Estados árabes.

La crisis del Sáhara Occidental

La crisis del Sáhara Occidental se inició en 1975. Este territorio, que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Norte a Sur hasta Mauritania, tiene más de la mitad de la extensión total de Marruecos, pero apenas cuenta con unos 650.000 habitantes frente a los 35 millones de Marruecos. Aparte de los fosfatos y la pesca, no posee más recursos naturales conocidos y tampoco es un territorio agrícola ni industrial. Es posible que frente a su litoral haya yacimientos de petróleo, pero esto no ha sido confirmado.

Anteriormente, el territorio estuvo bajo control de España. Se trataba de una reliquia de las ambiciones coloniales españolas, nunca consumadas; un anacronismo en un continente en proceso de descolonización. En 1975, España anunció sin más que renunciaba al territorio, cediendo el control administrativo –aunque no la soberanía– a Marruecos y Mauritania, y lavándose las manos al respecto de posibles soluciones a largo plazo. Dos años después, Mauritania había perdido cualquier interés por el Sáhara Occidental y dejaba a Marruecos como único reclamante.

De acuerdo con el derecho internacional, el pueblo saharaui antes colonizado tiene derecho a la autodeterminación. La comunidad internacional se pronun-

ció contra Marruecos, pero sin demasiado empeño, pues nunca estuvieron en juego intereses directos de ningún país. La excepción fue Argelia, que limita con el Sáhara Occidental y se ha opuesto a Marruecos en este asunto desde que obtuvo su independencia, en 1962. Argelia no reivindicó el control del territorio, pero defendió el derecho a la autodeterminación de los saharauis, representados por el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro). El Polisario instaló sus bases militares en la vecina Argelia y, cuando los combates contra el ejército marroquí desplazaron a decenas de miles de personas, levantó varios campamentos para los refugiados en la provincia argelina de Tinduf, con el apoyo del gobierno de Argelia.

El conflicto entre el Polisario y Marruecos estalló inmediatamente. En su empeño por ejercer el control, Marruecos levantó a mediados de la década de los ochenta una berma de arena que cerraba el 80% del territorio, incluida la costa y las principales ciudades, y dejaba el resto a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) proclamada por el Polisario en 1976. El conflicto se extendió hasta 1991, cuando Marruecos y el Polisario acordaron un alto el fuego. Decenas de miles de saharauis se vieron desplazados a causa de los combates. Acabaron en los campamentos de Tinduf o buscaron refugio en Mauritania, y un pequeño número llegó a Europa junto a otros emigrantes de África Occidental. En este momento es casi imposible determinar el número de refugiados saharauis. Las cifras son muy políticas: en 1991, el Frente Polisario calculó 165.000 –aproximadamente, una cuarta parte de la población original; Marruecos, por su parte, reduce esta cantidad a entre 45.000 y 50.000 personas. Salomónicamente, las Naciones Unidas fijó una “cifra oficial” de 90.000.

Mientras los saharauis huían a los sórdidos campamentos de refugiados de Tinduf, el gobierno marroquí subvencionaba el asentamiento de marroquíes en el Sáhara Occidental, algo expresamente prohibido por el derecho internacional. En 2015, varios analistas estimaron que dos tercios de los habitantes del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos eran marroquíes asentados y el resto, saharauis.

Una solución esquiva

Entre 1991 y el otoño de 2020, la situación del Sáhara Occidental se mantuvo en gran medida sin cambios, pese a los esfuerzos de diversos enviados especiales de las Naciones Unidas por alcanzar una solución permanente. Las autoridades marroquíes, que contaban con la ventaja que confiere la ocupación *de facto*, rechazaron de forma contundente cualquier acuerdo que implicase una pérdida de control sobre el territorio. De igual manera, las condiciones sobre el terreno eran claramente inadecuadas para poner en

marcha el proceso previsto por la comunidad internacional.

Las Naciones Unidas eran oficialmente las responsables de decidir el futuro del Sáhara Occidental, designado uno de los 17 territorios no autónomos del mundo. En 1991, tras la firma del alto el fuego, el Consejo de Seguridad autorizó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). La MINURSO tenía una misión imposible: organizar el referéndum que, según el derecho internacional, debía haberse celebrado en 1975 y por el que los saharauis decidirían si independizarse o anexionar su territorio a otro país. Tras casi 20 años, marcados por el desplazamiento de una parte considerable de la población y la afluencia al Sáhara Occidental de un número igualmente elevado de marroquíes, ponerse de acuerdo sobre quién tenía derecho a votar en el referéndum se reveló una tarea monumental. Se produjeron un sinfín de intervenciones diplomáticas, pero todos los enviados especiales de las Naciones Unidas, incluido el ex secretario de Estado estadounidense James Baker, acabaron renunciando, sumidos en la frustración.

El momento más prometedor de este proceso supervisado fue la confección del Plan de Paz para la Libre Determinación del Pueblo del Sáhara Occidental de 2003, que preveía un periodo de autonomía bajo administración marroquí y la celebración de un referéndum posterior. El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en última instancia Marruecos lo rechazó. A cambio, este presentó un plan de autonomía para la región, que contemplaba no un estatus especial para el Sáhara Occidental, sino la aplicación de la misma estructura administrativa implantada en el resto del país, algo más descentralizada.

Esbozar brevemente este intrincado y frustrante folletín político ayuda a explicar, sin legitimarla, la decisión de la Administración Trump de ignorar a las Naciones Unidas y reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. No la legitima porque la decisión es una clara violación del derecho internacional, de la jurisdicción de las Naciones Unidas –incluidas varias resoluciones del Consejo de Seguridad– y del derecho de autodeterminación saharauí. Pero la explica, hasta cierto punto, porque décadas de esfuerzos a través de los canales legales no han dado resultado, y probablemente así seguirá siendo.

Respuesta al anuncio de Trump y reanudación del conflicto

El anuncio de Trump no modificó la situación internacional del Sáhara Occidental. Para las Naciones Unidas sigue siendo un territorio no autónomo y su futuro debe decidirse en referéndum. Los países que se negaron a reconocer las aspiraciones de



Marroquíes celebran el acuerdo entre Israel y Marruecos, que supone el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la anexión marroquí del Sáhara Occidental. Rabat, diciembre de 2020. / FADEL SENNA/AFP VIA GETTY IMAGES

Marruecos no tienen prisa por cambiar su opinión. Tampoco Estados Unidos ha demostrado tener prisa por abrir el prometido consulado en Dajla. No hay indicios de que Joe Biden vaya a revocar la política de Trump y es probable que el nuevo presidente no haya dedicado aún mucho tiempo a la cuestión. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, preguntado por su opinión sobre la situación del Sáhara Occidental durante su comparecencia de nombramiento en el Senado, respondió que debía reflexionar detenidamente sobre el asunto antes de hacer ninguna declaración. Esta respuesta refleja probablemente la postura de todo el gobierno.

Aunque la política internacional en torno al Sáhara Occidental sigue en el limbo, sobre el terreno la situación cambia a marchas forzadas. De hecho, las tensiones se reanudaron antes incluso de hacerse público el acuerdo entre Marruecos e Israel y de que Washington diese su plácet a la anexión marroquí. A principios de noviembre de 2020, hubo una escalada de la tensión en uno de los rincones más remotos de la región, la locali-

dad costera de Guerguerat, cerca del Atlántico. La geopolítica de la zona es extremadamente delicada, pues en Guerguerat se encuentra el único paso fronterizo por carretera entre Marruecos y Mauritania. Para más inri, se trata de una franja de territorio controlada por la RASD y patrullada por las Naciones Unidas, que serpentea a lo largo de la frontera entre ambos países. A finales de octubre, grupos de saharauis afiliados al Polisario protestaron cerca de Guerguerat, supuestamente contra la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Alegando que los manifestantes estaban bloqueando la carretera e interrumpiendo el tráfico de camiones, el 13 de noviembre las tropas marroquíes abrieron fuego para dispersarlos. El Polisario acusó inmediatamente a Marruecos de violar el acuerdo de alto el fuego de 1991 y anunció que, en respuesta, se retiraba del mismo.

Los llamamientos a la moderación por parte de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales han surtido poco efecto. Estados Unidos anunció el 10 de diciembre de 2020 que reconocía las reivindicaciones

marroquíes, lo que ha incrementado aún más la tensión. A principios de febrero de 2021, las dos partes seguían enfrentadas y los representantes del Polisario expresaban sus esperanzas de que la Administración Biden revirtiera la decisión de Trump, amenazando con rerudecer el conflicto en caso contrario. En este momento, no hay alto el fuego en vigor y la siempre remota perspectiva de una solución diplomática mediada por la ONU se aleja cada vez más.

Una dura realidad: el derecho internacional y los antiguos conflictos irresolubles en un mundo cambiante

El conflicto del Sáhara Occidental no es la única situación en punto muerto que se resiste a los esfuerzos de la comunidad internacional por encontrar una solución basada en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El conflicto israelí-palestino es, desde luego, el más destacado y conocido de estos conflictos y no es de extrañar que, incluso en este caso, la Administración Trump pasara por alto décadas de diplomacia e impusiera su solución favorita —que coincide con la de Israel. Probablemente, se hayan vivido similares historias de fracaso en la búsqueda de soluciones para cada uno de los territorios no autónomos de la lista de las Naciones Unidas, y de muchos otros conflictos.

La dura realidad es que la comunidad internacional no tiene las herramientas adecuadas para abordar muchos de los actuales conflictos en curso. Las Naciones Unidas no poseen ni la autoridad moral ni el poder coercitivo para hacer cumplir las soluciones dictadas por el derecho internacional, y ni siquiera sus propias resoluciones. Cuando las soluciones no llegan, la realidad sobre el terreno cambia y se hace imposible la aplicación de la legalidad. Los antiguos pueblos colonizados tienen derecho a la autodeterminación, pero el caso del Sáhara Occidental deja claro que, una vez quebrantado ese derecho, si no se aborda el problema de inmediato, puede resultar imposible dar marcha atrás y actuar como si nada hubiera ocurrido durante el tiempo transcurrido.

Cuando los recursos legales sancionados oficialmente chocan con la realidad aparecida sobre el terreno a raíz de una actuación ilegal, la comunidad internacional se enfrenta a un verdadero dilema para el que no hay una respuesta fácil. Tampoco la hay cuando sabemos que el proceso legalmente sancionado va a conducir con toda seguridad a una situación muy compleja.

Si se hubiera permitido a los saharauis ejercer su derecho de autodeterminación como pueblo colonizado y se les hubiera consultado en referéndum en 1975, habrían votado a favor de la independencia, según demostraron los sondeos de entonces. El sentir era abrumadoramente favorable a la independencia. Y, sin

embargo, un Estado saharaui independiente, aun cuando hubiera controlado todo el territorio ocupado anteriormente por España, habría sido muy probablemente un Estado fallido desde el principio, desprovisto como estaba de recursos, de infraestructuras y de gobernantes con alguna experiencia.

La viabilidad de un Estado no es criterio para su derecho a existir y su reconocimiento *de iure* en un mundo poscolonial, que da por hecho que las fronteras son inmutables y que los Estados fuertes no tienen derecho a conquistar o anexionarse otros más débiles. En teoría, esta es una premisa positiva, pero en la práctica, ha lastrado al mundo con numerosos Estados inviables. En las organizaciones internacionales y en las agencias de ayuda bilateral existe todo un sector dedicado a gestionar Estados considerados débiles, fallidos, fracasados, inviables o cómo se les quiera calificar hoy. Las soluciones propuestas son muchas, pero es difícil salir airoso. Los Estados fallidos, aun cuando su existencia resulte directamente de un plebiscito popular, no hacen nada por el bienestar de sus ciudadanos. Volviendo al Sáhara Occidental, no puede afirmarse a ciencia cierta que los saharauis hubiesen vivido mejor en un Estado independiente que bajo la administración marroquí, ni tampoco que vayan a vivir mejor en el futuro, si la MINURSO consigue, milagrosamente, organizar un referéndum que permita votar a los saharauis pero no a los marroquíes recién asentados.

La Administración Trump, por razones ajena a los intereses de los saharauis, se encargó de dictar su propia solución para el Sáhara Occidental, la cual no es aceptable. Sin embargo, tampoco servirá para resolver los viejos conflictos el seguir insistiendo en leyes y procedimientos imposibles de aplicar, dadas las nuevas realidades que se atestiguan sobre el terreno. Esto no ayuda a los que sufren las consecuencias del conflicto y desacredita a la comunidad internacional, agotada por estos problemas interminables y, en consecuencia, cada vez más dispuesta a dar la espalda a las violaciones del derecho internacional. Corresponde a la comunidad internacional dejar de esconderse tras leyes y normas que no guardan relación con los hechos sobre el terreno y replantearse el enfoque hacia estos conflictos aparentemente irresolubles, aun cuando las partes continúen atascadas en sus posicionamientos de siempre. De lo contrario, cada vez más conflictos de este tipo se resolverán según las políticas de actores externos que operan fuera del marco de la legalidad. ■

El presidente Biden y los Acuerdos de Abraham

Aunque puedan considerarse un avance positivo, es poco probable que los acuerdos constituyan la piedra angular de la estrategia de la nueva Administración en la región.

Ellen Laipson

El logro distintivo de la Administración Trump en Oriente Medio fueron los acuerdos de normalización entre Israel y tres Estados árabes: Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán, a los que más tarde se unió Marruecos. Para la Administración Biden, estos acuerdos constituyen una novedad útil que probablemente aportará ciertas mejoras discretas en las relaciones regionales, en particular las económicas y comerciales. Ahora bien, estos acuerdos no alcanzan a ser un logro que implique una transformación de la paz y la seguridad regional, y no es probable que constituyan la piedra angular de la estrategia de la nueva Administración en la región. Cada una de las partes de estos nuevos acuerdos tiene distintas expectativas o planes con respecto a Israel y EEUU, y la suma total de los acuerdos hasta la fecha no representa un nuevo orden regional.

El equipo de Biden tendrá su propia agenda para la región, y adoptará una visión más estratégica sobre cómo definir objetivos alcanzables y realistas para Estados Unidos en una región que a menudo arrastra a los presidentes estadounidenses. Biden, como los ex presidentes Barack Obama y Donald Trump, recelará a la hora de adquirir nuevos compromisos o de depender en exceso de la fuerza militar para alcanzar objetivos de seguridad.

Asimismo, el equipo querrá sin duda reforzar las alianzas con los amigos históricos de la región, y se implicará junto con los actores regionales en los abundantes riesgos y peligros, desde los conflictos regionales por resolver y el desafío del programa nuclear de Irán hasta el cambio climático, así como la inquietud por los deseos de expansión de China.

No está claro el lugar que ocupan los Acuerdos de Abraham en este catálogo de temas. Sin embargo, las siguientes preguntas pueden ser un marco útil para el debate: ¿Promoverá la Administración Biden otros acuerdos de normalización como parte central de su política en Oriente Medio? ¿Afectarán los Acuerdos de Abraham a las perspectivas de reanudar un proceso de paz entre Israel y los palestinos y, en última instancia, una solución de dos Estados? ¿En qué medida cambiarán los Acuerdos de Abraham la dinámica regional con respecto a Irán? ¿Aumen-

tarán las probabilidades de conflictos con Teherán o conducirán a un nuevo proceso de seguridad regional?

El contexto y los méritos de los Acuerdos de Abraham

Desde la Administración Clinton, los funcionarios norteamericanos han querido aprovechar los acuerdos de paz históricos entre Egipto e Israel (1979) y entre Jordania e Israel (1994) estableciendo un conjunto más amplio de países deseosos de adoptar un enfoque pragmático con respecto a las relaciones regionales. Un enfoque que integrara a Israel en los diálogos regionales sobre seguridad y en cómo mejorar la confianza entre los Estados. Fue un esfuerzo de varias presidencias por mejorar las relaciones entre los Estados de la región, hubiera o no progresos en la cuestión palestina. Naturalmente, la mayoría de países árabes no estaban dispuestos a dejar al margen ese problema central y siguieron evitando los contactos directos u oficiales con Israel, aun cuando ya no podían o no les interesaba vencer a Israel en la guerra.

Cuando se lograban progresos en Palestina, aumentaba la voluntad de adaptarse a la realidad de la supervivencia de Israel y su éxito. El proceso de Oslo, que culminó con una serie de acuerdos israelí-palestinos en 1993 y 1995, en realidad creó un foro oficial para conversaciones multilaterales sobre temas concretos (refugiados, agua, desarrollo económico regional, Control de Armamentos y Seguridad Regional [ACRS, por sus siglas en inglés] y medio ambiente).

El proceso de ACRS es el más relevante para los Acuerdos de Abraham; en su formato formal de gobierno a gobierno, solo duró de 1992 a 1995, pero luego engendró una serie sólida de congresos oficiales que reunían a expertos académicos regionales, antiguos responsables de políticas y unos cuantos funcionarios militares y civiles en activo. Estas reuniones llevan más de dos décadas celebrándose en capitales europeas, subvencionadas por los gobiernos estadounidenses y occidentales y fundaciones privadas. Se calcula que varios miles de personas

Ellen Laipson es directora del Center of Security Policy Studies, School of Policy and Government, George Mason University.

han participado en estos encuentros, incluyendo a ciudadanos de Israel y muchos Estados árabes. Estos encuentros permitían a ciudadanos particulares de la élite con acceso directo a los responsables públicos forjar relaciones y reflexionar sobre formas audaces de evitar el conflicto y bien podrían haber contribuido a generar la confianza necesaria para las relaciones entre el Golfo e Israel que han desembocado en los nuevos acuerdos.

A principios de este siglo, la atención posterior al 11-S se centró en el terrorismo islámico radical y la inquietud creciente por las ambiciones de Irán en la región, lo que condujo a unos contactos discretos y una colaboración en materia de seguridad entre varios Estados del Golfo e Israel. Cuando alentó y permitió los acuerdos de normalización, la Administración Trump estaba empujando una puerta que ya tenía una rendija abierta. Estos acuerdos serán un éxito diplomático sostenible siempre que las partes quieran realmente comprometerse por el beneficio mutuo y la estabilidad regional, no solo como una operación de la era Trump.

Es importante destacar que estos acuerdos de normalización no tienen la misma categoría ni importancia que los tratados de paz que pusieron fin formalmente a una situación de guerra entre Israel y sus vecinos inmediatos, Egipto y Jordania. Los países no contiguos pueden normalizar las relaciones con fines de reconocimiento diplomático, comercio, intercambios culturales y algo de cooperación en materia de seguridad, pero no se trata de obligaciones vinculantes para prevenir los conflictos y administrar las fronteras. Y el de Emiratos Árabes Unidos es ciertamente el más significativo de los acuerdos; las consecuencias del resto para la seguridad son marginales. Para Baréin, Sudán y Marruecos, las decisiones de normalizar las relaciones con Israel son específicas en cada caso:

– El acuerdo de Baréin puede verse como un sustituto silencioso del de Arabia Saudí, que aún no está lista para ningún compromiso que pueda amenazar sus responsabilidades hacia Jerusalén, como custodio de los lugares sagrados del islam. Es posible que hubiese alguna otra compensación en el acuerdo, pero el embajador de Baréin en EEUU insistió en que “el establecimiento de relaciones con Israel nos aporta una ventaja estratégica a largo plazo, no recompensas tácticas a corto plazo”.

– Sudán se decidió a firmar después de que le prometieran que Washington lo borraría de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. No obstante, los artículos de prensa de finales de 2020 indican que los representantes sudaneses se lo están replanteando, tras enterarse de que el acuerdo puede no excluir a Sudán de futuras acusaciones de terrorismo en los tribunales estadounidenses (*New York Times* 01/12/20).

– Y Marruecos ha tenido una larga relación con Israel, a veces mantenida en secreto, a veces hecha pública, así que este acuerdo en particular es más una cuestión de formalizar la práctica existente que un cambio drástico de postura. Al menos un cuarto de millón de judíos ma-

rroquíes emigró a Israel en los años sesenta, y ese vínculo supone una base para un contacto más cultural y políticamente discreto a lo largo de los años entre los dos Estados que en los otros casos. En esta ocasión, la compensación fue el reconocimiento de Washington de las reclamaciones de Rabat con respecto al Sáhara Occidental, que podría verse cuestionado o anulado por la diplomacia más tradicional de la Administración Biden.

Teniendo en cuenta el alcance geográfico de las partes de estos nuevos acuerdos, desde el extremo occidental más alejado del mundo árabe hasta un Estado importante en el Cuerno de África y dos pequeños Estados en el Golfo Pérsico, no hay ningún principio unificador con respecto a los beneficios u obligaciones mutuos, especialmente en materia de seguridad. No está claro que estos acuerdos aporten ninguna nueva base coherente para unas nuevas relaciones regionales o una nueva estructura de seguridad. Israel considera beneficioso ampliar sus relaciones en el mundo musulmán, y estos acuerdos son claramente positivos en pro de ese objetivo. Ahora bien, la contribución a los requisitos en materia de seguridad de todos los signatarios está aún por demostrar.

La Administración Biden ha acogido estos acuerdos como un logro útil. Además, no tomará medidas para dar marcha atrás en el reconocimiento controvertido de Jerusalén como capital de Israel, pero es improbable que defina sus prioridades o sus compromisos diplomáticos en la región basándose en estos progresos.

La paz ausente

Tomando prestado el título del libro de 2004 de Dennis Ross, es importante señalar que los Acuerdos de Abraham ejercen de sustitutos de la idea original de un plan de paz de Trump, que consistía en resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, dando prioridad absoluta a las necesidades de Israel en materia de seguridad, fomentando las ventajas de una mayor integración económica con Israel, y ofreciendo solo una perspectiva condicionada y muy distante de la categoría de Estado para los palestinos. El plan, presentado tras largos retrasos a principios de 2020, fue rechazado enseguida por los palestinos: el presidente Mahmud Abbas respondió “mil veces no”. La Liga Árabe lo rechazó formalmente: “El plan conduce a una situación que equivale al contexto de un Estado que comprende dos clases de ciudadanos, esto es, un *apartheid*, en el que los palestinos serán ciudadanos de segunda clase, privados de los derechos básicos de la ciudadanía”, dijo el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit.

El acuerdo nacido muerto no hacía sino subrayar lo lejos que ha quedado el problema palestino como principio vital de la política árabe. De hecho, las críticas de los Estados árabes variaban en intensidad, y la mayoría destacaba hasta qué punto el plan invalidaba décadas de conceptos legalmente establecidos para una solución (Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la

ONU en 1967, Acuerdos de Camp David en 1978, Acuerdos de Oslo en 1993 y 1995). Sin embargo, muchos Estados colaboraron con la Administración Trump por sus propios intereses, no presionaron lo suficiente para corregir el desequilibrio del plan y no asumieron su responsabilidad para ayudar a los palestinos a lograr un mejor acuerdo.

Emiratos Árabes Unidos, en particular, pudo compensar su decepción con un verdadero entusiasmo por los negocios con la Administración Trump y su enviado especial, el yerno de Trump, Jared Kushner. Aunque Kushner no recibió las promesas de los países árabes del Golfo de miles de millones de dólares para respaldar volúmenes espectaculares de ayuda para los palestinos, logró negociar acuerdos mutuamente beneficiosos entre Jerusalén y Abu Dabi en materia de turismo, comercio y cooperación en seguridad. EAU, el miembro más tajante del Consejo de Cooperación del Golfo en cuanto a activismo regional e internacional, no tuvo reparos en abandonar cualquier pretensión de adhesión a la autodeterminación palestina, sin duda impulsado por su aversión por el partido político Hamás, afiliado a los Hermanos Musulmanes, que domina la política en la Franja de Gaza, y su desprecio por la pasividad del liderazgo político dominante de Al Fatah en Ramala. No obstante, EAU hizo pública su resistencia a concluir la normalización hasta que Israel se comprometiera a suspender sus planes de anexionar Cisjordania. Qué habría pasado si Israel hubiera seguido adelante con la anexión, idea que no gozaba de popularidad en el interior del país, será un tema a analizar en el futuro, al igual que el riesgo calculado asumido por Abu Dabi.

En los últimos años, los palestinos se han visto sumamente debilitados por un mal liderazgo, una política nacional fragmentada y la confianza del gobierno israelí de que no arrastraba ningún compromiso del pasado sobre una solución justa y equitativa para su larga lucha por el reconocimiento y el control soberano de su territorio e identidad política. Durante la acción diplomática de Kushner en la región en pro de su plan de “paz para la prosperidad”, los líderes palestinos y figuras no gubernamentales destacaban, cada vez más consternados, que la Administración Trump no escuchaba las prioridades e inquietudes palestinas.

Kushner estaba convencido de que con la promesa de una mayor satisfacción económica engatusaría a los palestinos para que pospusieran sus ambiciones políticas; Kushner nunca pareció captar la dinámica subyacente de la búsqueda fallida de la categoría de Estado. Situó los intereses de Israel en materia de seguridad por encima de cualquier otra consideración y presentó un plan carente de equilibrio o de cualquier reconocimiento de la cuida-



La prioridad de la Administración Biden en Oriente Medio es el restablecimiento de un proceso para contener el programa nuclear iraní y retomar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).

Foto: mural en Teherán, septiembre de 2020./FATEMEH BAHRAMI/AGEN-

CE ANADOLU VIA GETTY IMAGES

dosa serie de principios en que se basan décadas de diplomacia dedicadas al proceso de paz. Kushner también promovió el concepto de “dentro-fuera”, basado principalmente en generar consenso entre los Estados árabes ricos amigos de la Administración Trump y luego en presentar a los que consideraba los palestinos irresponsables un producto acabado que podían aceptar o rechazar.

¿Volverá a comprometerse la Administración Biden con el proceso de paz? En vista de los abrumadores problemas internos a los que se enfrenta el 46º presidente, y del estancamiento prolongado de los esfuerzos por lograr la paz, parece bastante improbable que Washington dé prioridad a un problema con tan pocas posibilidades de arrojar buenos resultados. Dicho esto, el equipo de Biden puede encontrar vías para indicar que el plan fallido de Kushner no es la última palabra. La Administración ya ha tomado varias medidas para restablecer el statu quo anterior: reabrir la oficina diplomática de los palestinos en Washington reanudar la ayuda a la Autoridad Palestina y volver a apoyar a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), a la que Trump había dejado de subvencionar repentinamente en 2018. Se trata de pasos esenciales para recobrar la postura estadounidense histórica consistente en asistir al pueblo palestino en sus necesidades humanitarias y económicas y, aunque lentamente, en el proyecto político mayor de la solución de los dos Estados.

También se espera que Biden tenga una relación más honesta y franca con el primer ministro israelí Benjamín

Netanyahu. El largo tiempo líder israelí, al igual que su “mejor amigo” Trump, trastocó los largamente establecidos protocolos en las relaciones norteamericanas-israelíes adaptando explícitamente los intereses de Israel al Partido Republicano y su inconformista líder. A los políticos de ambos partidos les molestó la arrogante desconsideración hacia el principio profundamente arraigado del apoyo bipartidista a las necesidades legítimas de Israel en materia de seguridad. Como vicepresidente, Biden aguantó los ataques frontales al presidente Obama, y nadie espera que la relación entre los líderes de Washington y Jerusalén sea tan fluidas como lo han sido recientemente. Puede preverse que Biden ponga rumbo hacia unas relaciones cercanas y de colaboración, pero querrá expresar sus desacuerdos con respecto a los asentamientos y otros temas polémicos relacionados con los palestinos.

La Administración Biden se esforzará por revalidar los valores básicos históricos de la política estadounidense con respecto a la cuestión israelí-palestina. Restablecerá la ayuda humanitaria y para el desarrollo, y emprenderá un diálogo político con todos los partidos, pero no es probable que inicie un importante esfuerzo diplomático para rescatar la idea de los dos Estados mientras los líderes actuales sigan en el poder. Sus políticas con respecto a esta maraña de problemas no partirán de los supuestos del plan de paz de Trump, al igual que tampoco las partes de los Acuerdos de Abraham desempeñarán un papel importante en la estrategia de Biden.

Biden, Irán y los Acuerdos de Abraham

Es posible que la normalización de las relaciones de Israel con dos de los Estados del Golfo, EAU y Baréin, con la aceptación tácita de Arabia Saudí, tenga un efecto indirecto en la principal prioridad de la Administración Biden en Oriente Medio, el restablecimiento de un proceso destinado a contener el programa nuclear de Irán.

La nueva Administración pretende retomar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) negociado en 2015 por la Unión Europea, con la participación estadounidense, rusa y china. La Administración Trump se retiró del acuerdo en 2018 e impuso nuevas sanciones unilaterales a Irán, y desde entonces Irán ha rebasado incansablemente sus obligaciones de limitar las actividades de enriquecimiento. Sin embargo, el proceso para retomar el camino ha demostrado ser complicado, debido a las diferencias sobre cómo secuenciar la vuelta al redil de EEUU e Irán y abordar la demanda de un enfoque más amplio, que incluya el programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades regionales. El presidente Biden dio el primer paso al anunciar en el Foro de Seguridad de Múnich en febrero que EEUU participaría en un encuentro de las partes del JCPOA organizado por la UE.

El papel de los Acuerdos de Abraham tiene que ver con las percepciones de amenazas mutuas. Sin duda, Irán fue un motor implícito del deseo de Israel y EAU de

profundizar sus relaciones. Tienen el interés estratégico común de contener a Irán, y puede que se hayan dado cuenta de que la campaña de “máxima presión” de la Administración Trump era más que nada retórica, y que los actores regionales debían asumir mayor responsabilidad para influir en Irán y limitar los peligros para su propia seguridad nacional.

¿Se sentirá Irán más acosado por la realidad de la nueva colaboración entre Israel y el Golfo? ¿Podría Teherán endurecer su postura, al no poder acudir a los Estados del Golfo que tradicionalmente han buscado una posición más matizada frente a Irán? ¿Interpretará los acuerdos como un indicio de que la hostilidad de los poderes regionales es una situación permanente?

Por otro lado, ¿concluirá Irán que ahora EEUU representa una amenaza menor, porque la Administración Biden quiere restablecer el Plan de Acción Integral Conjunto y la diplomacia con Irán? En ese caso, ¿vislumbraría Irán un camino para involucrar a los actores regionales en los temas no nucleares? Cabe pensar que otros miembros del CCG –Catar y Omán en particular– estarían bien situados para mantener una negociación regional sobre asuntos no nucleares. La Administración Biden, con el nuevo enviado especial a Irán, Rob Malley, probablemente se mostraría proactiva si los actores regionales fueran receptivos. Yemen sería el conflicto donde podrían hacerse progresos, aprovechando los esfuerzos de la ONU y EEUU para poner fin al conflicto militar y centrarse en las negociaciones diplomáticas. En cuanto a Siria, Líbano y Hezbolá, más prioritarios para Israel, a Irán y los países árabes del Golfo probablemente les costaría mucho más encontrar un terreno común.

Es demasiado pronto para saber si los conflictos multidimensionales entre Irán y los diversos participantes de los Acuerdos de Abraham se verán agravados o atenuados por las nuevas realidades diplomáticas sobre el terreno. En conjunto, estos acuerdos pueden empeorar la percepción de la amenaza de Irán y aumentar su convicción de que necesita capacidades estratégicas para estar a la altura de la fuerza militar conjunta de los países árabes del Golfo e Israel.

En conclusión, los Acuerdos de Abraham son un avance positivo desde el punto de vista estadounidense, pero su importancia no debe sobrevalorarse. Estos acuerdos de normalización transaccionales y pragmáticos no deben interpretarse como una transformación del sistema regional en el ámbito de la seguridad. A fin de cuentas, representan un revés preocupante para la solución de dos Estados entre Israel y los palestinos, un revés que probablemente la Administración Biden no podrá revertir. No cambian en esencia las tensiones y rivalidades geopolíticas entre Irán y otras potencias regionales. Independientemente de la política estadounidense, queda por ver si estos acuerdos, con los Estados del Golfo en particular, crean una nueva dinámica para una apropiación y un liderazgo mayores de la agenda de cooperación interestatal y la prevención de conflictos. ■

- 34 Pandemia y autoritarismo:
la tormenta perfecta
- 38 Marruecos y Túnez ante el reto
político de la Covid-19
- 42 El 'Hirak' argelino ante
la pandemia
- 46 Canarias: gestión local y
de emergencia para unos flujos
migratorios entre continentes



Manifestación del 'Hirak'. Argel, 26 de febrero de 2021./MOUSAAB ROUIBI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Covid-19: retrocesos democráticos en la región MENA

Según el *Democracy Index 2020*, en el último año se ha producido un deterioro generalizado de la democracia a escala mundial, situación especialmente grave en la región MENA. Cuando se cumplen 10 años de las *primaveras árabes*, la región atraviesa una crisis económica, agravada por la crisis sanitaria, que amenaza con revertir los avances logrados y provocar una nueva ola revolucionaria. Ante este panorama, los gobiernos, amparados por la pandemia, han tomado drásticas medidas que, en muchos casos, han supuesto un retroceso en las libertades civiles. Impulsados por el descontento social, varios países han experimentado un rebrote de las protestas. En Argelia, el movi-

miento prodemocrático *Hirak*, nacido hace ya dos años, ha vuelto a tomar las calles, con las mismas consignas y la misma fuerza. A pesar de su resiliencia, el *Hirak* se enfrenta a los mismos obstáculos –falta de liderazgo y estructuras– que ponen en jaque su continuidad.

Aunque la pandemia supuso en un principio un freno a las llegadas de migrantes, en el último trimestre, el número de personas que han llegado a las islas Canarias desde la costa africana ha alcanzado unas cifras que recuerdan a la crisis de los cayucos de 2006. Han pasado 15 años desde entonces, pero las causas y motivos para emigrar están vigentes y sigue sin existir una estrategia a largo plazo para gestionar las migraciones hacia Europa.

Pandemia y autoritarismo: la tormenta perfecta

En un contexto de crisis económica, los regímenes árabes recurren a medidas coercitivas para frenar el descontento, con el riesgo de desencadenar una tercera ola revolucionaria.

Ignacio Álvarez-Ossorio

Existe alguna relación entre la pandemia de la Covid-19 y el retroceso de las libertades registrado en 2020? La respuesta, según Freedom House, es afirmativa, ya que durante 2020 se ha experimentado un deterioro generalizado de la democracia a escala mundial. Como señala su último informe, “la democracia y el pluralismo están bajo ataque. Los dictadores se esfuerzan por eliminar los últimos vestigios de disidencia interna y extender su influencia a nuevos rincones del mundo. La brecha entre avances y retrocesos se amplió en comparación con el año anterior, ya que la población en 64 países experimentó un deterioro de sus derechos políticos y libertades civiles, mientras que en solo 37 países se registraron avances”. También el *Democracy Index 2020* apreció un declive relevante: “La media global cayó de 5,44 en 2019 a 5,37 puntos en 2020: es, sin duda, el peor registro desde 2006. Este resultado representa un deterioro significativo y se debió en gran medida, pero no en exclusiva, a las restricciones impuestas por los gobiernos a las libertades individuales y civiles en respuesta a la pandemia de la Covid-19”.

Este retroceso ha sido mucho más acentuado en la región MENA que ya partía de una situación preocupante. Según el informe *Democracy Index 2020: in sickness and in health?* elaborado por The Economist Intelligence Unit “tras el África subsahariana, la región MENA registró el segundo mayor retroceso en la puntuación regional en 2020: dicha puntuación ha disminuido cada año desde 2012, cuando los avances que siguieron al levantamiento prodemocrático de la *Primavera Árabe* en diciembre de 2010 comenzaron a revertirse. La región sufre una concentración de monarquías absolutas, regímenes autoritarios y conflictos militares y es la peor valorada de todas las regiones incluidas en el *Democracy Index*, con siete países entre los 20 últimos del ranking mundial”.

Los efectos económicos de la pandemia

La región MENA se enfrenta a una tormenta perfecta. A la segunda ola de movilizaciones prodemocráticas registrada en algunos países como Argelia, Sudán, Líbano o Irak en 2019 le ha seguido, al año

siguiente, la devastadora crisis económica provocada por la propagación de la Covid-19. La pandemia ha golpeado con mucha mayor intensidad a Oriente Medio que al Norte de África. Según el Coronavirus Research Center de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 1 de marzo de 2021 el país con mayor incidencia de la región era Irán con 60.000 fallecidos y 1,63 millones de contagiados, seguido de Turquía con 28.500 muertes y 2,7 millones de infectados. No obstante, las cifras podrían ser mucho más elevadas, dada la escasa transparencia de muchos países que no han aportado suficientes datos sobre el aumento de mortalidad ni tampoco realizan test a gran escala. Particularmente preocupante es el impacto de la Covid-19 entre la población refugiada o desplazada de los conflictos de Libia, Siria o Yemen.

El informe *Food Security Analysis, Impact of COVID-19 in the Middle East, North Africa, Central Asia, and Eastern Europe* del Programa Mundial de Alimentos constata que los efectos de la pandemia han sido mucho más devastadores en los países frágiles como Líbano, Sudán e Irak o en conflicto como Libia, Siria y Yemen, donde la Covid-19 ha impactado negativamente en la situación económica provocando una aguda depreciación de la moneda y la consiguiente hiperinflación, lo que ha supuesto el incremento de precios de los alimentos, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y, por último, un aumento exponencial de la pobreza. Como señala el informe, “los menores ingresos, el agotamiento de los ahorros y la disminución de la capacidad de los gobiernos para responder a una segunda ola de coronavirus pueden frenar la recuperación económica, agudizar la pobreza y la desigualdad y conducir a un deterioro importante de la seguridad alimentaria de los hogares”.

Debe tenerse en cuenta que no todos los países disponen de los mismos recursos para hacer frente a la pandemia, ya que Israel y los países del Golfo cuentan con sistemas sanitarios más modernos y, por tanto, con mayor capacidad para hacer frente a la Covid-19, lo que ha quedado recientemente en evidencia en el rápido pro-

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.

Oriente Medio y África del Norte: 'Democracy Index' 2020

	Nota global	Ranking global	Ranking regional	I Proceso electoral y pluralismo	II Funcionamiento del gobierno	III Participación política	IV Cultura política	V Libertades civiles	Régimen
Israel	7.84	27=	1	9.17	7.50	9.44	7.50	5.59	democracia imperfecta
Túnez	6.59	54	2	9.17	5.36	7.22	5.63	5.59	democracia imperfecta
Marruecos	5.04	96	3	5.25	4.64	5.56	5.63	4.12	régimen híbrido
Líbano	4.16	108	4	3.50	1.50	6.67	5.00	4.12	régimen híbrido
Palestina	3.83	113	5	3.33	0.14	7.78	4.38	3.53	autoritario
Kuwait	3.80	114	6	3.58	3.93	3.89	4.38	3.24	autoritario
Argelia	3.77	115	7	3.08	2.50	4.44	5.00	3.82	autoritario
Irak	3.62	118=	8=	5.25	0.00	6.67	5.00	1.18	autoritario
Jordania	3.62	118=	8=	2.67	3.93	3.89	4.38	3.24	autoritario
Catar	3.24	126	10	0.00	4.29	2.78	5.63	3.53	autoritario
Omán	3.00	136	11	0.08	3.93	2.78	4.38	3.82	autoritario
Egipto	2.93	138	12	1.33	3.21	3.33	5.00	1.76	autoritario
EAU	2.70	145	13	0.00	3.93	2.22	5.00	2.35	autoritario
Sudán	2.54	149	14	0.00	1.79	4.44	5.00	1.47	autoritario
Baréin	2.49	150	15	0.83	2.71	2.78	4.38	1.76	autoritario
Irán	2.20	152	16	0.00	2.50	3.89	3.13	1.47	autoritario
Arabia Saudí	2.08	156	17	0.00	3.57	2.22	3.13	1.47	autoritario
Libia	1.95	157=	18=	0.00	0.00	3.33	3.75	2.65	autoritario
Yemen	1.95	157=	18=	0.00	0.00	3.89	5.00	0.88	autoritario
Siria	1.43	164	20	0.00	0.00	2.78	4.38	0.00	autoritario

Fuente: The Economist Intelligence Unit

ceso de vacunación. La otra cara de la moneda la representan los países inmersos en conflictos armados como Libia, Siria y Yemen, que disponen de unos recursos limitados dado que sus sistemas de salud han sido dañados o destruidos durante la guerra. En el caso sirio, por ejemplo, se calcula que el 70% de los sanitarios ha abandonado el país y solo funciona el 50% de los centros de salud primaria.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) *Trading Together: Reviving Middle East and North Africa Regional Integration in the Post-Covid Era*, publicado el pasado mes de octubre, señalaba que la economía de los países MENA se contraería un 5,2% durante 2020. No obstante, el retroceso sería mucho mayor en los países productores de petróleo con una caída del 6% del PIB, mientras que los no productores retrocederían tan solo un 1,1%. De hecho, el país menos afectado por la crisis económica sería Egipto que no solo sortearía la recesión, sino que además crecería un 3,5%. Parece evidente que la disminución de las exportaciones y la caída del precio del crudo dañaron especialmente a los países petrolíferos, que tuvieron que aumentar considerablemente su deuda externa para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la Covid-19. No obstante, la recuperación de los precios del petróleo podría favorecer un rápido crecimiento de estos países durante 2021.

Los países no productores de petróleo también han tenido que afrontar una situación extremadamente delicada, puesto que la caída del turismo y el descenso de las remesas han provocado el aumento del desempleo y han disparado la pobreza. El cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad han afectado a los países

más turísticos, entre ellos Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez, donde el turismo representa entre el 20% y el 15% del PIB. De hecho, la Organización Mundial del Turismo estimó que durante 2020 se registró un descenso del turismo a escala global de casi el 80%. Esta disminución golpeó a Emiratos Árabes Unidos y Catar, que se han convertido en nodos en las comunicaciones internacionales gracias a las líneas aéreas Emirates, Etihad y Qatar Airways, y también a Arabia Saudí, que cada año recibe 20 millones de peregrinos que visitaban La Mecca y Medina para hacer el *hach*.

Según el Banco Mundial, esta contracción económica tuvo un especial impacto en el desempleo y, sobre todo, entre jóvenes y mujeres. Debe tenerse en cuenta que la región MENA es la que tiene un mayor porcentaje de desempleo juvenil del mundo (un 27%) y un menor acceso de la mujer al trabajo asalariado (apenas un 20%), quedando la mayor parte de ellos abocados al sector informal. Según diferentes previsiones, la pobreza aumentará de manera significativa en el mundo árabe afectando al 25% de la población: un total de 115 millones de personas, lo que crearía una bomba de relojería de difícil gestión.

Lo más probable es que esta explosiva situación se traduzca, en el corto plazo, en un aumento del malestar social. Entre los países que registrarían mayores caídas del PIB en 2020 estarían precisamente Sudán con un 8,4%, Irak con un 12,1% y Líbano con un 23%, tres países que en el curso de los dos últimos meses han experimentado masivas movilizaciones populares que han derribado a sus respectivos gobiernos. Un informe del FMI advertía de la posibilidad de que la crisis económica y el aumento de desempleo intensifiquen la

frustración de las poblaciones y que “los riesgos aumenten en los casos en los que la crisis exponga o acentúe problemas, como la falta de confianza en las instituciones, la deficiente gobernanza, la pobreza o la desigualdad”.

Como hemos señalado, la situación es mucho más grave en los países frágiles o en conflicto. En Líbano, la pandemia de la Covid-19 ha provocado una contracción de la economía del 23% que ha agudizado la delicada situación que vivía el país desde el estallido de la crisis financiera de octubre de 2019, provocada por la devaluación de la moneda desde las 1.500 liras por dólar a las 10.000 hoy en día. La inflación alcanzó el 137%, la cesta básica de alimentos se encareció en un 116% y el desempleo pasó del 6,2% al 17,7% en 2020. En los países en conflicto la situación es todavía mucho peor. En Siria, la moneda se ha devaluado de manera notable con respecto al dólar pasando de las 50 liras por dólar en 2011 a las 4.000 liras en la actualidad y, solo en el último año, ha perdido un 75% de su valor con el consiguiente aumento del precio de la cesta básica del 125%. En Yemen, 16 millones de personas, más de la mitad de la población, se encuentran en necesidad de asistencia urgente y el 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, al igual que en Siria. En el caso de Libia, la agudización del conflicto entre el gobierno del Acuerdo Nacional y el Ejército de Liberación Nacional de Khalifa Haftar se vio acompañada por el descenso de los precios del petróleo, la principal fuente de riqueza del país. La irrupción de la pandemia provocó un aumento de la inflación y del coste de los alimentos en un 18%.

Reforzamiento del autoritarismo y recorte de las libertades

El *Freedom House Democracy Status* elaborado por Freedom House pone en evidencia que 2020 no ha sido un buen año para las libertades en la región MENA. Cuando se cumple el décimo aniversario de las movilizaciones prodemocráticas que pusieron fin a las dictaduras de Zine el Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Ali Abdallah Saleh en Yemen, podemos afirmar que en los últimos años se ha experimentado una regresión autoritaria en el conjunto de Oriente Medio y el Norte de África. Hoy por hoy, solo Túnez puede considerarse una democracia defectuosa en la que se da una alternancia pacífica en el gobierno, aunque la delicada situación económica que padece el país amenaza con revertir los avances registrados hasta el momento.

Dos países se sitúan en una escala intermedia como régimen híbridos –Marruecos y Líbano–, mientras que Argelia, Jordania y Kuwait descienden posiciones para engrosar la extensa lista de regímenes autoritarios. Los farolillos rojos vuelven a ser, una vez más, Libia, Siria y

Yemen, países donde el autoritarismo se ha acentuado como resultado del conflicto civil en el que se encuentran inmersos. Arabia Saudí se sitúa como duodécimo país del mundo con menos libertades y, según The Economist Intelligence Unit, “sigue siendo un estado autoritario profundamente represivo, que niega casi todas las libertades civiles y derechos políticos y discrimina sistemáticamente a las mujeres y las minorías religiosas”.

El informe de Freedom House relaciona, además, la intensificación del autoritarismo con el agravamiento de los conflictos regionales al considerar que “la ausencia de un liderazgo internacional consistente por parte de las democracias [occidentales] ha alentado a las potencias autoritarias a tomar parte en guerras por delegación devastadoras” poniendo como ejemplo los casos de Libia, Siria y Yemen donde intervienen, en distinta medida, Emiratos, Turquía, Catar, Arabia Saudí o Irán, así como Rusia y EEUU. El caos resultante en dichos países se ha traducido en una intensificación de las crisis migratorias y un ascenso de los grupos terroristas de carácter yihadista que gozan de implantación en aquellas zonas sin presencia gubernamental.

El *Democracy Index 2020* de The Economist Intelligence Unit, por su parte, advierte de que la región MENA es la que se encuentra en peor situación con siete países árabes entre los 20 peor posicionados a escala mundial y con una clara tendencia a la baja, lo que se debe “principalmente al resultado de la pandemia Covid-19, con las posiciones de 19 de 20 países empeorando como resultado de las restricciones introducidas por el coronavirus e impuestas a las libertades civiles”. Asimismo, el informe constata que “en toda la región hubo un retroceso en cuanto a las libertades civiles como resultado de los confinamientos y las restricciones a las libertades personales, como la libre circulación”.

En algunos países frágiles de Oriente Medio se ha asistido a una segunda ola de movilizaciones prodemocráticas que han logrado derribar regímenes híbridos o autoritarios, como en el caso de Líbano, donde el colapso de las finanzas provocó la caída del gobierno de Saad Hariri en enero de 2020 o en Irak, donde Ali Abd Al Mahdi se vio obligado a abandonar el poder un mes más tarde. Se da la circunstancia de que ambos países comparten un sistema confesional que ha reforzado el sectarismo y son permeables a las influencias de las potencias regionales y, en particular, Irán, que apoya a las diferentes milicias armadas chiíes que, de una u otra manera, condicionan la actividad política. En ambos casos, la sociedad civil es objeto de persecución y decenas de activistas han sido encarcelados o asesinados en los últimos 12 meses.

Como resultado del desapego de la población hacia la clase política y de la propagación de la pandemia, los procesos electorales desarrollados en el curso del pasado año han registrado una escasa participación. En el caso de las elecciones generales jordanas del 10 de no-



Manifestación de protesta por el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Beirut, marzo de 2021. / ANWAR AMRO/AFP
VIA GETTY IMAGES

viembre tan solo participó un 30% del censo electoral, mientras que en los comicios en Egipto, celebrados entre octubre y noviembre, el porcentaje fue incluso menor (un 28% del electorado, según datos oficiales) en un contexto caracterizado por la intensificación de la represión contra los opositores y los actores de la sociedad civil. En las elecciones parlamentarias de febrero de 2021 en Irán tan solo participó un 42,6% de los votantes, el porcentaje más bajo desde la Revolución Islámica de 1979.

Varios países del Norte de África también han experimentado un rebrote de las manifestaciones antigubernamentales, como en el caso de Argelia y Túnez. En Argelia, las manifestaciones convocadas por el movimiento *Hirak* no se detuvieron a pesar de la caída del presidente Abdelaziz Buteflika y su sustitución por el septuagenario Abdelmayid Tebbune, lo que llevó a la detención de decenas de activistas. El descontento generalizado explica la baja tasa de participación en el referéndum constitucional del 1 de noviembre, en el que

solo tomó parte un 23,7% del electorado. En Túnez, la única democracia efectiva en todo el mundo árabe, también se registraron nuevas movilizaciones debido a la agudización de la crisis económica y la imposición de confinamientos en las zonas más pobres del país.

De lo anteriormente dicho cabe concluir que la brecha entre gobernantes y gobernados continúa aumentando en toda la región MENA. Para hacer frente al creciente descontento de la población, los regímenes se han visto obligados a intensificar el autoritarismo recurriendo de manera sistemática a medidas coercitivas en un contexto de aguda crisis económica y de aumento exponencial de la pobreza. Esta situación está creando una tormenta perfecta que podría desencadenar una tercera ola revolucionaria en el conjunto de los países árabes. Como destaca el *Democracy Index 2020*, “dada la inquietud de las poblaciones y las crecientes tensiones económicas, es probable que, tarde o temprano, se produzca una erupción de mayor inestabilidad social y política”. ■

Marruecos y Túnez ante el reto político de la Covid-19

Las medidas sanitarias parecen tener un cariz más de seguridad, con el fin de sofocar las tensiones sociales.

Pierre Vermeren

Cuando la crisis de la Covid-19 golpeó a Europa en el invierno de 2020, los países del Norte de África no se encontraban en su mejor forma. Esta región, además de estar dividida, está rodeada al Sur y al Este por el cinturón yihadista, que se extiende desde Libia hasta Malí. A principios de 2021, las fronteras internas de la región siguen cerradas y las personas están confinadas en sus domicilios, mientras las economías atraviesan una fase crítica de endeudamiento y decrecimiento. Sin embargo, a diferencia de Francia, en el Magreb no existe un colchón de seguridad social. Los endeudados Marruecos y Túnez se encuentran en la misma situación: sus habitantes –excepto los funcionarios y los empleados de grandes empresas– solo pueden contar con las redes de solidaridad familiar o vecinal para superar el contagio del paro y la pérdida de salarios.

Al cabo de un año de crisis sanitaria, la situación en estos dos países del Magreb –igual que en Argelia, por otra parte– no ha mejorado, aunque esta región haya desaparecido de las pantallas y los radares de la información internacional. Cada país se ha replegado sobre sí mismo, sin muchas posibilidades de recuperación o iniciativa, a la espera de tiempos mejores. A este respecto, el acuerdo que firmó Marruecos el 22 de diciembre de 2020 con Estados Unidos e Israel, con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, también debe analizarse como la búsqueda por parte del Reino de una bocanada de oxígeno económico, sean cuales sean los riesgos internos. Ante la terrible crisis económica que los golpea, la única opción de los poderes públicos de estos países es mostrar ante su pueblo y ante Europa una actitud aparentemente rigurosa en el rastreo del virus, el confinamiento de las poblaciones, y el cierre o control de los espacios nacionales.

En el Magreb, más que en Europa, el confinamiento sanitario se aproxima a un confinamiento de seguridad. Los Estados, con el fin de mantener a raya y a distancia una protesta social y política que todos los indicadores

económicos parecen anunciar, han tomado medidas drásticas cuando lo han considerado necesario. Pero en Marruecos hay una gran opacidad sobre la naturaleza y las motivaciones de las medidas adoptadas: cuando una región, una ciudad o un barrio quedan prácticamente aislados del mundo, rodeados por las fuerzas del orden, y se requieren salvoconductos para entrar o salir, ¿es por motivos sanitarios como en *La peste* de Camus, o por motivos de seguridad como ocurrió en el pasado? Nadie lo sabe, pero abundan los rumores.

Sobre todo, porque en el Magreb la crisis de la Covid-19 es mucho menos virulenta que en la Europa abierta. Con casi el doble de habitantes, la región ha tenido un número de víctimas mucho menor que Francia durante la ola epidémica de la primavera de 2020, y aunque aumentó en otoño durante la segunda ola y luego en el invierno de 2020-21, las cifras de mortalidad siguen estando muy por debajo: a mediados de febrero de 2021, había en el Magreb casi seis veces menos muertes oficiales respecto a la población que en Francia. Las poblaciones son más jóvenes, pero hay que ser cautelosos con las comparaciones, dada la situación sanitaria específica del Magreb, donde el sector sanitario está más necesitado que en Europa, tanto en lo que se refiere a recursos humanos como a capacidades técnicas y económicas. Así, dada la poca disponibilidad de pruebas y su coste para el paciente, las estadísticas no tienen en cuenta a la mayoría de habitantes, tanto en Marruecos como en Túnez.

La situación política

En octubre de 2019, Túnez votó por un presidente desconocido en el marco de su democracia política. El jurista Kais Said (nacido en 1958) fue elegido libremente por una amplia cuarta parte del electorado tunecino. A los ojos de sus electores, en su mayoría jóvenes titulados urbanos, las principales virtudes de es-

Pierre Vermeren es profesor de Historia de las Sociedades del Norte de África (Paris1), delegado del CNRS en el IRMC de Túnez en 2020-2021. Autor de *Déni français. Notre histoire secrète des liaisons franco-arabes* (Albin Michel 2019), *Le Maroc en 100 questions, un royaume de paradoxes* (Tallandier, junio de 2020) y *On a cassé la République, 150 ans d'histoire de la nation* (Tallandier, septiembre de 2020).

te discreto académico constitucionalista son no ser corrupto ni especulador, hablar un árabe clásico florido y enfático y encarnar al tunecino medio, cuya vida compartió durante mucho tiempo. Frente a él, el Parlamento está dominado por una compleja alianza entre liberales, nacionalistas y sobre todo islamistas, que eligieron como presidente al antiguo jefe del partido Ennahda, Rachid Ghanuchi (79 años). El gobierno ha sido dirigido sucesivamente por dos jóvenes primeros ministros liberales y tecnócratas obligados a llegar a entenderse con Ghanuchi. Las batallas políticas y de prerrogativas entre los tres socios institucionales eran constantes, exasperaron a la opinión pública y paralizaron la actividad política hasta principios de 2021. Las respuestas a la crisis de la Covid supusieron un relativo consenso en medio de una situación caótica. En enero de 2021, el décimo aniversario de la revolución fue recibido con casi un mes de manifestaciones nocturnas, sucesivas y en ocasiones violentas, reprimidas por las fuerzas del orden sin muchos miramientos.

El rey de Marruecos, Mohamed VI (nacido en 1963) celebró en julio de 2020 sus 21 años de reinado. Con 57 años, se dice que está enfermo, pero aparece a menudo en los medios. Aunque el gobierno y el Parlamento están dominados por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), líder de una sabia coalición que une a la oposición, el rey y sus asesores siguen monopolizando la dirección de los asuntos del país, en particular en ámbitos que dependen exclusivamente del Estado. Marruecos comienza un año electoral, ya que en 2021 debe renovar todas sus asambleas electas y cambiar de gobierno. El Palacio superó durante un tiempo la amenaza que representaba en 2017 el *Hirak* del Rif, y las autoridades se mostraron sumamente vigilantes y nerviosas durante los acontecimientos argelinos de 2019. En Marruecos, la crisis de la Covid-19 culminó una secuencia relativamente tensa. Al prohibir de hecho las manifestaciones públicas, pospuso las protestas, que se expresaron en las redes sociales y en la prensa, lo que dio lugar a algunas condenas y al encarcelamiento de adversarios políticos.

Las medidas ante la pandemia

En unas pocas semanas, a mediados de marzo de 2020, el Magreb literalmente se encerró: toques de queda, confinamiento, cierre de establecimientos abiertos al público, cese del tráfico marítimo y aéreo, cierre de fronteras, cierre de mezquitas, suspensión de las



Manifestación bajo el eslogan “Liberar a Túnez”. Túnez, 6 de marzo de 2021./FETHI BELAID/AFP VIA GETTY IMAGES

peregrinaciones y los viajes; miles de extranjeros se quedaron atrapados en el Magreb durante meses y miles de magrebíes tenían prohibido regresar a sus países. Las patrullas de policía circulaban por todas partes y reprimían sin contemplaciones a los infractores. ¡En el Magreb no se juega al fútbol en las noches de confinamiento! Hasta las mezquitas estaban estrictamente cerradas y decenas de miles de niños y jóvenes estuvieron, durante un tiempo, confinados en sus hogares; las clases se suspendieron.

Esta situación social sin precedentes planteó problemas considerables a la población, porque millones de magrebíes viven pobremente, en viviendas pequeñas que a veces rozan el límite de lo salubre, y a menudo no tienen ingresos. No hay seguridad social ni prestación por desempleo, nada aparte de las promesas raras veces cumplidas de los gobernantes. Las familias tunecinas en las que los padres están desempleados recibieron el equivalente

a 80 euros en mayo y luego otra vez en septiembre de 2020: es decir, 160 euros para una familia a lo largo de 2020. Pero las personas solteras o las parejas sin hijos no recibieron nada. En este país, según el Banco Mundial, el 59% de los trabajadores que no pudieron trabajar durante el confinamiento no recibió salario, el 30% lo mantuvo y el 10% recibió solo una parte. En Marruecos, el 44% de los hogares modestos no recibieron absolutamente nada durante el confinamiento (frente a solo el 10% de los más acomodados). Millones de magrebíes de las clases populares, privados de empleo e ingresos, están destinados a volver –si es que la han abandonado– a la ancestral frugalidad de esta región semiárida, hecha de trigo, aceite, té y azúcar, a la espera de tiempos mejores.

A fin de cuentas, estas poblaciones saben que es mejor no ponerse enfermo, porque sus deficientes servicios de sanidad tendrían serias dificultades para hacer frente a una epidemia masiva. Los hospitales públicos, generalmente desbordados, no cuentan con los medios necesarios (equipos de protección, pruebas, reanimación, respiradores, equipos médicos y medicamentos), lo que condena a los habitantes frágiles o preocupados a quedarse en casa. De hecho, las clínicas privadas, que en general están mejor equipadas, reciben subvenciones de sus clientes y, por consiguiente, cobran al ingresar un precio fijo que supuestamente cubre los gastos de hospitalización. Por ejemplo, en Túnez, un enfermo de Covid-19 destinado a reanimación debe pagar 25.000 dinares para ser admitido en un servicio privado de este tipo. Esto equivale a poco más de 8.200 euros, o el equivalente a 3,5 años de salario mínimo; muchos trabajadores informales ni siquiera perciben este ingreso.

Marruecos, preocupado sobre todo por mantener el orden en esta época de vacas flacas, después de meses de cierre y confinamiento, ha impuesto un semi toque de queda durante todo el verano. Solo Túnez reabrió sus fronteras a finales de junio, pero exigió tres días de cuarentena a los visitantes de países de riesgo. La mayoría de los trabajadores emigrados a Europa no regresó al país en el verano de 2020 –salvo en Túnez–, y el turismo está totalmente paralizado (lo que no es poco en países donde, directa o indirectamente, uno de cada cuatro habitantes vive de él). Solo la industria textil marroquí ha salvado la situación produciendo decenas de millones de mascarillas, una compensación simbólica que el régimen divulgó muy bien.

En todas partes, los servicios de seguridad están en alerta roja, porque el año económico y social es catastrófico: en otoño de 2020 el crecimiento del PIB cayó un 7% en Marruecos y un 9% en Túnez. A esto se suma un déficit presupuestario catastrófico estimado en casi el 8% del PIB en ambos países, así como un déficit por cuenta corriente del 7-8%, precisamente cuando las importaciones se han reducido drásticamente. La situación no tiene precedentes en décadas: de hecho, es preocupante no solo para las empresas (porque el desempleo está creciendo en todas partes y las quiebras se multiplican: en Túnez ya han quebra-

do el 40% de los artesanos, y el 35% de las pymes están amenazadas), sino también para la estabilidad macroeconómica y monetaria, porque los países ya se han endeudado mucho durante la crisis (alrededor del 80%).

Con estos pronósticos, el verano pasó. Pero a la vuelta de las vacaciones de 2020, muy rápidamente, las condiciones sanitarias y los indicadores epidémicos empeoraron lo suficiente como para que incluso la desconfinada Túnez, en medio de la debilidad económica y la crisis gubernamental (su gobierno cambió el 2 de septiembre de 2020), adoptara más medidas confusas. El establecimiento de un toque de queda a mediados de octubre, la prohibición de abrir tiendas, terrazas, restaurantes, primero a mediodía, luego por la noche, luego de nuevo a mediodía, el cambio de hora del toque de queda, la prohibición de salir de las gobernaciones, la suspensión de las clases, la creación de una categoría de países denominados vecinos (como Francia o Italia) para evitar cortar las relaciones con ellos, y muchas otras medidas adoptadas y luego modificadas o canceladas, demuestran la confusión de las autoridades, y la dificultad de tomar decisiones cuando la población sufre económicamente y el margen de maniobra es casi inexistente.

Además, es sumamente difícil conocer la realidad de la epidemia. Las pruebas son pocas y caras, y se venden en el mercado a entre 70 y 130 euros, es decir, entre uno y dos tercios del salario mínimo mensual, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de la población. En Marruecos se ha fijado un tope de 80 euros. En cualquier caso, las pruebas de PCR son escasas y el indicador de la epidemia solo puede ser muy parcial.

El toque de queda sanitario va acompañado de medidas de seguridad

En Marruecos se adoptó una mezcla de laxitud y medidas drásticas, especialmente en Casablanca, que se encontró casi aislada del exterior (como en un estado de sitio), para protegerse de la nueva ola de la epidemia. No cabe duda de que el toque de queda sanitario va acompañado de medidas represivas y de seguridad engañosas, pero que permiten mantener la olla bajo doble vigilancia. En la capital, un determinado barrio popular, como Taqaddum, o un pueblo concreto, están por un tiempo aislados del mundo, rodeados por las fuerzas del orden o el Ejército, las entradas y salidas están estrictamente limitadas, lo que parece indicar que estas medidas pretenden sofocar los impulsos revolucionarios o las tensiones sociales de poblaciones agotadas por la pobreza, la falta de ingresos y los meses de confinamiento. Otra prueba de esta gran vigilancia son las fechas de la vuelta al colegio y la universidad al inicio del curso escolar 2020. Mientras que en Túnez las cosas se sucedieron con normalidad en septiembre, a pesar de que muy pronto, las clases se desdoblaron por motivos sanitarios, en Marruecos la vuelta a la universidad fue escalonada hasta el 15 de octubre.

En Túnez las autoridades políticas son más débiles y están divididas por la crisis política. En una situación a la vez democrática, de competencia entre poderes y desempleo masivo, es casi imposible que puedan usar la fuerza. Los conflictos sociales se gestionan después, con consecuencias económicas más graves. A lo largo de 2020, ha aumentado la grave crisis social en la región petrolera de Kamur. Esta región del Sur, cerca de Tataouine, es una de las más desfavorecidas del país. Sus jóvenes, exasperados porque el petróleo no aporta más ingresos a su región, aunque beneficia a todo el país, cortaron las carreteras y el acceso a los pozos, obligando a las empresas a detener su explotación. Tras meses de crisis y bloqueos, las autoridades gubernamentales zanjaron la situación a finales de año prometiendo contratar a miles de licenciados en paro, lo que no es fácil en una República que se desmorona bajo el peso de los gastos de personal. En efecto, después de la revolución, el poder islamista electo infló considerablemente el personal de la administración, contratando a decenas de miles de sus partidarios, lo que enfureció al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los patrocinadores financieros.

Como consecuencia de esta crisis, estallaron protestas y manifestaciones en todo el país, sobre todo por iniciativa de los jóvenes de los barrios populares de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos del interior. Sin reivindicaciones políticas concretas ni coordinación, estos movimientos se convirtieron en disturbios nocturnos, que comenzaron durante el largo fin de semana del 14 de enero (día del aniversario de la salida del presidente Ben Ali). El gobierno intentó calmar la situación decretando un confinamiento casi total de cuatro días, pero fue en balde. Durante semanas se sucedieron los enfrentamientos y las manifestaciones nocturnas. Las autoridades les pusieron fin al cabo de un mes a fuerza de represión, mediante la detención de al menos 1.500 jóvenes, retenidos durante unos días en las comisarías o en las cárceles.

Aunque la veracidad de estas cifras es discutible, alrededor del 20 de febrero de 2021 Marruecos contaba 8.600 víctimas de la Covid y Túnez 7.800, es decir, un índice de mortalidad tres veces superior. Aparentemente, la epidemia sigue siendo bastante moderada en comparación con la situación en muchas partes del mundo, a pesar de que el semiconfinamiento en el que vive Marruecos desde hace un año, y el semiaislamiento de Túnez del resto del mundo podrían permitir esperar algo mejor. La población tunecina se precipitó al acusar a los veraneantes nacionales de haber traído el virus de Europa cuando se produjo una segunda ola en otoño de 2020; pero el repunte fue generalizado en el Magreb, aunque afectó un poco menos a sus vecinos marroquíes y argelinos. Sin embargo, estos apenas han reabierto sus fronteras nacionales.

Aunque es cierto que se ha infundido miedo a muchos norteafricanos, tan poderosa es la política de comunicación de las autoridades nacionales e internacionales y de sus medios de comunicación, una parte cada vez mayor de las clases populares duda, e incluso se exaspera cada

vez más. Es lo que demuestra, en el invierno de 2021, los nuevos intentos de emigrar a Europa de miles de jóvenes marroquíes y tunecinos, desesperados por la situación económica y social de su país. Al contrario que las clases acomodadas, y sobre todo que los mayores, que aceptan o incluso piden redoblar las precauciones ante la expectativa cada vez más determinada de una vacuna para todos (se vislumbra una solución en Marruecos a través de Rusia y China), las clases populares, y en particular los jóvenes, han renunciado de hecho a las medidas y los gestos de precaución habituales, ya que les parecen irrisorios en vista de su situación. Sometidos a una pérdida masiva de puestos de trabajo e ingresos, y sin haber estado prácticamente en contacto con personas gravemente enfermas o fallecidas, la ira y la incomprendición han dado paso a la duda. En las redes sociales y en las conversaciones, el miedo ha dado paso a un cóctel de conspiración, desesperación, confusión y angustiosa espera de tiempos mejores.

En Marruecos, la prórroga del confinamiento y del estado de sitio y de excepción, llamado de "emergencia sanitaria", desvela una inquietud manifiesta, tanto más política cuanto que la Covid-19 circula con baja intensidad en la región. Otro indicio del nerviosismo de las autoridades se puede observar en las dificultades de los últimos manifestantes para expresarse en el espacio público y en las redes, especialmente los periodistas y algunos académicos. Un puñado de firmas conocidas por exponer hechos molestos han chocado con el régimen desde la primavera. Omar Radi, un periodista crítico, fue encarcelado a fines de julio de 2020 por violación, una historia fabricada para la ocasión. Al principio del curso 2020, el historiador Maâti Monjib, empezó a tener cada vez más problemas, hasta que finalmente fue secuestrado y luego condenado a un año de prisión a principios de 2021 (por evasión fiscal, lo que es infundado si se tiene en cuenta el salario de un profesor universitario). Otro destacado miembro de la oposición e intelectual se vio salpicado por el envío a su familia de videos sexuales con su pareja.

Algunos periódicos electrónicos dirigidos por los servicios de inteligencia han desplegado campañas de difamación contra estos miembros de la oposición, monopolizando la comunicación sobre estos asuntos y acrediitando operaciones políticas. Tanto en Marruecos como en Argelia se perciben otros signos del nerviosismo del régimen, lo que desemboca en la reaparición de violentas polémicas bilaterales por parte de los medios y los diplomáticos involucrados. Este canal de movilización patriótica de la opinión pública es a menudo un signo de tensiones subyacentes.

Según este criterio, la práctica política represiva es menos directa en Túnez y se acepta la libre oposición al poder en la calle, en el Parlamento (en particular a través de la voz de Abir Mussi), en la prensa y por parte de las organizaciones de izquierda y los sindicatos. Pero la represión repentina y bastante brutal de las manifestaciones de febrero recordó a los tunecinos que el aparato policial no solo está presente sino intacto. ■

El ‘Hirak’ argelino ante la pandemia

Prueba de una clara fractura entre gobernantes y gobernados, la resiliencia demostrada por el ‘Hirak’, a pesar de las limitaciones, se enfrenta a la resistencia del régimen actual.

Louisa Dris-Aït Hamadouche

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus tiene todas las características de una crisis: sorpresa, peligrosidad, capacidad de propagación, tensiones, desequilibrio de varios sistemas al mismo tiempo (sanidad, transporte, economía, etcétera). “Como consecuencia de una ruptura cierta del equilibrio seguida de la desestabilización de uno o más sistemas, una situación de crisis se produce con un estado de profundo desorden de sus actores y/o la desintegración organizacional, que conlleva daños y genera la necesaria toma de decisiones en un contexto de ambigüedad e incertidumbre” (Ratinaud Dufès, *Situación de crisis: una respuesta modelada en 3D*, 2014).

El análisis etimológico del término permite comprender de otra forma la crisis. La palabra “crisis” proviene del griego *krisis*, que alude a las ideas de juicio y decisión. La crisis, por tanto, es el momento en el que es necesario tomar decisiones que respondan a una valoración sin concesiones de la situación que la ha producido. La filosofía china, complementando esta idea, concibe la crisis como un peligro, pero también como una oportunidad. La oportunidad consiste entonces en tomar las decisiones acertadas. De todas estas definiciones, retendremos algunas palabras clave relacionadas con el tema de nuestro artículo: ruptura, desorden de los actores, decisiones necesarias e incertidumbres.

Ante la crisis sanitaria, el *Hirak* se ha visto privado de su espectacular modo de expresión, las marchas populares semanales. ¿Está en peligro el levantamiento popular que comenzó el 22 de febrero de 2019, amenazado por la desmotivación y el agotamiento? O, al contrario, ¿puede la crisis constituir una oportunidad que empuje al *Hirak* a evaluar sus propias fortalezas y debilidades con el fin de producir nuevas formas de militancia?

La pandemia, un obstáculo para el ‘Hirak’

Cuando comenzaron los llamamientos a la suspensión de las manifestaciones populares, establecieron los argumentos a favor y en contra de esta iniciativa. En la categoría de argumentos contrarios

aparecía ya el temor de que las autoridades aprovecharan la ausencia de una protesta visible y audible para intensificar la represión. En el campo opuesto, este miedo se atenuó, aunque solo fuera porque la represión del *Hirak* había comenzado en junio de 2019. En retrospectiva, la política represiva se puede dividir en tres fases con un objetivo preciso para cada una.

La primera fase comenzó cuando el entonces jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, decidió en uno de sus discursos quincenales criminalizar el uso del emblema amazigh. Esta decisión, tomada sin base legal, de forma unilateral y dirigida contra una práctica generalizada en el *Hirak*, pero también en eventos deportivos, culturales y políticos, justificó centenares de arrestos. Estas detenciones dieron lugar a decisiones totalmente contradictorias: liberaciones y absoluciones, pero también penas de prisión y multas. Demuestran, sobre todo, el deseo de dividir el levantamiento popular sirviéndose de una base identitaria y lingüística. De hecho, paralelamente a esta prohibición, apareció en las redes sociales una campaña antiamazigh extremadamente virulenta. Dirigida por políticos, páginas de Facebook e incluso medios audiovisuales, esta operación dio pie a una campaña de odio contra la población de habla amazigh. A grandes rasgos, se trataba de denigrar, criminalizar y demonizar a un sector de la población, acusado de estar a sueldo de potencias extranjeras o herederas del poder colonial. El “takhouine”, la acción de acusar a una persona o grupo de ser un traidor a la comunidad, se extendió durante varios meses.

La segunda ola de represión se produjo tras el anuncio de la convocatoria de elecciones presidenciales. El blanco de las detenciones fueron figuras emblemáticas del levantamiento popular como Karim Tabu, Fodhil Bumalla, Abdelwahab Fersaui, Samir Belarbi y muchos otros. Estas detenciones suscitaron una gran polémica, porque su *modus operandi* tenía más de secuestro que de detención en regla. Las realizaban los agentes de los servicios de inteligencia, en la calle, de paisano y sin citación previa. Se desconocía el lugar de detención y las familias permanecían sin noticias. Durante este periodo, el objetivo

Louisa Dris-Aït Hamadouche es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de Argel 3.

de los arrestos selectivos era sembrar el terror entre los militantes, privar al levantamiento popular de posibles líderes y desmovilizar al *Hirak* mientras se preparaban las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de 2019.

La represión en tiempos de pandemia

La tercera fase de la represión tuvo lugar durante la crisis sanitaria. Las autoridades aprovecharon la (inesperada) pausa del *Hirak* para reprimirlo e impedir que se reanudaran las protestas populares. Así, se impuso el cierre de todos los lugares donde se movilizaba a la multitud: mezquitas, estadios, salas de reunión... La lógica médica habría sido total si, al mismo tiempo, no se hubieran multiplicado las grandes contradicciones. Por ejemplo, las mezquitas se abrieron excepto para las oraciones del viernes, punto de partida de las protestas.

En el capítulo de la libertad de expresión, el toque de queda requería salvoconductos que se otorgaban con distintos criterios, ya que se excluyó a los periodistas de la prensa electrónica. Peor aún, se controlaban, sin ninguna notificación oficial, decenas de páginas de información digitales, como Maghreb Emergent y su Radio M, el sitio Tout sur l'Algérie TSA o incluso Casbah Tribune. En cualquier caso, las autoridades optaron por una comunicación basada en la estrategia de la negación: no había presos de conciencia; no había censura en los medios. Una estrategia de comunicación reforzada por el considerable endurecimiento del arsenal legal destinado a combatir las noticias falsas.

La política discriminatoria también se ejerció sobre los partidos políticos. Así, el gobierno prohibió a los partidos de la oposición organizar actividades (por ejemplo, la sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agrupación por la Cultura y la Democracia, el 25 de septiembre de 2020). Al mismo tiempo, partidos como el Frente de Liberación Nacional (FLN), la Agrupación Nacional para la Democracia (RND) e incluso Tajamou Amel El Djaïzaïr (TAJ) podían organizar mítines para animar a los argelinos a votar la Constitución el 1 de noviembre de 2020.

La ola de detenciones, persecuciones y citaciones continuó durante la crisis sanitaria. El 27 de marzo de 2020, la Fiscalía decretó la prisión preventiva para el periodista de Radio M y el corresponsal de Reporteros sin Fronteras Jaled Drareni (liberado el 19 de febrero de 2021); el 20 de abril, el tribunal de Sidi Mhamed en Argel condenó a un año de prisión a Abdelwahab Fersaui, presidente de la asociación Agrupación Acción Juvenil (fue puesto en libertad el 17 de mayo); Walid Kachida, fundador de la página de Facebook "Hiramemes", fue enviado a prisión preventiva el 27 de abril y posteriormente condenado a un año de prisión, seis meses de condena en firme, y al pago de una multa de 30.000 dinarios; fue puesto en libertad el 21 de enero de 2021.

A finales de 2020, las organizaciones de defensa de los derechos humanos publicaron informes relevantes: casi 100 presos de conciencia en prisión y 10 veces más cita-

ciones. La situación se agravó considerablemente cuando detenidos y abogados comenzaron a denunciar las condiciones de encarcelamiento de los presos. Desde la privación de contacto con el exterior, el aislamiento y la alimentación insuficiente, el maltrato llegó a la denegación de cuidados por enfermedades graves y torturas. Esta escalada represiva generó muchas condenas, poniendo a las autoridades políticas en una situación sumamente incómoda. En efecto, el discurso oficial en el que se exaltaban los méritos de la "nueva Argelia" – eslogan oficial adoptado por Abdelmadjid Tebbune desde su elección para referirse a la Argelia que siguió al reino del caudillismo (*la issaba*) – difícilmente podía consentir tales escándalos. Unos escándalos que a la opinión pública no le recuerdan al gobierno de la *issaba*, sino al del partido único y la lucha antiterrorista, dos períodos en los que se produjeron abusos contra los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos y condenas arbitrarias.

La pandemia, una oportunidad de reorganización para el 'Hirak'

El *Hirak*, al que la crisis sanitaria cogió desprevenido, ha tenido que enfrentarse a la necesidad de adaptarse y reorganizarse, no solo para seguir existiendo, sino también para permanecer visible y mantener la movilización. Esta reorganización ha tomado prestadas tres voces: la solidaridad, las redes sociales y las iniciativas políticas.

■ La reorganización basada en la solidaridad.

La crisis sanitaria creó necesidades para las que nadie tenía respuesta. De la noche a la mañana, miles de argelinos perdieron su empleo y se vieron privados de sus recursos diarios, sin ninguna compensación o alternativa. De hecho, los trabajadores informales del transporte público, los cafés, los restaurantes y de la construcción fueron los primeros en verse afectados por las medidas de contención, el cierre obligatorio de tiendas y el cese repentino de sus actividades. A estas necesidades ligadas a los medios de subsistencia, se sumaron las medidas de protección, como el gel hidroalcohólico, las mascarillas, los guantes o los equipos de protección, objetos que se han vuelto necesarios y que es muy difícil, si no imposible, encontrar en el mercado.

Entonces se constituyeron cadenas de solidaridad. En los barrios, las redes de *hirakistas* se dedicaron a recoger medicinas, productos de primera necesidad y medios de protección. En las redes sociales se multiplicaron las llamadas a voluntarios para producir batas y mascarillas. Los estudiantes fabricaron geles desinfectantes para compensar la falta en el mercado. Se crearon talleres de confección con voluntarios para producir mascarillas en cadena.

En el Oeste del país, el grupo Solidaridad Covid-19 Orán movilizó a 80 personas, entre ellas muchos estudiantes,



Manifestación del ‘Hirak’ cuando se cumplen dos años del movimiento. Argel, marzo 2021. / MOUSAAB ROUIBI/AGENCE ANADOLU VIA GETTY IMAGES

para realizar acciones cívicas como la desinfección de lugares públicos y la sensibilización sobre la necesidad de protegerse contra el coronavirus y sobre las medidas que se debían adoptar en caso de presentar síntomas. También fabricaron gel hidroalcohólico, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Por último, se movilizó a la gente en otro ámbito para apoyar a las familias que habían caído en la precariedad debido al desempleo provocado por el confinamiento. Así, reunieron paquetes de provisiones y los distribuyeron con total discreción entre los hogares de las familias necesitadas.

■ La reorganización en el espacio virtual como terreno político

A falta de una tribuna mediática, con excepción de algunos periódicos impresos, páginas digitales, y algunos canales privados, los argelinos se volcaron en el espacio virtual como plataforma, pero también como medio, para prolongar un activismo político clausurado en el espacio real. Esta práctica no apareció con el *Hirak*, sino que lo precedió.

Además de las posibilidades que ofrecen como herramientas de conexión social, compromiso cívico, participación política y medición de preferencias electorales, que ya han sido probadas en diferentes países, las redes sociales están emergiendo de hecho como un nuevo terreno político, pero desinstitucionalizado. La campaña contra el cuarto mandato fue el primer ejemplo. Sin embargo, con el levantamiento popular del 22 de febrero de 2019, el espacio virtual se convirtió en un verdadero campo político donde la pluralidad se ha expresado en una

multitud de formas de compromiso que van desde los foros de discusión hasta la disidencia más exacerbada. Así, en las primeras semanas del *Hirak* se crearon varias páginas de Facebook, destinadas principalmente a animar a los argelinos a movilizarse contra el quinto mandato o a invitarlos a expresar sus consideraciones sobre el proyecto político que vislumbraban. En esta estela, podemos citar, la página “Écris ta constitution” [Escribe tu constitución], lanzada por Amazigh Kateb, del grupo Gnawa Diffusion. O también páginas como HirakDz, Argelia Hirak, que ofrecían información sobre las manifestaciones y fomentaban la movilización popular. La disensión era más pronunciada entre los youtuberos, exiliados en el extranjero. Citemos a Amir Dz (860.000 suscriptores), Larbi Zitut (686.000 suscriptores) del movimiento Rachad, Abdu Semmar (129.000), Hichem Abud (209.000 suscriptores) o también Said Bensedira (172.000 suscriptores). Ex-diplomáticos, exoficiales de los servicios de inteligencia argelinos o incluso periodistas, estos y muchos otros, son en su mayoría condenados en Argelia u objeto de órdenes de detención internacionales. Estos youtuberos se impusieron como influyentes, y no dudaban en usar un tono virulento o incluso radical contra los funcionarios argelinos. Sus vídeos en directo son muy seguidos, especialmente durante la pandemia, cuando el bloqueo de los medios de comunicación se agudizó. Ya sea para disuadir a la gente de votar en el referéndum para la Constitución del 1 de noviembre de 2020, para comentar la enfermedad del presidente Abdelmadjid Tebbune, o incluso para presionar por la reanudación de las manifestaciones, estos youtuberos se convirtieron en la primera fuente de información para miles de internautas. Incluso si parte de su información resultaba ser infundada o falsa, estos disidentes del espacio virtual revelaron los límites de una estrategia de comunicación oficial concebida según referentes obsoletos. Tanto es así que las autoridades argelinas, civiles y militares, llegaron a movilizar todo un arsenal mediático para desacreditar estas plataformas y alertar a los argelinos de la influencia negativa de algunos youtuberos.

■ La reorganización mediante la producción de alternativas

El levantamiento popular argelino tiene varias peculiaridades. Desde el principio ha sido un movimiento político, pacífico y autoorganizado. Comenzó con llamamientos anónimos y continuó durante 13 meses sin interrupción. Cuando llegó la pandemia, se hicieron llamamientos, casi todos individuales, a suspender las manifestaciones. A la semana siguiente, las manifestaciones

se interrumpieron. Once meses después, siguen apareciendo llamamientos individuales que resuenan en las redes sociales para retomar las manifestaciones populares.

Sin embargo, esta inteligencia colectiva que ha permitido al *Hirak* resistir no ha respondido a todos los interrogantes. Incluso ha planteado otros. Entre las preguntas más recurrentes: ¿qué se puede hacer para salir del estancamiento? ¿Cómo dar a las consignas coreadas en las marchas un contenido político que permita su realización? ¿Qué papel tienen los partidos políticos, la élite? ¿Cómo superar las escisiones ideológicas que polarizaron a la sociedad en la década de los noventa? ¿El *Hirak* necesita líderes, representantes? Si es así, ¿cómo identificarlos? Si no es así, ¿cómo prescindir de ellos?

Durante este periodo, las autoridades han seguido su hoja de ruta, cuyo evento clave fue el referéndum para la reforma de la Constitución. Por su parte, el *Hirak* ha seguido resistiendo con los medios de que disponía. Ante la campaña mediática y partidista por la reforma de la Constitución, optó por el boicot. Las personalidades involucradas en el levantamiento, invitadas –oficialmente y por escrito– a comentar el proyecto de Constitución, se negaron. El 1 de noviembre, día del referéndum, la población abandonó las calles y los centros de votación. El índice de participación alcanzó oficialmente el 23% y el sí solo convenció al 67% de los votantes.

Junto al boicot aparecieron nuevas iniciativas dentro del *Hirak*. En octubre, un grupo de figuras del movimiento, abogados, exdetenidos, universitarios, periodistas y activistas de diferentes ideologías lanzaron Nida22, que incluye también organizaciones como Nabni, Ibtikar y varias ligas de defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa de múltiples ideologías propone organizar debates de ámbito local y regional para llegar a una conferencia del *Hirak* dotada de una hoja de ruta consensuada. Con motivo del segundo aniversario del *Hirak*, Nida22 lanzó “la semana de movilizaciones por el *Hirak*” a través de vídeos en directo y encuentros temáticos. También aparecieron iniciativas con una clara connotación ideológica. Del lado de los progresistas, citemos el Caman, Colectivo de los amigos del manifiesto argelino. En el bando ideológico opuesto, apareció “el congreso nacional del *Hirak*”, considerado próximo a Rashad, que aboga por el “enfrentamiento pacífico” con las fuerzas del orden y una estrategia de escalada como la desobediencia civil.

Por parte de los partidos políticos de oposición preexistentes, surgieron dos tendencias durante este periodo. La primera está constituida por partidos que se negaron a aceptar la hoja de ruta constitucional elegida por los gobernantes. Rechazaron categóricamente todas las votaciones por considerar que no podían dar una respuesta a la crisis política. En cambio, la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD por sus siglas en francés) propuso una conferencia nacional soberana que reuniera a todos los actores políticos, con el fin de buscar formas de salir de la crisis. El Movimiento por la Democracia Social (MDS) se mantuvo fiel al concep-

to de la doble ruptura, que suponía un cambio radical de sistema político y el rechazo a la corriente islamista. El Partido de los Trabajadores (PT) siguió abogando por una asamblea constituyente, mientras que la Unión por el Cambio y el Progreso (UCP) se distinguió al solicitar unas elecciones presidenciales anticipadas.

La segunda tendencia agrupa a las formaciones que mantuvieron una posición ambigua durante la elección presidencial de diciembre de 2019. Ambigua porque no participaron directamente, pero no llamaron a un boicot activo. Durante el año siguiente, su posición se fue concretando a medida que se acercaban al poder establecido. El partido que ilustra más claramente este giro de 180° es Jil Jadi: feroz oponente al cuarto mandato de Abdellaziz Buteflika, y en la primera línea del *Hirak* en febrero de 2019, apoyó unos meses más tarde al presidente Abderradjid Tebbune, participó en el referéndum para la reforma de la Constitución y pidió que se votara a favor. El Movimiento por la Sociedad y la Paz (MSP) y el Adala, parte del *Hirak* en sus inicios, también se decantaron por la participación, pero pidieron que se votara no el 1 de noviembre. En vísperas de las elecciones legislativas y locales, el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) podría unirse a los partidos favorables a la participación.

Conclusión

En el momento de redactar estas líneas, el levantamiento popular ya ha cumplido dos años. La situación sanitaria se ha estabilizado, ha comenzado la campaña de vacunación y el *Hirak* ha vuelto a pisar las calles. Esta es la primera vez que se reanuda un levantamiento popular con las mismas consignas e impulso, después de una pausa de casi un año.

¿Podrá esta nueva etapa capitalizar los logros de dos años de activismo en diferentes formas? La resiliencia demostrada por el *Hirak* se enfrenta a la del régimen actual. Un cara a cara de desgaste que obliga a los actores del levantamiento popular a una evaluación, cuestionamiento y planificación perpetuos. La pandemia ha confirmado dos hipótesis importantes sobre el *Hirak*. La primera es que se trata de un mar de fondo y no de un fenómeno superficial efímero. Sus demandas son la expresión de una clara división entre gobernantes y gobernados, lo que significa que la solución implica una profunda revisión del sistema de gobernanza y no se alcanzará con medidas superficiales.

La segunda hipótesis confirmada se refiere a los obstáculos que continúan pesando sobre el levantamiento popular. La falta de nuevas fuerzas estructuradas y organizadas, el rechazo a cualquier representación, la brecha que divide a una parte de la élite y la incapacidad de los partidos políticos y organizaciones sindicales actuales para constituir un relevo creíble son otras dificultades que hay que superar. El logro de los objetivos políticos del *Hirak* depende en parte de que se consigan superar o esquivar estos obstáculos. ■

Canarias: gestión local y de emergencia para unos flujos migratorios entre continentes

Priorizar el retorno y reforzar el control fronterizo y los acuerdos de cooperación no evitará que la crisis migratoria se repita.

Xavier Aragall Flaqué

Durante 2020, y de manera especial en el último trimestre, el número de personas que llegaron a las islas Canarias desde la costa africana tuvo un crecimiento muy destacado y alcanzó unas cifras que recordaban al anterior episodio de 2006. Unas cifras que no deben esconder el factor humano que hay detrás. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 600 personas perdieron la vida en este periodo. Esta cifra contabiliza las muertes verificadas pero, según la ONG Caminando fronteras, podría triplicarse si se tienen en cuenta las personas desaparecidas durante la travesía marítima y sobre las cuales no hay certificación oficial. Además, la concentración en tiempo y espacio desbordó la capacidad de acogida y respuesta ágil de las administraciones públicas y produjo la concentración de personas en condiciones inhumanas en espacios habilitados de manera improvisada. Todo esto, en un momento muy singular como el desencadenado por la pandemia de la Covid-19. Posteriormente, fueron reubicados en apartamentos turísticos vacíos y se habilitaron campamentos en antiguas instalaciones militares, pero siguen constatándose déficit en las condiciones que ofrecen, así como problemas para la identificación de las personas y lentitud a la hora de procesar las demandas de asilo y darles respuesta ágil.

Para analizar esta situación es preciso ampliar el enfoque y enmarcar esta emergencia local, y su compleja gestión, en su contexto geográfico y político: la gestión de flujos migratorios entre dos continentes, más concretamente entre la Unión Europea y el Norte de África. La llegada de inmigrantes a las islas Canarias está estrechamente vinculada con las dinámicas migratorias en el Mediterráneo, particularmente con la evolución de los corredores central y occidental, puntos que canalizan flujos migratorios procedentes tanto de países del Magreb como de países subsaharianos. En ambos casos, la evolución de la gestión por parte de la UE de estos flujos ha ido caracterizándose por las medidas de freno y contención que combinan la cooperación en materia de gestión y control con un

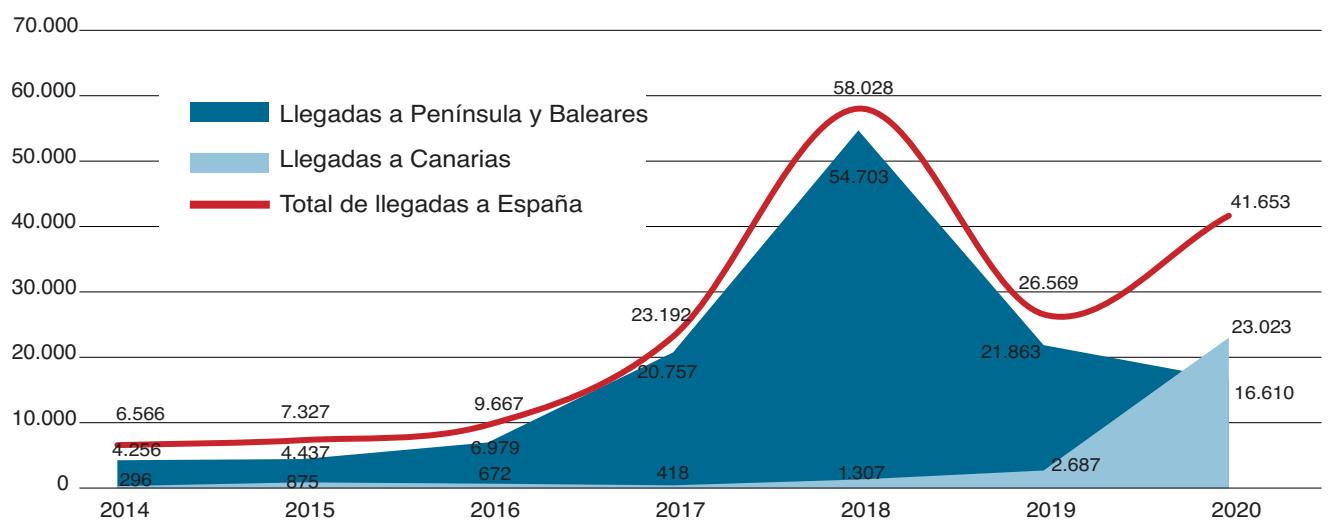
importante componente de externalización hacia los países de origen o tránsito de estas migraciones hacia la UE.

Como si de vasos comunicantes se tratara, la contención en un corredor concreto desvía los flujos hacia otros y determina por dónde se intentará cruzar el Mediterráneo. La ruta canaria o de África occidental se ve directamente afectada por esta lógica. De manera cíclica unos corredores tienen aumentos destacados de estos intentos de migración, crecen los naufragios, la pérdida de vidas humanas, y la necesidad de dar respuesta a las personas que consiguen llegar a la orilla europea. Tras un episodio de llegadas masivas, se ponen en marcha políticas y programas orientados a frenar estas llegadas y en consecuencia se reorientan los flujos migratorios. Como reflejan los datos, la ubicación del número de llegadas marítimas varía de año en año. La cuestión de fondo es que la frontera mediterránea presenta una falla estructural y la lógica securitaria con la que se quiere sellar una frontera entre el Norte desarrollado y el Sur en vía de desarrollo hace que estas situaciones no se solucionen y sigan repitiéndose periódicamente. Porque si bien el Mediterráneo no es la única zona de intersección del mundo entre ese Norte y ese Sur, sí es donde más cerca están dos realidades opuestas, sobre todo en relación con las expectativas de futuro de sus ciudadanos, uno de los principales motivos para emprender un proceso de emigración. Por eso, la aplicación práctica de esa lógica de contención no evita la llegada de inmigrantes y refugiados.

Durante 2020 el número de personas que llegaron por vía marítima a Europa cruzando el Mediterráneo fue menor que el año anterior. Estas cifras siguen la tendencia descendente en la región euromediterránea desde 2015, año que alcanzaron su máximo, con poco más de un millón de personas, a raíz de la llamada crisis de refugiados. En el caso de la ruta occidental, la llegada de personas por vía marítima a España en 2020 concentró un 40% de estas llegadas en todo el Mediterrá-

Xavier Aragall es asesor técnico de Políticas Euromediterráneas, responsable de Migraciones y de la encuesta del proyecto EuroMeSCO, IEMed.

Llegadas por vía marítima 2014-2020



Fuente: Elaboración propia, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Gráfico: Adriana Exeni.

neo (casi el doble que en 2019) y más de la mitad de este incremento se concentró en la vía atlántica, esto es, en las islas Canarias.

Las cifras del Ministerio del Interior de España muestran que el incremento de llegadas por vía marítima respecto al año anterior fue del 54%, pero el desglose entre las llegadas a la Península y Baleares y las llegadas a las islas Canarias es muy esclarecedor. Mientras que en el primer caso las llegadas descenden un 24%, Canarias experimenta un aumento del 756%. El descenso de llegadas a la Península y Baleares se explica por las medidas de control fronterizo que se implementan en el Norte de Marruecos y que daban respuesta al incremento de salidas de 2018.

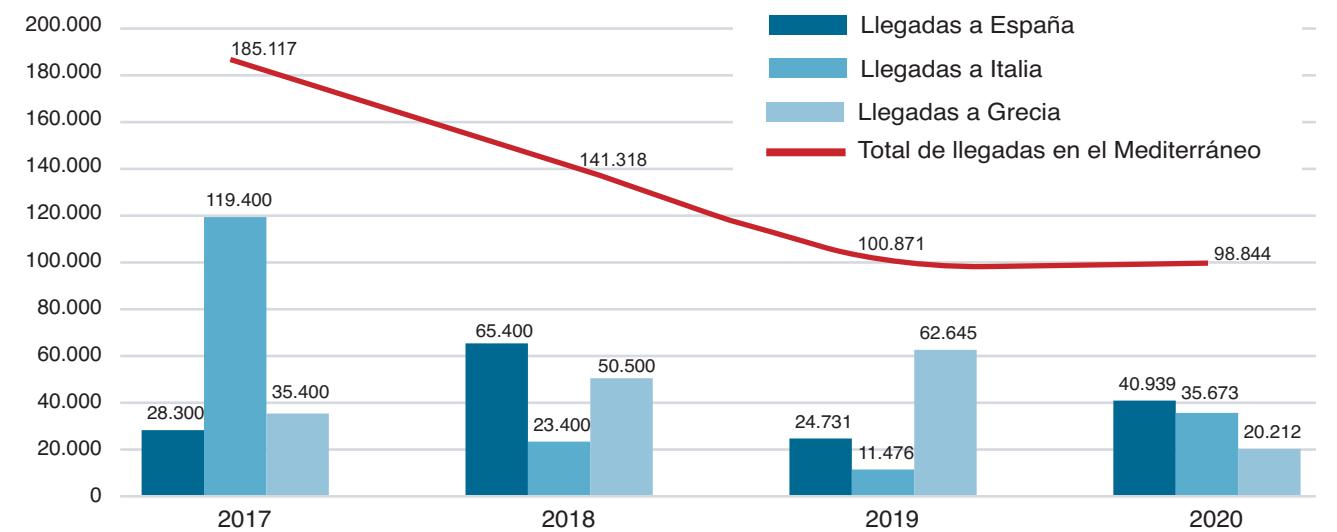
La ruta conocida como la de África occidental empezó a tener una dinámica creciente en el período 2002-2005. Durante esos cuatro años, cerca de 32.000 personas llegaron al archipiélago canario, pero fue en 2006 cuando llegó a su máxima actividad: entonces la salida de cayucos de las costas senegalesas y mauritanas hacia las islas Canarias traería más de 30.000 personas en un solo año. Los años posteriores, 2007 y 2008, seguirán teniendo un importante número de llegadas (20.000 entre los dos años). Los acuerdos de vigilancia fronteriza y de repatriación firmados entre los Estados implicados –Senegal, Mauritania, Marruecos y España– tendrán impacto a partir de 2009 con una drástica reducción del número de personas llegadas que se prolongará durante una década.

A las medidas bilaterales que implementó España, cabe añadir la puesta en marcha a mediados de 2013 de la Asociación para la movilidad (*Mobility Partnership*) entre la UE y Marruecos, que tuvo como impacto una destacada disminución del flujo migratorio en esta ruta. La Asociación para la movilidad formaba par-

te de las iniciativas que desde la UE se promovieron para implementar una gestión integral y ordenada de las migraciones y estaban pensadas para complementar la actuación de vigilancia de la frontera a partir de la introducción de programas que permitieran la movilidad de trabajadores inmigrantes por canales establecidos y regulares. No obstante, será el bloqueo fronterizo, condicionado a una agenda de negociación con Marruecos, el principal determinante de la evolución de estos flujos.

Esto se debe a que el corredor mediterráneo occidental, y de manera indirecta el corredor de África occidental, tiene unas características específicas, ya que Marruecos es desde hace más de una década país de tránsito y origen de flujos migratorios, cuya gestión se ha convertido en un recurso de negociación política entre el gobierno marroquí y España y por extensión con la UE. Para que las personas de países de África occidental lleguen hasta el punto de embarque deben cruzar Marruecos y los controles por parte del Estado marroquí pueden ser más o menos intensos. Que las migraciones sean un recurso de negociación política no es una estrategia ajena en la región, también sucedió con Turquía durante la negociación del acuerdo de 2016 con la UE. La respuesta de Bruselas siempre incide en la misma dirección: ofrecer a los países vecinos del Sur apoyo e incentivos financieros para controlar las migraciones y externalizar así parte de esta gestión y control. En el caso de Marruecos, en julio de 2018 la Comisión Europea dotaba con 55 millones de euros un programa para reforzar la gestión de la frontera marítima en el Magreb. Ese año se había dado un importante incremento del número de llegadas por vía marítima, casi triplicando las cifras de 2017. En diciembre de 2020, tras el aumento de llegadas a Cana-

Llegadas por vía marítima (Mediterráneo) 2017-2020



Fuente: Elaboración propia, Ministerio del Interior. Gráfico: Adriana Exeni.

rias, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, visitaba Rabat como gesto para reforzar la posición de la UE en el apoyo a Marruecos en la gestión fronteriza, apoyo que se había traducido en más de 340 millones de euros recibidos por Marruecos durante el último lustro.

En este sentido, se puede decir que en el transcurso de los últimos años, se ha ido acentuando la tendencia por la que los corredores oriental y occidental van amplificando las medidas de contención mediante una cooperación entre la UE y los países de origen y tránsito en materia de gestión y control, con un importante componente de externalización. Unas medidas que, apoyadas por los Estados miembros, quieren restringir el acceso a la UE al tiempo que permitirían despreocuparse del incumplimiento que en materia de derechos básicos de las personas puedan estar realizándose en los países de tránsito. El mismo esquema es válido para el corredor central donde Italia rechaza cualquier elemento de gestión fuera de los marcos de externalización establecidos, agravando la situación de indefensión y vulnerabilidad de las personas que están en Libia donde, a pesar del trabajo de las agencias internacionales y la cooperación de la UE, se ha constatado que muchos de ellos siguen siendo víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos más básicos, cuando no de la muerte en la travesía marítima.

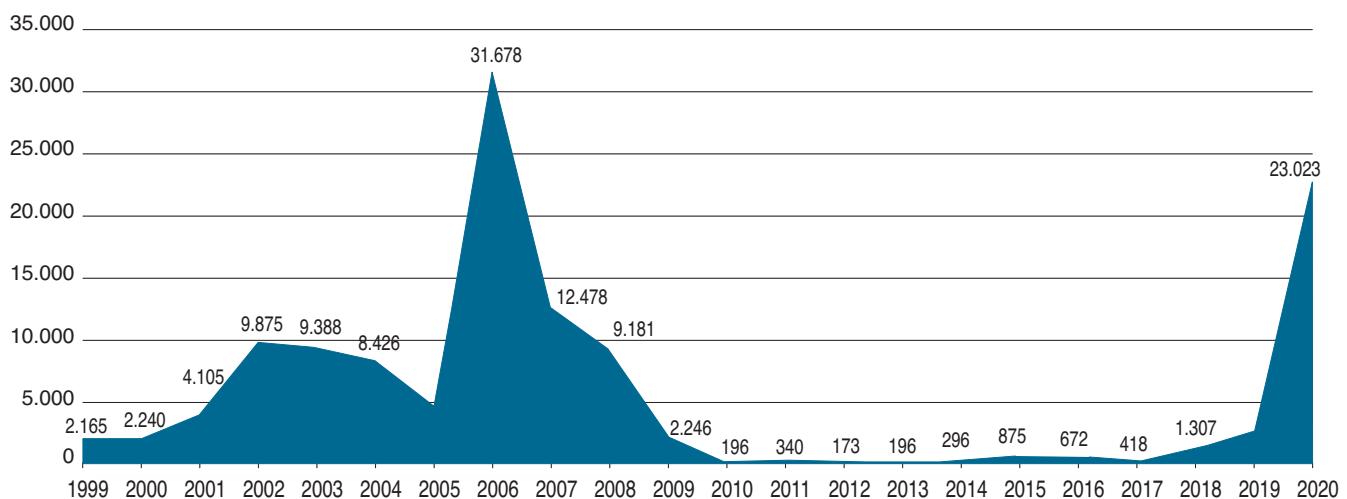
Han pasado muchos años desde 2006, cuando la entonces llamada “crisis de los cayucos” desencadenó una situación como la actual. Las causas y motivos para emigrar siguen vigentes, pero ahora con la complejidad añadida como consecuencia de los primeros efectos del cambio climático y del impacto de la pandemia de la Covid-19

tanto en la propia movilidad, puesto que ha paralizado las migraciones intraafricanas, como en el impacto en la economía, por el que el horizonte de recuperación se ve lejano y difícil. En consecuencia, aumenta la elección de optar por la UE como destino migratorio.

Al mismo tiempo, el hecho de no haber podido consensuar y desarrollar una estrategia efectiva y de largo recorrido para gestionar de manera ordenada las migraciones regulares, ni bilateral ni multilateralmente, ha hecho que la opción de la inmigración irregular fuese la única vía posible para muchas personas que buscan abrirse futuro, aunque esto implique siempre el uso de vías peligrosas y arriesgadas, aumente la vulnerabilidad de las personas que la practican en todas las fases del trayecto y, una vez en Europa, dificulte el proceso de acogida e integración.

Han pasado 15 años y no solamente no se ha avanzado en soluciones efectivas, sino que han cambiado las percepciones sobre las migraciones. Tal y como indica Eurostat, a partir de 2015, coincidiendo con la llegada de más de un millón de personas a la UE fruto de la crisis humanitaria desencadenada por la guerra en Siria, la gestión de la llegada de inmigrantes y refugiados se convirtió en la primera preocupación de los europeos. En los años posteriores, a pesar de que las medidas restrictivas redujeron las llegadas irregulares de manera significativa, la percepción de las opiniones públicas siguió siendo que las migraciones no se gestionaban adecuadamente y que la integración de estas personas, tanto por los Estados como por las administraciones locales, no era satisfactoria. Esto, sumado a un creciente discurso político contrario a las migraciones que obtiene cada vez más apoyo en las elecciones celebradas en los Estados miembros de la

Llegadas por vía marítima a las islas Canarias (1999-2020)



Fuente: Elaboración propia, Ministerio del Interior y Nicolás Castellano "20 años de Inmigración en Canarias", Cadena Ser. Gráfico: Adriana Exeni.

UE, ha condicionado la forma en que se plantea la gestión migratoria.

El nuevo pacto para la inmigración y el asilo

La aprobación a finales de 2020 por la Comisión Europea del nuevo pacto para la inmigración y el asilo no ha quedado al margen de esta tendencia. Se trata de un pacto fruto de un largo proceso negociador para reconciliar el posicionamiento de países del centro y Este de Europa (Polonia, Hungría o Austria), reacios a acoger inmigrantes y refugiados, con los países del Sur de Europa (Grecia, Italia, España y Malta), puntos de llegada a la UE de flujos migratorios y demandantes de asilo que cruzan el Mediterráneo, y que eran partidarios de compartir entre los Estados miembros de la UE la gestión de la acogida.

Para consensuar el pacto se reforzó la dimensión exterior de la gestión migratoria con medidas que dieran respuesta a los países del Sur. Se plantea un cambio de paradigma a partir de la elaboración de acuerdos de cooperación con países de origen y tránsito de las migraciones, acuerdos que tendrán que hacerse a medida (*tailor made*) dejando atrás la idea de hacer el mismo acuerdo para todos los países (*one size fits all*). Acuerdos o partenariados que incluirán elementos como, por ejemplo, el apoyo en la acogida de refugiados, en la lucha contra el tráfico ilícito (*smuggling*), el retorno y readmisión, y el desarrollo de vías de migración regular. Por otro lado, en lo que concierne al control fronterizo, se quiere establecer un sistema homogéneo y de obligado cumplimiento de control de las personas que llegan a la UE (identificación, revisión médica, demanda de asilo etc.) que permita resolver de manera rápida la entrada o no en la UE. También se introduce el con-

cepto de solidaridad efectiva. Pensado para apoyar a los países que reciben en primera instancia los flujos migratorios en la orilla mediterránea, este sistema plantea un mecanismo efectivo y solidario de realojamiento que dé respuesta a las necesidades que se produzcan en un momento determinado y aporte los medios necesarios para cada ocasión, ya sea para gestionar una crisis de refugiados o bien una situación de presión migratoria prolongada. A estos elementos se le ha sumado el concepto de solidaridad flexible, por la que los países no estarán obligados a recibir y acoger refugiados o inmigrantes que lleguen a la UE, es decir, deberán aportar medios para gestionarlos, pero no estarán obligados a recibir a las personas.

En resumen, el nuevo pacto plantea muchos más mecanismos de contención y control que de gestión ordenada y abre la puerta a rechazar abiertamente cualquier medida que signifique compartir el esfuerzo de dar respuesta a las necesidades humanitarias como las que se plantearon en Canarias durante el último trimestre de 2020. Asimismo, se abre camino la opción dura a la hora de gestionar la llegada de personas que conlleva la necesidad de dar una respuesta rápida, saber en un breve margen de tiempo quién tiene derecho y quién no a quedarse en la UE para organizar un retorno rápido.

En conclusión, la crisis humanitaria vivida en Canarias puede ser un episodio que se repita cíclicamente, puesto que la tendencia actual de reforzar el control fronterizo, priorizar el retorno y reforzar los acuerdos de cooperación, sobre todo en materia de control en los países de origen y tránsito, son los ingredientes que permiten que se mantengan las condiciones que la han provocado, sin ofrecer soluciones más allá de la contención coyuntural. ■

Un clásico radicalmente moderno

Visita la nueva politicaexterior.com



POLÍTICA EXTERIOR

Último número
#PolExt200
¡CONSIGUELO!

Inicio Actualidad ▾ Política Exterior ▾ Informe Semanal ▾ Afkar-Ideas ▾ Libros ▾ Suscríbete

(0)  



Ecuador: Lasso, Correa y los límites del extractivismo
LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE 

Perú se encamina hacia la ingobernabilidad
LUIS PÁSARA 

Amazon contra sindicatos: ¿derrota contundente o victoria pírrica?
JORGE TAMAMES 

Perú: elecciones con crisis y sin certezas
KATHERINE ZEGARRA 

La fragilidad de la estrategia europea hacia China

En diciembre de 2020 la situación parecía clara: EEUU iba a la deriva y la UE y China estaban forjando un eje de cooperación pragmática en materia de política comercial, de inversión y climática. Solo unos meses después, el caleidoscopio ha cambiado abruptamente.

ADAM TOOZE



“¿Qué es Ucrania?”
Sobre la posible (nueva) escalada en la guerra ruso-ucraniana
NICOLÀS DE PEDRO



Los nuevos retos del exilio tibetano
ROBERT BARNETT Y ALLEN CARLSON



Las repercusiones globales del golpe en Myanmar
THITINAN PONGSUDHIRAK



Cambiar la faz de las relaciones entre China y EEUU
ANNE-MARIE SLAUGHTER Y SAMM SACKS

Política Exterior

politicaexterior.com

Facebook - Twitter

- 52 Consecuencias de la Covid-19: una lección para repensar la sostenibilidad de las finanzas públicas**
- 56 Transición hacia una energía limpia en el Norte de África**
- 60 La región MENA pos-Covid: de la transformación digital a la transformación a través de lo digital**



Centro de formación en tecnología de la información en la ciudad de Khouribga, en el centro de Marruecos. Noviembre de 2020./FADEL SENNA/AFP VIA GETTY IMAGES

Oportunidades de recuperación tras la pandemia

Como en el resto del mundo, la pandemia ha tenido graves repercusiones económicas en la región MENA, aunque con efectos muy asimétricos: las tasas de crecimiento estimadas para 2020 fluctúan entre el 3,5% de Egipto y el -7% de Marruecos y Túnez. Estos resultados son consecuencia de las medidas de restricción de la actividad económica y de la movilidad, así como de la dependencia de mercados como el europeo que también han visto mermada su actividad. Pero más allá de estos efectos, los países de la región se enfrentan a unos retos estructurales que limitan su progreso y desarrollo. Sin embargo, la crisis actual puede ser una

oportunidad para solucionar estos problemas y lograr una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas.

Dos sectores han demostrado ser estratégicos tanto durante la pandemia como para la recuperación económica pos-Covid: energía y tecnologías de la información. La región debe reducir su dependencia de los hidrocarburos, reevaluar sus estrategias y avanzar hacia una energía limpia, para construir un sector energético sólido, seguro y limpio.

Por otro lado, es necesario emprender una transformación digital, para reducir la brecha digital agravada por la pandemia, impulsando la colaboración público-privada.

Consecuencias de la Covid-19: una lección para repensar la sostenibilidad de las finanzas públicas

Roger Albinyana

Los efectos de la Covid en la región han sido asimétricos: las tasas de crecimiento estimadas para 2020 fluctúan entre el 3,5% de Egipto y el -7% de Marruecos y Túnez

Mercado laboral, economía informal, falta de financiación de las pymes o déficit del modelo de gobernanza son algunos de los problemas estructurales de la región

Es necesario reorientar el gasto público hacia educación, sanidad y políticas de protección social, así como la búsqueda de más sostenibilidad en las finanzas públicas

Al contrario de lo que uno podría imaginar, los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19, aun siendo de una intensidad jamás vista en el conjunto de la región en los últimos 40 años, han tenido una distribución muy asimétrica entre los países del sur del Mediterráneo. Las tasas estimadas de crecimiento económico para 2020 fluctúan entre el 3,5% para Egipto y el -7% para Marruecos y Túnez (FMI, 2020), sin incluir aquí los valores proyectados para economías como la libia y la libanesa que acarrean contracciones del producto agregado muy superiores a consecuencia de conflictos políticos y civiles, que nada tienen que ver en su origen con la pandemia. La única economía que ha crecido durante este periodo en la región ha sido la egipcia por la laxitud en las medidas de restricción impuestas y los ajustes macroeconómicos anteriores a la pandemia.

Sin duda, la magnitud de estas caídas de la producción agregada se debe, en primer lugar, a la intensidad de las medidas que han restringido la actividad económica a lo largo de 2020. Es resultado también del impacto de estas medidas en la estructura sectorial de las economías y a la exposición de estas a otros mercados que hayan visto fuertemente mermada su actividad económica, como el europeo.

Así pues, Marruecos o Jordania, países que han impuesto enormes restricciones a la movilidad y a la actividad

económica desde marzo de 2020 en aras de la seguridad sanitaria, contrastan con otros como Egipto con una política de restricciones mucho más laxa y con un tejido económico de mayor tamaño y, por ende, más resiliente a los choques ocasionados por la pandemia. En el conjunto del área del sur del Mediterráneo, los sectores económicos que dependen de una mayor movilidad como el comercio o la inversión extranjera, el turismo y las remesas son los más golpeados por la pandemia y los que causan mayores pérdidas en el producto agregado. Ello sin contar que en estos países la evolución económica también depende en gran medida de los precios de las materias primas, en particular de los hidrocarburos, tanto para los exportadores –Argelia y Libia–, como para los importadores –el resto–, lo que ha tenido su incidencia en el crecimiento económico a razón de la volatilidad de los precios y demanda experimentada a lo largo de 2020.

Retos estructurales de índole socioeconómica

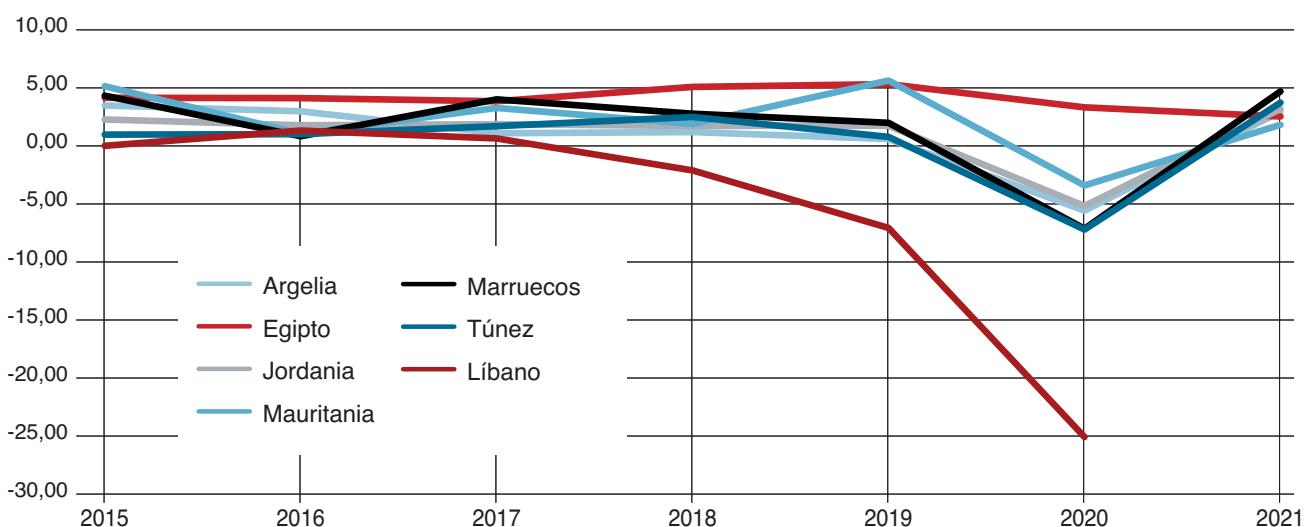
Sería extremadamente simplista achacar los problemas a los que deben hacer frente estos países a los meros efectos perversos de la pandemia sin tener en cuenta el abanico de retos de índole socioeconómica y de

desarrollo humano a los cuales se enfrentan desde hace más de una década. En efecto, estos retos estructurales limitan enormemente el progreso en desarrollo humano y ponen de manifiesto que el crecimiento económico experimentado en la mayoría de países del Sur del Mediterráneo en las dos últimas décadas no ha sido inclusivo (FMI, 2018). Los ámbitos en los cuales discurren estos desafíos son los siguientes:

- el mercado de trabajo en la región demuestra una incapacidad manifiesta para crear suficiente ocupación sostenible y de calidad que permita absorber toda la oferta de mano de obra existente, en particular de los jóvenes graduados que buscan salidas desesperadas como la emigración hacia Europa y los países del Golfo. La tasa de paro juvenil en la región se sitúa de media alrededor del 30% y ha permanecido invariable, en algunos casos con tendencia ascendente, en los últimos 10 años (OIT, 2020). Teniendo en cuenta que la población joven (15-29 años) representa algo menos del 30%, una proporción sobre el total de la población nada despreciable, el doble que la de jóvenes en economías de la OCDE, su exclusión del mercado de trabajo puede considerarse como el primer factor de inestabilidad política, social y económica en la región y el primer factor que explica la emigración de los jóvenes, aun a riesgo de arruinar sus propias vidas;

Roger Albinyana es director del departamento de Políticas Regionales Mediterráneas y Desarrollo Humano en el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed). Profesor asociado en la Universidad de Barcelona.

Crecimiento del PIB en los países del Sur del Mediterráneo (2015-2021)



*Valores estimados para 2020 y 2021.

Fuente: Elaboración propia. Fondo Monetario Internacional. Gráfico: Adriana Exeni.

– la economía informal llega a tasas tan elevadas, como el 34% del PIB y el 71% de la ocupación en Líbano o el 63% de la ocupación en Marruecos (GiZ, 2019). Este sector precariza el mercado laboral e invisibiliza a sus ciudadanos, los excluye de cualquier tipo de protección y derechos sociales, perpetuando su exclusión del sistema económico regulado y disminuyendo la necesaria movilidad social que debe existir en cualquier estructura económica;

– la exclusión de la mujer de la economía en los países del Sur del Mediterráneo con las tasas de participación femenina en el mercado laboral más bajas del mundo, que se sitúan alrededor del 20% (Banco Mundial, 2020), entre 40 y 50 puntos por debajo de las tasas de participación de la fuerza laboral masculina. Este hecho no solo excluye a casi la mitad de la población de su contribución a un desarrollo inclusivo, sino que condena a muchas mujeres a la pobreza, la exclusión social y la dependencia del hombre en el marco de una estructura social y familiar anacrónica y que no garantiza la igualdad efectiva. Esta situación tan gravosa para las mujeres se ve acrecentada por marcos legales que no siempre contemplan la igualdad de género y la lucha contra las prácticas discriminatorias;

– el tejido económico, formado en un 95% por empresas micro, pequeñas y medianas (pymes), y que a su vez son fundamentales para la estabilidad socioeconómica, tiene enormes dificultades para acceder a la financiación y a la internacionalización. En efecto, en Egipto únicamente el 6% de las pymes tiene acceso regular a financiación pública y privada, y el 95% de las empresas pequeñas no tiene capacidad de exportación (*World Bank Enterprise Survey 2017*). En Marruecos, solo un 18% de las pymes tiene acceso a financiación, mientras que en Túnez únicamente un 12% de las pymes tiene capacidad para exportar (Idem). En esta línea, en el conjunto de la región, el 1,5% de todas las empresas, entre las cuales solo el 0,4% de las pymes, se beneficia de la participación en cadenas de valor globales (EMEA, 2018), lo que refleja un déficit inequívoco de internacionalización en comparación con el resto de economías emergentes del mundo;

– el modelo de gobernanza pública alberga carencias importantes en el proceso de ejecución de la política pública a causa de capacidades limitadas en las administraciones. Estos déficit revierten negativamente, por ejemplo, en la regulación del sistema educativo y las políticas del mercado de trabajo,

dos pilares fundamentales de las políticas públicas. Asimismo, años con regímenes autoritarios y patrimonialistas han exacerbado la corrupción con prácticas como el clientelismo y el nepotismo que son muy recurrentes en muchos de los países de la región (Banco Mundial, 2016). Estas formas de comportamiento corrupto han impactado en la calidad de los servicios públicos (Transparencia Internacional, 2019), erigiéndose como un gran obstáculo para el desarrollo humano sostenible. Más allá de sus consecuencias extremadamente negativas para la democracia y el Estado de derecho, la corrupción complica la regulación del mercado, obstaculiza el crecimiento impulsado por el sector privado y desalienta la inversión.

Los estragos y las respuestas de las políticas públicas a la pandemia

Las restricciones sobre el normal funcionamiento de la economía adoptadas, con mayor o menor intensidad desde marzo de 2020, no solo han provocado una re-

**Países que han implementado medidas extraordinarias de asistencia social
(desde marzo de 2020)**

Suministrador	Transferencias monetarias			Transferencias en especie			Otras políticas de rentas Gobierno
	Gobierno	Agencias ONU		Gobierno	Agencias ONU		
Argelia	✓			✓			
Egipto	✓	✓		✓			✓
Jordania	✓		✓	✓			✓
Líbano	✓						✓
Libia					✓		✓
Mauritania	✓			✓			✓
Marruecos	✓			✓			✓
Palestina	✓			✓		✓	✓
Siria	✓		✓	✓		✓	✓
Túnez	✓						

Fuente: elaboración propia con datos de la CESPAO, Banco Mundial, OIT, 2020.

cesión económica autoinfligida, sino que también han causado un aumento considerable de los niveles de endeudamiento público. Se estima que en 2020 la deuda pública de la región MENA crecerá de media hasta el 95% del PIB (FMI, 2021) lo que se traducirá en un margen fiscal inferior para mantener o aumentar las políticas públicas de protección social, especialmente para los grupos poblacionales más desfavorecidos. En este contexto, parece razonable concluir que, en aquellos países más golpeados por conflictos armados, crisis humanitarias y de refugiados, el efecto de la pandemia será especialmente duro. No obstante, para el resto de países de la región se esperan igualmente efectos especialmente funestos en cuanto al aumento de la pobreza y las desigualdades, así como en grupos ya de por sí vulnerables.

Si en el conjunto de la región MENA, se observaba un repunte del indicador de pobreza extrema a partir de 2014 como consecuencia de los crecientes conflictos, a partir de marzo de 2020 la pandemia ha agravado esta situación intensificando este crecimiento de la pobreza (Banco Mundial / PSPR, 2020). Esta preocupante tendencia al alza de la población pobre en la región (del 2,3% en 2013 al 7,2% en 2019), diverge de la evolución de este indicador para el resto de regiones emergentes a nivel global don-

de se observa una bajada pronunciada y continuada del indicador de pobreza extrema desde los años noventa hasta marzo de 2020 (Idem). El aumento de la pobreza extrema está correlacionado con una destrucción de empleos, tanto en la economía formal como informal y, por consiguiente, con una disminución de la capacidad de poder adquisitivo de las familias para acceder a una cesta básica de alimentos.

Asimismo, el impacto socioeconómico de la Covid-19 se refleja en un incremento de los indicadores de desigualdad de renta en los países del Sur del Mediterráneo. Unos indicadores que ya situaban a la región como una de las que concentra mayores desigualdades en todo el mundo antes de la crisis de la Covid-19 con valores en el índice GINI que oscilaban entre el 27,6 en Argelia y el 39,5 en Marruecos o el 41,5 en Turquía (últimos valores estimados disponibles en *World Bank Data 2021*). En este sentido, se espera que la desigualdad de renta se ensanche hasta niveles que no se habían observado desde la década de los noventa (CESPAO, 2020).

Los grupos de población más vulnerables, susceptibles de padecer una mayor afectación socioeconómica por la pandemia, lo que incrementa potencialmente su exclusión social, son mujeres, personas de edad avanzada, refugiados e inmigrantes en situación

irregular, niños y personas con discapacidades.

Por todo ello, la pandemia ha revelado la importancia de que los países cuenten con una extensa red pública de protección social y laboral ya que está resultando esencial para acrecentar la resiliencia de la población ante la crisis, especialmente para los grupos poblacionales más vulnerables. En este sentido, se estima que un 55% de la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de protección social (OIT, 2020), y en particular entre los países del Sur del Mediterráneo el gasto en protección social (excluyendo el gasto sanitario) se sitúa alrededor del 7% del PIB, cuando la media ponderada en los países del Norte del Mediterráneo se eleva hasta el 17,7% (Idem). Por poner algunos ejemplos: en Túnez, el 54% de la población considerada de edad avanzada recibe una pensión, tasa aun insuficiente pero que se ha incrementado en los últimos años del 33,8% en 2015 al 54% en 2017. Por el contrario, las prestaciones para desempleados son escasas en toda la región y, por lo general, se concentran en una minoría de la población que atiende la economía formal. En definitiva, la mayor parte de los países de la región declaran que menos de un 50% de la población está cubierta por la Seguridad Social (OIT, 2018).

Los mecanismos de asistencia social, especialmente las transferencias monetarias, y entre ellas las no condicionadas, son claramente insuficientes, aunque se hayan ampliado en los últimos años, y ello está impactando con fuerza en la gestión de la crisis económica. A esto hay que sumar una reducción muy significativa de los flujos de remesas procedentes de emigrantes en países terceros, principalmente de Europa, países del Golfo y América del Norte, quienes a su vez han visto mermados sus ingresos. En este contexto, los países más afectados son Palestina, Líbano y Jordania, cuyos PIB dependen de los flujos de remesas en un 16%, 13% y 10% respectivamente (*World Bank database 2021*).

Todos los países de la región han implementado políticas sanitarias, fiscales, monetarias y financieras para mitigar el impacto de la pandemia. En primer lugar, la política fiscal se ha utilizado para paliar los efectos de la crisis en las familias y las empresas, y los paquetes fiscales, incluidas algunas medidas extraordinarias, han sido importantes. En esta línea, las medidas de gasto aprobadas por los gobiernos se han centrado en fortalecer las prestaciones por desempleo, las transferencias monetarias a hogares con ingresos bajos y los subsidios a las pymes, entre otros.

Una salida a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia

Esta recesión global sin precedentes se produce en un contexto marcado por elevados niveles de deuda. Si bien es cierto que las economías del Sur del Mediterráneo muestran menores niveles de deuda, esencialmente en los sectores público y financiero, también lo es que su estabilidad financiera está condicionada por las fluctuaciones en los precios de las materias primas, la reducción de los flujos de comercio internacional e inversiones, remesas y turismo internacional, el deterioro de sus divisas nacionales y la calidad crediticia. A todo ello se suma un deterioro de las condiciones institucionales y políticas en la mayoría de los países, lo que les sitúa en un escenario de gestión pública muy complejo y altamente volátil, pero también ante la posibilidad y el desafío de acelerar un plan de reformas que dé respuesta a algunos de los problemas estructurales a los que ya se ha hecho referencia.

Distintos organismos internacionales y regionales han intervenido con programas de ayuda inmediata o asistencia técnica. Desde el Fondo Monetario Internacional con su In-

Países que han implementado medidas extraordinarias de protección laboral (desde marzo de 2020)

Suministrador	Prestación por desempleo y subsidios salariales	Modificaciones/bonificaciones en las cotizaciones sociales	Permiso retribuido por Covid-19
	Gobierno	Gobierno	Gobierno
Argelia	✓	✓	✓
Egipto	✓	✓	✓
Jordania	✓	✓	✓
Líbano	✓	✓	
Libia			
Mauritania			
Marruecos	✓	✓	
Palestina	✓	✓	
Siria	✓		
Túnez	✓	✓	

Fuente: elaboración propia con datos de CESPAO, OIT, 2020.

strumento de Financiación Rápida, al que se han acogido todos los países de la región menos Marruecos y Argelia, el paquete "TEAM Europe" lanzado por las instituciones de la Unión Europea, a los distintos programas de las agencias de Naciones Unidas o la asistencia técnica proporcionada por la OCDE a sus socios de la región MENA. Todos estos programas persiguen, entre otros, el refuerzo de las capacidades del Estado para proveer una mayor protección sanitaria, social y económica de sus ciudadanos. No obstante, aunque estos programas sean cruciales para ayudar a capear mejor los efectos de la pandemia, el reto de transformación continúa siendo colosal y solo lo pueden acometer las propias instituciones nacionales de cada país. En este contexto, en el medio y largo plazo pesa la necesidad de afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas para justamente mantener y reforzar estas políticas públicas y, en definitiva, un sistema público de protección sin el cual no es posible garantizar un contrato social.

La necesidad de incrementar de forma sustancial el gasto público va aparejada con mayores necesidades de financiación pública, lo que se puede resolver, en la teoría, con mayor recaudación impositiva, creación de dinero o emisión de deuda pública. Con los años, se ha asumido que la fi-

nanciación del déficit público recae principalmente en la emisión de deuda pública con las consecuencias que ello conlleva para las generaciones futuras que deberán devolver estas sumas a los acreedores y en términos de pérdida de soberanía para las generaciones presentes y futuras. Es imprescindible impulsar una reorientación eficaz del gasto público hacia los sectores de la educación, la sanidad y las políticas de protección y asistencia social, así como hacia la búsqueda de mayor sostenibilidad en las finanzas públicas mediante una reforma de los sistemas impositivos. Resulta una contradicción que se haya silenciado del debate público la necesidad de aumentar la presión fiscal, así como la necesidad de que este incremento sea principalmente sustentado por aquellos grupos poblacionales que más riqueza acumulan, lo que se conoce como progresividad de los tributos.

En los países del Sur del Mediterráneo este debate no se ha abordado con la necesaria entereza, aunque exista todavía un largo camino que recorrer. La crisis que los países de la región están padeciendo como consecuencia de los efectos de la pandemia obliga a impulsar políticas transformadoras que permitan avanzar en un crecimiento económico inclusivo y que reviertan en favor de un desarrollo humano sostenible. ■

Transición hacia una energía limpia en el Norte de África

Agencia Internacional de la Energía

La crisis actual plantea a los países norteafricanos la necesidad de reevaluar sus estrategias energéticas y acelerar la transición hacia una energía limpia

Para proteger la salud pública tanto de la pandemia como de las consecuencias del calentamiento global, es fundamental contar con un sistema energético fiable

La agenda para la eficiencia energética pone de manifiesto el potencial de creación de empleo en la región, especialmente en industria, construcción y transporte

En todo el mundo, apremia la necesidad de transformar el sistema energético y los países del Norte de África (a los efectos de este artículo, Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez) se esfuerzan cada vez más para transitar hacia un sistema energético limpio. Esta transición les ofrece la oportunidad de transformar sus infraestructuras con el fin de satisfacer la creciente demanda energética regional, crear los tan necesitados puestos de trabajo y promover un desarrollo socioeconómico equitativo, diversificando la economía y preparándose para el cambio climático, todo ello en pos de un crecimiento económico con escasa huella de carbono, sostenible e integrador. Las vías de descarbonización son asimismo fundamentales para que los países del Norte de África cumplan con sus ambiciones en cuanto a desarrollo económico y a objetivos climáticos a largo plazo. Estos, enmarcados en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de cada país y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 de las Naciones Unidas, y fijados en la propuesta de futuro de la Agenda 2063 de la Unión Africana, exigen la transformación tanto del suministro como del consumo energético en toda la región.

Tanto el crecimiento previsto de la demanda de energía como la abundancia,

infraexplota aún, de recursos energéticos con bajas emisiones de carbono, así como las muchas posibilidades en el ámbito de la eficiencia energética, traen consigo un importante potencial para los futuros sistemas energéticos de la región. El continuado desarrollo de tecnologías relacionadas con la energía renovable más allá del sector eléctrico –calefacción doméstica y transporte, entre otros–, así como la puesta en marcha de políticas de eficiencia energética sectoriales y subsectoriales, son avances claros que, sin duda, se revelarán fructíferos. Se plantea asimismo la oportunidad de que el importante sector petrogasístico norteafricano se adapte y contribuya a acelerar la transición a energías limpias en toda la región. La aplicación de un enfoque multisectorial en la futura planificación del sector energético mejorará la eficiencia, productividad y seguridad de los recursos, lo que ampliaría la escala y multiplicaría el tipo de tecnologías energéticas desplegadas. A su vez, será necesario un importante aumento de la inversión en infraestructuras y tecnologías energéticas. Por otro lado, el Norte de África ha sido identificada como una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático. A fin de garantizar la seguridad energética, es necesario que las infraestructuras energéticas estén adaptadas al clima e integradas regionalmente.

Los responsables políticos pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de soluciones energéticas con bajas emisiones de carbono y tecnologías energéticas limpias, sostenibles, asequibles, fiables y resilientes, que sostengan las ambiciones económicas y de desarrollo a largo plazo de estos países. La crisis de la Covid-19 ha subrayado la importancia de contar con un sector energético fuerte, sólido y sostenible.

Panorama regional

Los cinco países norteafricanos atraviesan circunstancias muy diferentes, lo que influye en sus trayectorias de transición energética. En la región existen grandes productores y exportadores de hidrocarburos (Argelia, Egipto y Libia), y también países que dependen en gran medida de las importaciones para satisfacer la demanda energética nacional (Egipto, Marruecos y Túnez).

Los contextos socioeconómicos y políticos varían también significativamente. Mientras que la renta per cápita en Libia supera en más de un 55% a la media regional, el prolongado periodo de agitación y conflictos políticos que atraviesa el país ha traído consigo la ralentización en la prestación

Este artículo es un extracto del informe “Clean Energy Transitions in North Africa” publicado por la Agencia Internacional de la Energía en septiembre de 2020.
<https://www.iea.org/reports/clean-energy-transitions-in-north-africa>.

de servicios. Libia, en efecto, es el único país de la región que no tiene acceso universal a la electricidad.

A pesar de estos contextos diversos, los cinco países comparten retos similares en lo que respecta al cambio climático. El estrés hídrico es un problema agudo y creciente. Debido al rápido crecimiento de la población y al agotamiento de los acuíferos, la disponibilidad de agua per cápita en Marruecos ha disminuido casi un 80% desde 1960. El aumento del nivel del mar es también una preocupación compartida. En el delta del Nilo, en Egipto, hasta el 15% de las tierras cultivables más fértiles se ven ya condicionadas por la intrusión de agua salada procedente del mar. La desertificación es otro de los problemas que se agravan: en Túnez, se estima que el 95% de la tierra cultivable está afectada en mayor o menor medida por la desertización. Dado que el sector agrícola es uno de los que más empleo genera en Egipto, Marruecos y Túnez, la degradación podría en el futuro poner en jaque la seguridad alimentaria y de sustento en toda la región.

La transición hacia sistemas energéticos más sostenibles se ha convertido en una prioridad cada vez más urgente para varios países del Norte de África. Quizá el más destacado sea Marruecos, que dio ejemplo al consagrarse el desarrollo sostenible como un derecho para todo sus ciudadanos en la Constitución de 2011. El potencial de progreso en el marco del desarrollo sostenible es considerable en toda la región. Tres países –Argelia, Marruecos y Túnez– han destacado el papel del sector energético en el cumplimiento de las CDN y han aplicado medidas para reducir la presencia del carbono en sus economías.

Los cinco países norteafricanos se han fijado objetivos relativos a las energías renovables. Sin embargo, los avances han sido desiguales y en Libia, donde la situación de seguridad es precaria, los progresos se han visto afectados negativamente.

Además de los beneficios medioambientales y la reducción de la contaminación local que se derivan de esta transición, los países del Norte de África que cuentan con un tejido in-

dustrial consolidado, como Egipto y Marruecos, podrían impulsar un incipiente sector nacional de energías renovables para afianzar el desarrollo económico. Egipto cuenta con varias de las industrias necesarias en la cadena de valor del sector de la energía fotovoltaica –siderurgia, manufactura de vidrio y plantas de fabricación de bombas. Dadas las ambiciones regionales para ampliar la energía renovable, existe un gran potencial para que estos países tomen la iniciativa y se conviertan en productores regionales de los materiales necesarios.

En el mix energético regional prevalece el petróleo, que representa entre el 45% y el 85% del consumo final en todo el Norte de África. Este no es solo para satisfacer las crecientes necesidades de transporte: en Marruecos, por ejemplo, una quinta parte del consumo corresponde al sector residencial, donde se utiliza gas licuado de petróleo para cocinar. Aunque la región ha dado grandes pasos para garantizar el acceso a energías más limpias y modernas, la biomasa tradicional sigue desempeñando un papel importante en la cocina en países como Argelia y Marruecos (donde el 1,5% de la población usa biomasa como principal combustible para cocinar). Es necesario adoptar una perspectiva de género, pues la tarea de la recogida de leña y la preparación de alimentos recae principalmente en las mujeres y las niñas, que sufren de forma desproporcionada la mayoría de perjuicios para la salud asociados a la cocina con biomasa tradicional.

La electricidad desempeña un papel relativamente marginal en los cinco países, salvo en Egipto (donde representa una quinta parte del consumo final). Si la comparamos con el promedio mundial, del 18,9%, esa cifra representa una gran oportunidad para los países que quieren transitar hacia un futuro energético más seguro y sostenible. Los beneficios son especialmente importantes para los países que no disponen de combustibles fósiles, en particular Marruecos y Túnez, donde el petróleo subvencionado podría reemplazarse por sustitutos diversos.

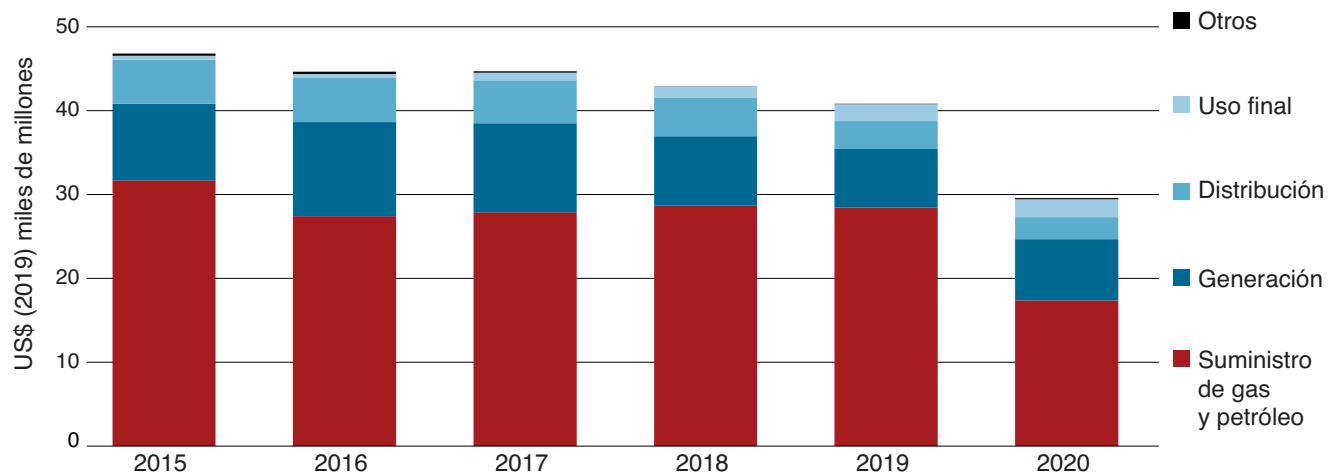
Las oportunidades de mejora no se limitan a ampliar los sectores que con-

sumen electricidad y a reemplazar los combustibles más contaminantes; residen también en las nuevas formas de producción. El mix energético de los países del Norte de África se ve lastrado por su dependencia de los combustibles fósiles. Las energías renovables suponen un 4,6%, un peso muy por debajo del promedio mundial, del 25%. Tal porcentaje no se corresponde con los recursos disponibles, pues el Norte de África es uno de los espacios geográficos que más radiación solar recibe del mundo, además de un importante potencial eólico en el litoral (*Global Solar and Wind Atlas*, 2020). El Norte de África posee un enorme potencial para el despliegue de infraestructuras de energías renovables, lo que reduciría la dependencia de los combustibles importados en Marruecos y Túnez, y haría posible la exportación de recursos excedentes en Argelia. Los cinco países se han propuesto alcanzar distintos umbrales a largo plazo: para 2030, Argelia tiene como objetivo aumentar la capacidad de electricidad renovable a 22 GW; Marruecos, a 10 GW; Libia, a 4,6 GW; y Túnez, a 2,8 GW. Por su parte, Egipto se propone alcanzar los 54 GW para 2035.

Covid-19: contexto

La pandemia de la Covid-19 ha provocado una crisis económica sin precedentes, con un importante corolario para los sistemas energéticos de todo el mundo. Aunque se trata, ante todo, de una crisis sanitaria, las medidas de confinamiento han tenido importantes consecuencias para la economía mundial y el sector energético. Se ha puesto de manifiesto que la electricidad es indispensable tanto para responder a la pandemia como para el funcionamiento diario de las economías y sociedades modernas, dependientes de la energía. El análisis de la Agencia Internacional de la Energía, en el *Global Energy Review 2020*, constata un descenso histórico tanto en la demanda energética mundial como en las emisiones de carbono. El impacto de la pandemia y los confinamientos

Inversiones en el sector de la energía en el Norte de África, 2015-2020



Fuente: AIE (2020a) World Energy Investment 2020. Gráfico: Adriana Exeni.

sobre la economía van a marcar, sin duda, las políticas energéticas mundiales del futuro. Es esencial disponer de una energía fiable, asequible y segura para dar una respuesta eficaz a la crisis sanitaria, así como para garantizar la seguridad energética e impulsar la actividad y el crecimiento económico del futuro. En este sentido, la transición a energías limpias ocupa un lugar central en la planificación de la recuperación económica de todos los países, con independencia de en qué región se encuadren.

En el momento de redactar estas líneas, los cinco países del Norte de África han aplicado confinamientos y restricciones a la movilidad que afectan a sus economías. El sector servicios, el turismo y la industria, los que más aportan a la economía regional, se han visto gravemente afectados por las restricciones. El Banco Africano de Desarrollo calcula que el crecimiento económico regional sufrió en 2020 un descenso de entre el -0,8% y el -2,3%. El sector energético se ha visto afectado por la caída de la demanda, pues la población se recluyó y los restaurantes, centros comerciales y –en algunos países– las manufacturas cerraron para evitar la propagación del virus. Países como Egipto y Marruecos atestiguaron una caída en el consumo eléctrico –en Egipto descendió un 12% y en Marruecos, un 14%– desplazán-

dose la demanda principalmente hacia el uso residencial. En general, los sistemas energéticos de la región han resistido estos embates, pero se han enfrentado a la presión operativa impuesta por la capacidad de generación de excedentes energéticos. Por otra parte, la crisis económica hizo que algunos abonados se encontraran con problemas para abonar las facturas, lo que, a su vez, redujo los ingresos de los servicios públicos. Algunos gobiernos han proporcionado energía gratuitamente, lo que incrementa la presión sobre los presupuestos estatales y sobre la salud financiera de los servicios públicos. En el momento de redactar este artículo, en Marruecos, por ejemplo, había 11 millones de facturas de electricidad pendientes de pago. Además, la crisis ha provocado retrasos en los proyectos e inversiones energéticos previstos, debido a la caída de la demanda y la interrupción de la cadena de suministro.

El confinamiento impuesto en todo el mundo ha afectado también gravemente a la demanda de petróleo. El transporte y las actividades industriales se paralizaron debido al confinamiento de nada menos que 4.500 millones de personas en todo el mundo. Esta caída de la demanda, que alcanzó un pico máximo de más de 20 millones de barriles diarios en abril de 2020, hizo que el precio del petróleo

perdiera hasta un 70% de su valor con respecto a principios de ese año. El colapso histórico de la demanda y precios ha afectado fuertemente a los ingresos del gas y petróleo en las economías productoras, como Argelia y Libia, que dependen de las exportaciones de hidrocarburos para mantener las reservas de divisas, pagar salarios públicos y proporcionar servicios esenciales a sus ciudadanos, especialmente sanidad, educación y saneamiento. Los ingresos netos derivados del petróleo y el gas en Argelia y Libia se redujeron entre un 75% y un 90%, lo que ha puesto a prueba su capacidad para contrarrestar los daños económicos provocados por la pandemia.

Los estudios de la AIE advierten de una disminución de las inversiones energéticas en el Norte de África en 2020, tanto en el sector del petróleo y el gas como en el de la electricidad, tendrá preocupantes consecuencias para la seguridad energética y la transición a una energía limpia. Estos países se enfrentan ahora a unas condiciones de financiación más estrictas para acceder al crédito, dado el restringido margen presupuestario, con una revaluación del riesgo en la economía mundial y, en particular, en el sector energético. Además, la caída en los ingresos afecta aún más a la capacidad de las empresas de servicios públicos para ampliar la ca-

pacidad de generación energética del futuro, lo que va en contra de la necesidad de invertir en sistemas energéticos más limpios, así como en redes resilientes de transporte de energía que satisfagan la creciente demanda energética.

La crisis también afecta a otros sectores, así como a la resiliencia ante el cambio climático. Una de las repercusiones de las medidas de confinamiento son los problemas en la cadena de suministro, como el descenso de la producción agrícola, o los retrasos en el transporte de productos agrícolas a los centros de demanda. Las limitaciones fiscales y la precariedad presupuestaria condicionan, a su vez, la capacidad de inversión en proyectos relacionados con el nexo entre agua, energía y alimentación, o limitan tanto la implantación de nuevas tecnologías como la optimización de las instalaciones. Al ser una región especialmente vulnerable al cambio climático, es probable que las tensiones que produce por este se multipliquen e intensifiquen. El adverso impacto del cambio climático en la salud pública –inducido por fenómenos meteorológicos extremos y condiciones de vida más duras– podría tensionar aún más los sistemas de salud en los países norteafricanos, que se encuentran ya en una situación límite debido a la Covid-19. Para proteger la salud pública tanto de la pandemia como de las consecuencias del calentamiento global, es fundamental contar con un sistema energético fiable, diseñado para resistir los embates del cambio climático.

La actual crisis ofrece a la región la oportunidad de reevaluar las estrategias energéticas y acelerar la transición hacia la energía limpia. Podrán aprovechar el impulso de la crisis para construir un sector energético sólido, seguro y limpio, que contribuya a una recuperación económica transformadora en el escenario pos-Covid-19. Agilizando estas transiciones, la región sacará partido de todo el potencial de su sector energético y logrará embarcarse en una recuperación económica sostenible con bajas emisiones de carbono, que permitirá crear puestos de trabajo

y promueve el crecimiento inclusivo y el desarrollo socioeconómico a largo plazo.

Es necesario, a nivel nacional, reorientar los paquetes de estímulo económico para que la transición hacia una energía limpia forme parte primordial de los planes de recuperación. La región posee un vasto potencial explotado en todo lo referido a energías renovables y eficiencia energética, lo que representa un punto de apoyo importante para asegurar que la recuperación pos-Covid-19 incluya los beneficios socioeconómicos sostenibles derivados de la transición a energías limpias. Para ello, es necesario agilizar el desarrollo del sector de las energías renovables con baja emisión de carbono y de la eficiencia energética, fuentes de crecimiento económico y de creación de empleo para una recuperación económica sostenible. Durante la crisis han sufrido todos los combustibles y tecnologías, pero las energías renovables han sido las más resilientes. La agenda para la eficiencia energética, por su parte, pone de manifiesto el enorme potencial de creación de empleo en toda la región, especialmente en la industria, la construcción y el transporte. Estos sectores pueden crear puestos de trabajo, apuntalar el desarrollo económico, incrementar la competitividad y la solidez de la industria local y ofrecer una energía más asequible, liberando recursos para otros sectores económicos, como la sanidad, la educación, la vivienda o el transporte. Las estimaciones que la AIE ofrece en el *World Energy Outlook 2020. Sustainable Recovery* cifran el potencial de creación de empleo en todo el mundo entre siete y 16 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos en electrodomésticos eficientes, y entre nueve y 30 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos en optimizar la eficiencia energética de los edificios.

La crisis de la Covid-19 pone de relieve la importancia estratégica de iniciativas de reforma más amplias encaminadas a diversificar las economías dependientes de los hidrocarburos. Los riesgos asociados a la no diversificación de la economía son conoci-

dos desde hace tiempo, y el desplome del precio del petróleo durante 2014 y 2015 fue una llamada de atención a muchos países productores. Sin embargo, los productores del Norte de África siguen dependiendo hoy de ingresos procedentes de los hidrocarburos, como desde hace décadas, y las finanzas públicas se encuentran, en general, en peor estado que hace cinco años, lo cual mengua la capacidad para absorber el impacto e invertir en nuevas infraestructuras bajas en carbono. La transformación económica y la diversificación del crecimiento son vitales, no solo para hacer frente a las cambiantes dinámicas del sector energético mundial, sino para generar oportunidades, en un momento en que muchos jóvenes acceden al mercado laboral en países cuya población no deja de crecer. El proceso de reforma será complejo y planteará muchas dificultades, pero un sector petrogásístico que funcione adecuadamente puede ser un activo a largo plazo para los países productores que proporcione parte de los fondos, el conocimiento y experiencia necesarios para emprender un crecimiento más diversificado y sostenible.

Pese a la caída de las inversiones en 2020, es clave mantenerlas en el sector energético, a fin de garantizar sistemas energéticos sólidos en el futuro. Los países norteafricanos deben priorizar las inversiones en capacidad de generación eléctrica, redes y transporte de electricidad, a fin de consolidar sistemas energéticos que respalden el crecimiento económico futuro. Para ello, es fundamental dedicar más fondos a la producción eléctrica con bajas emisiones de carbono y reforzar las infraestructura de transporte y distribución de energía. Esto, a su vez, requerirá un fortalecimiento continuado de los marcos políticos y normativos de estos países. Más que nunca, las políticas deberán enviar señales claras que atraigan el capital privado necesario para salvar la brecha de inversión en energías limpias. Asimismo, será clave la colaboración regional para emprender una transición energética que impulse la recuperación. ■

La región MENA pos-Covid: de la transformación digital a la transformación a través de lo digital

Mondher Khanfir

La conectividad universal es un elemento clave tanto de la recuperación tras la Covid-19, como de la realización de proyectos de desarrollo más globales

Paradójicamente, en la región MENA-M, las medidas de distanciamiento social impuestas con urgencia han aumentado la brecha digital

La región debería reflexionar sobre el ritmo de su integración tecnológica y económica diseñando estrategias mediante la colaboración público-privada

La transformación digital, presentada como un proyecto estratégico por todos los gobiernos, resulta muy compleja en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África). Salvo Israel y algunos países del Golfo como Catar y Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran entre los más innovadores en la clasificación de 2020 del *Digital Inclusion Index* (Roland Berger, 2021) el resto de los países se hunde en una brecha digital agravada por la pandemia del coronavirus. Este artículo abordará la situación de los países árabes situados en la cuenca mediterránea, llamados MENA-M, e interpelados por la política de vecindad de la Unión Europea. Esta última muestra una renovada voluntad de mantener una buena vecindad que nace en el Proceso de Barcelona, que se enmarca dentro de una nueva dinámica posterior a la Covid-19. El futuro de la integración euromediterránea depende del éxito de la política económica, tecnológica, cultural y climática en la región.

La conectividad universal es un elemento clave tanto de la recuperación tras la Covid-19, como de la realización de proyectos de desarrollo más globales, como los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía falta mucho para lograrla, ya que, en el mundo actual, solo un ser humano de cada dos tiene acceso a Internet. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el índice de penetración global de internautas en el mundo es del 53,6%. En los países desarrollados, esa cifra aumenta

hasta el 87%, pero desciende hasta solo el 47% en los países en desarrollo.

Las grandes disparidades en lo que se refiere a la penetración de Internet –entre países más ricos y más pobres, y entre las distintas regiones de un país dado– constituyen un obstáculo importante para mitigar los problemas de la Covid-19, según el Oxford Business Group. En uno de sus últimos informes, señala la falta de preparación de algunos países para desplegar nuevos servicios en línea, lo que perjudica el mantenimiento de los servicios públicos, la continuidad de los negocios y el acceso a la atención sanitaria, la educación y la movilidad en particular.

En resumen, cuando las infraestructuras tecnológicas son inadecuadas, no solo se limita la capacidad para aprovechar plenamente las nuevas oportunidades de la economía digital, sino que también se ve afectado el rendimiento de la economía convencional. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han vuelto fundamentales para el funcionamiento de una economía, junto a las redes de suministro de agua, electricidad y alimentos. Además, paralelamente a las vacunas, la conectividad generalizada es un elemento esencial del sistema sanitario.

Una de las características comunes en la región es que la transformación digital siempre se ha considerado una brecha que hay que cerrar, en vez de un instrumento estratégico para la innovación y el posicionamiento en la época cognitiva. Existe un retraso importanteen

cuanto a infraestructuras y equipos, pero eso solo explica en parte que los usos sean limitados y que el ecosistema de la innovación esté controlado por el sector público dominante, lo que impide que el sector privado invierta libremente en la economía digital.

En la región MENA-M, las medidas de distanciamiento social impuestas con urgencia para enfrentarse a la pandemia (confinamiento, limitación de los desplazamientos, toque de queda) han tenido muchas consecuencias negativas, y, paradójicamente, han aumentado la brecha digital.

Esto se observa primero en el sector público debido a que las infraestructuras digitales en la Administración no están diseñadas para el teletrabajo y no están preparadas para garantizar la continuidad de los servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas a través de las ventanillas virtuales. Esto, por una parte, ha reducido considerablemente la productividad de la función pública y, por otra, ha disminuido el rendimiento económico. Esta dura observación afecta a todos los países MENA, incluso a los que aparecen en la parte alta de la clasificación del Índice de Agilidad Digital (Euler Hermes, 2021) que mide la capacidad de los países para proporcionar a las empresas un entorno propicio para la transformación digital.

La saturación de las redes, debido a una conexión más intensiva a Internet, a los videos en línea y las videoconferencias, ha puesto de manifiesto el límite de las infraestructuras tecnológicas

de la región, como señala el Banco Mundial en *Assurer la transformation numérique en pleine pandémie : le cas de la région MENA* (Boutheina Guermazi, 2020). El déficit en la capacidad de conexión a la red internacional y la falta de puntos de conexión a la red troncal ha limitado el ancho de banda de la zona MENA durante la crisis sanitaria.

Así, durante la crisis se han puesto de manifiesto las deficiencias en el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación y el transporte, con un efecto directo en la vida de los ciudadanos y de las empresas, muchas de las cuales han tenido que despedir a parte de su personal. Solo en Túnez, se calcula que más de un millón de personas, cerca del 10% de la población, han caído por debajo del umbral de pobreza a causa de la pandemia.

En casi todas partes, los sistemas sanitarios y los hospitales alcanzaron su límite ya en la primera ola, que les cogió desprevenidos tanto en lo que se refiere a equipamientos (reanimación, respiradores, oxígeno), como a personal sanitario, aunque las iniciativas ciudadanas permitieran mitigar esas deficiencias gracias a las donaciones y a la movilización benéfica de recursos externos. Por desgracia, los poderes públicos no mantuvieron el dinamismo de la sociedad civil durante la pandemia, y la desconfianza entre el sector público y el privado volvió a prevalecer rápidamente en cuanto terminó la primera ola.

El excepcional impulso innovador que se produjo en cada país para dirigir los esfuerzos de la comunidad de los emprendedores tecnológicos y organizar una respuesta mediante la tecnología no ha traspasado las fronteras. Ni siquiera las startups que han conseguido ofrecer soluciones de detección y rastreo de las personas afectadas han podido exportarlas fuera de sus países de origen. Y, lo que es peor, algunos proyectos de gran valor tecnológico como la startup egipcia DilenyTech, especializada en las terapias digitales para la detección del cáncer asistida por la inteligencia artificial, se han quedado en su perímetro inicial y corren el riesgo de que el entorno local impida su desarrollo. Tampoco parece que la ventaja de la porosidad de las fronteras en la

economía digital favorezca a las startups más prometedoras.

La pregunta implícita que se plantea está relacionada con la gestión y el almacenamiento de los datos personales y la interconexión con los sistemas de información nacionales. La asimetría entre el marco regulatorio y el institucional también frena la difusión de las aplicaciones fuera de las fronteras nacionales. A título de ejemplo, Marruecos convocó una licitación pública internacional para adquirir una solución de rastreo de contagios y de diagnóstico en línea. La licitación se concedió a una empresa local que desarrolló y puso en funcionamiento a finales de abril de 2020 una aplicación 100% marroquí. Unos días después, Túnez hizo lo mismo gracias a la generosidad de una startup local que regaló al Ministerio de Sanidad una aplicación lista para su uso. Ninguna de esas dos aplicaciones ha podido funcionar fuera de su territorio nacional, lo que subraya la dificultad para adoptar proyectos de digitalización.

La continuidad de la educación a distancia durante la Covid-19 es un buen ejemplo de estas dificultades. En la región MENA-M, los colegios y las universidades privadas pasaron muy rápido a impartir enseñanza a distancia y a realizar exámenes en modo virtual, pero los centros públicos no. Las razones se basan en los siguientes factores:

- la brecha digital que sitúa a una parte de los alumnos y estudiantes en el sector público en una situación de desventaja con respecto a algunos de sus compañeros;

- los proveedores de plataformas de enseñanza electrónica están muy solicitados y, por lo general, no les gustan los largos procedimientos de licitación del sector público. Además, sus contratos de licencia están generalmente estandarizados y domiciliados en su país de origen; y

- no todos los docentes ven con buenos ojos los esfuerzos para digitalizar las clases. Además del tiempo que se necesita para readaptar los soportes de las clases, hay que adquirir nuevas competencias para usar el canal digital, algo que las autoridades responsables ni garantizan, ni tienen en cuenta.

En Jordania, por ejemplo, según una publicación del Banco Mundial (*COVID-19 and digital learning preparedness in Jordan*, M. Audah, M. Copek, A. Patil, mayo 2020), más del 16% de los alumnos no tiene acceso a Internet, es decir, 16 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, mientras que una tercera parte no tiene un ordenador para hacer el trabajo escolar, es decir, 25 puntos porcentuales por debajo de la referencia de la OCDE. Esta brecha digital existe principalmente en los hogares con ingresos bajos: menos del 30% de los alumnos de los grupos de una condición económica muy baja disponen de un ordenador para el trabajo escolar, y solo aproximadamente el 50% puede tener acceso a Internet.

Egipto, después de un intento de desarrollar internamente su propia plataforma de enseñanza a distancia, terminó decantándose por una solución proporcionada por Microsoft International y Blue Cloud for Software Development que el ministro de Educación Superior e Investigación Científica egipcio anunció en septiembre de 2020. Esta plataforma electrónica, todavía en fase experimental, permitirá enseñar a distancia en todas las universidades del país y realizar los exámenes presenciales y en línea.

En cuanto a la movilidad, la pandemia ha mostrado el mal estado de los sistemas de transporte público. El sector del transporte de personas, lastrado por la informalidad, ha sufrido de lleno las restricciones de circulación y las medidas de distanciamiento social.

El transporte de mercancías ha sufrido, a su vez, grandes perturbaciones que han afectado a los circuitos económicos por medidas como el toque de queda y la limitación de los desplazamientos, lo que ha reducido aún más la eficiencia de las cadenas logísticas. Como denuncia el presidente de la comisión de la competitividad logística y energética de la CGEM en Marruecos, “se han extraído varias lecciones de esta crisis: hay que pasar a lo digital y hay que hacerlo rápido; hay que reflexionar sobre cómo puede diversificarse el transporte, y formar a los conductores para diversificarse e ir a diferentes sistemas de transporte”. Lo que resulta sor-

prendente es el hecho de esperar a la crisis para darse cuenta de la importancia de declarar a los empleados, cumplir las normas de seguridad e introducir la trazabilidad en el conjunto de la cadena de transporte y logística.

Por otra parte, la implantación de los pagos en línea se ha convertido en una necesidad absoluta en una región dominada por el metálico. Aunque no se dan todas las condiciones para una sociedad sin efectivo en la región, también es cierto que los compradores en línea prefieren usar ahora los pagos digitales, según un estudio del proveedor de sistemas de pago con sede en Londres, Checkout.com. De acuerdo con este estudio, el 40% de los compradores en línea en Oriente Medio declaran que compran y pagan así debido a la pandemia. La aceleración de las transacciones de comercio electrónico y de pago digital ha condensado en unos meses el equivalente a cinco años de crecimiento.

La transformación digital es sobre todo una transformación cultural

En plena pandemia de Covid-19, la conectividad desempeña ahora un papel clave para los particulares, los poderes públicos y los operadores que quieren utilizar datos, contenidos y aplicaciones digitales para garantizar la continuidad de la actividad económica y social. Por tanto, los gobiernos deben asegurarse de que se dan las condiciones propicias para la interconexión de las infraestructuras, los sistemas de información y, más en general, los ecosistemas de la economía digital, lo que permitirá ampliar la capacidad de las redes y la cobertura de los servicios de Internet.

La construcción de un proyecto de transformación digital global y transversal sigue siendo un ejercicio difícil, sobre todo si no se identifican bien las necesidades o se desvinculan de las contingencias locales. Cuando los departamentos técnicos que se encargan de las telecomunicaciones diseñan los proyectos de infraestructuras, se ven li-

mitados por su propia organización compartimentada y por unos procedimientos de contratación inadecuados para la innovación. Y eso no ayuda a estructurar proyectos transversales, ni a crear una gobernanza global eficaz.

Es lo que se observa en Túnez, que ya inició en 2013 un ambicioso programa llamado *Tunisia 2016* con un presupuesto de 5.000 millones de dinares, retomado a su vez en 2016 para incluir un elemento relacionado con la salud electrónica y en 2019 para ampliar tanto el perímetro como el horizonte de despliegue. Con la crisis de la Covid-19, Túnez ha retocado una vez más su plan estratégico digital, y ahora tiene dificultades para pasar a la fase de ejecución con el presupuesto inicial, que ya no es adecuado para el contexto actual.

El retraso en la transformación digital puesto de manifiesto por la Covid-19 invita a los países de la región a reflexionar sobre el ritmo al que avanza su integración tecnológica y económica. Eso hace que tengan que diseñarse estrategias con una colaboración público-privada que acelere los avances en todos los ámbitos y niveles. El progreso consiste precisamente en permitir que las distintas categorías sociales puedan acceder, a distancia, a un menor coste y con total seguridad, a los diferentes servicios públicos, y puedan aprender, trabajar, comprar, pagar y recibir pagos a distancia.

El arraigo territorial que promueve la política de vecindad de la UE hacia sus vecinos del Sur da ejemplo al institucionalizar la facilidad para acceder al espacio digital, una base común de derechos y obligaciones que lleva aparejada unas infraestructuras tecnológicas mutualizadas, que permitirá catalizar las competencias digitales y diversificar los usos.

Dar acceso a Internet a toda la población de la zona euromediterránea para que ejerza plenamente su ciudadanía es un cambio cultural necesario para consolidar las políticas públicas de transformación digital. Lo que se pretende es fomentar una identidad digital para que represente una ciudadanía digital sin fronteras, inclusiva y representativa de la riqueza civilizacional de la gran zona euromediterránea. Dicha identidad pacífica y ética no puede sino facilitar el

aceramiento entre los pueblos y consolidar el compromiso a favor del Estado de derecho, las bases de la igualdad, la democracia y la buena gobernanza, como vector de una estabilidad regional equitativa y próspera, dentro del respeto de la diversidad y la tolerancia.

Conectividad y cognición social

En un contexto de inestabilidad general y de aceleración de los cambios, la capacidad de asimilación de las innovaciones tecnológicas depende de una cognición social que mejora la manera en que se gestiona y se utiliza la información. Además, tiene que garantizar una "conectividad social" para el desarrollo personal en un espacio virtual abierto y libre, pero regulado, favoreciendo la generalización de las mejores aplicaciones digitales para un mayor bienestar de la comunidad de usuarios en sentido amplio. De la zona euromediterránea se espera que cree ese espacio de libertad que falta en el terreno físico, y que permita que haya más posibilidades de innovación digital.

Se supone que la tecnología tiene que permitir la integración territorial y sectorial a escala local e internacional. La economía digital no puede desarrollarse sin una implantación en la economía real para aumentar su rendimiento y llegar al mayor número de personas posible, sin restricciones de género ni limitaciones geográficas. Sin duda, la crisis del coronavirus ha acelerado el auge de lo digital, pero a veces ha reactivado también los reflejos del proteccionismo, y numerosos países se esfuerzan ahora por reestructurar sus cadenas de aprovisionamiento dando prioridad a los circuitos cortos con un abastecimiento local y a las actividades integradas en sus propios territorios, para frenar la propagación del virus, y, sobre todo, para atenuar los efectos secundarios de la pandemia en la economía. Esto no cuestionará el fundamento de los paradigmas de la cooperación multilateral (ALECA, ZLECAF), pero contribuirá a la creación de zonas electrónicas de libre comercio y de ciudadanía digital. ■

-
- 64 Proliferación de crisis
 - 68 La cultura marroquí en tiempos de la Covid-19
 - 72 La resiliencia como un medio de supervivencia
-



Autocine, inaugurado con la película “Los Miserables” de Ladj Ly como parte del Festival Internacional de Cine de Amán. Agosto de 2020./KHALIL MAZRAAWI/AFP VIA GETTY IMAGES

Cultura en tiempos de pandemia

Hace más de un año, la actividad cultural de todo el mundo se paralizó por la pandemia de la Covid-19, con consecuencias para los artistas y las organizaciones culturales, pero también para la vida social de la población, que ha visto agravado su aislamiento.

En el mundo árabe, el virus ha puesto de manifiesto la precariedad del sector cultural, resultado de complejas realidades políticas, sociales, económicas, culturales y humanitarias.

Sin embargo, los artistas y organizaciones culturales, inmersos ya antes en una crisis, han demostrado su espíritu de superación para adaptarse a las actuales

circunstancias, buscando nuevas prácticas y estrategias, trastocando unas tradiciones y concepciones establecidas. La alternativa digital, por ejemplo, ha sido la solución para muchos. Aunque su alcance es limitado, por los filtros impuestos por los gobiernos a las plataformas digitales o porque la velocidad de Internet no permite acceder a ellas.

Como señala Neila Tazi Abdi, productora del Festival Gnaua y Músicas del Mundo, “esta crisis será un punto de inflexión y a largo plazo podría tener un impacto positivo en el sector, pues hemos cobrado conciencia de su fragilidad y de la necesidad de darle solidez”.

Proliferación de crisis

Las organizaciones culturales, inmersas en una crisis, han debido adaptar sus actividades, trastocando unas tradiciones y concepciones establecidas.

Rana Yazaji

A lo largo de 2020, la pandemia obligó a interrumpir toda actividad cultural. A partir de conversaciones con directivos de tres organizaciones, este artículo examina los efectos inmediatos y a largo plazo de la pandemia sobre las organizaciones culturales de la región árabe, en particular los efectos de esta interrupción en las comunidades. Los tres directivos son:

– Basma el Husseiny, directora de Action for Hope, fundada en 2015 para ofrecer programas de desarrollo y asistencia cultural que satisfagan las necesidades sociales, culturales y psicológicas de las comunidades en dificultades o desplazadas. Action for Hope trabaja en Líbano y Jordania, además de en Irak y Sudán, entre otros países árabes.

– Abdullah Alkafri, director ejecutivo de Ettijahat-Independent Culture, fundada en 2011 para activar y mejorar el papel de la cultura y las artes independientes en el proceso de cambio cultural y social.

– Aymen Gharbi, director artístico de Interference, fundada en 2015 en Túnez capital como proyecto de arte contemporáneo. Interference tiene una misión a largo plazo fundamentada en un concepto curatorial y cuyos grandes principios son el enfoque local basado en la comunidad y un código ético sociocultural único.

Una esperada presentación

Reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia en las organizaciones culturales de la región árabe resulta poco esclarecedor si no se tiene en cuenta la enorme complejidad del entorno en el que estas llevan desarrollando su actividad desde hace décadas.

Los sistemas de gobierno, políticamente totalitarios y económicamente corruptos, han conducido, entre otros, al deterioro de la libertad de expresión, de organización y creación, al aumento de las tasas de pobreza y desigualdad, al deterioro de los mecanismos de seguridad social y sanitaria, y a la demonización de la sociedad civil.

En este contexto, las organizaciones culturales de la región árabe desempeñan un papel significativo descrito claramente por Ettijahat-Independent Culture en su declaración anual de finales de 2020: “La ausencia generalizada de redes de protección o de iniciativas sociales para el sector de las artes, junto con la permanente represión de las organizaciones de la sociedad civil en la región árabe, tienen como resultado una especie de desplazamiento profundo del papel de las organizaciones y los colectivos culturales, que se ven obligados a llenar estos vacíos en vez de dedicarse a sus propios objetivos, tal vez más específicos”.

Adaptación flexible y respuestas ágiles

Una de las tensiones existentes en el trabajo institucional es el esfuerzo continuo por conseguir el equilibrio entre unos instrumentos y un pensamiento estratégico claro, por un lado, y la agilidad de responder a los cambios sociales, políticos y culturales del entorno, por otro. La incertidumbre derivada de la pandemia ha sacado esta tensión a la superficie y, en algunos casos, ha puesto en peligro la capacidad de las organizaciones de seguir existiendo.

En el caso de Interference, llegó a producirse un breve debate interno sobre la idea de cerrar la organización debido a la imposibilidad de organizar su festival anual, que constituye la actividad principal y única de la iniciativa tras un año de esfuerzo de comisariado. En cambio, en el caso de Ettijahat-Independent Culture, la adaptación a través de la revisión de los planes anuales se ha llevado a cabo de manera muy rápida y drástica. La organización decidió tomar medidas para todo el año cancelando, adaptando y posponiendo cualquier actividad presencial, ya que consideró que eran imposibles durante 2020. Es más, comenzó inmediatamente a crear nuevos marcos que respondiesen a la emergencia. Art Lives, uno de esos marcos creado como resultado de la colaboración de Action for Hope y Mophradat, es una iniciativa excepcional para proteger a los artistas y a los trabajadores.

Rana Yazaji es investigadora y gestora cultural, vicepresidenta del consejo directivo de Ettijahat - Independent Culture.

dores del sector de la cultura de la región árabe cuyos medios de vida y salud se han visto afectados por el estallido de la Covid-19. Además de Art Lives, la respuesta de Action for Hope a la crisis se ha centrado en la situación económica de las comunidades. "Trabajamos en Líbano con una mayoría aplastante de un 80% de refugiados sirios, mientras que en Jordania, el 60% de nuestros beneficiarios son refugiados sirios e iraquíes, y el 40%, palestinos y jordanos".

"La situación económica de las comunidades con las que trabajamos se ha visto dramáticamente afectada en ambos países. Los estudiantes proceden de familias de bajos ingresos o de clase media-baja. La mayoría depende totalmente de los ingresos diarios de su trabajo en la economía sumergida, en pequeñas tiendas, en talleres de confeción, etcétera. A los cuatro meses del estallido de la pandemia,

muchas de esas familias corrían el riesgo de hambruna, así que cambiamos nuestros programas y nos pusimos en contacto con algunos de nuestros financiadores, además de con miembros de la organización, que contribuyeron a una rápida campaña de donaciones. El dinero recaudado lo utilizamos para un fondo de ayuda familiar. Se entregaron unas 80 pequeñas ayudas de entre 100 y 300 dólares. También seguimos ayudando a muchas familias a encontrar soluciones que les proporcionaran ingresos, de manera que pudiesen evitar la ayuda adicional, aunque podemos seguir prestándola".

Nuevas áreas, nuevos públicos y nuevas estrategias

Es evidente que, durante el último año, las organizaciones culturales han experimentado prácticas y estrategias diferentes de las habituales en las condiciones anteriores a la pandemia.

Por primera vez, Interference ha trabajado con grupos pequeños de artistas y participantes. Su festival solía reunir anualmente a unas 200 personas en torno a las tareas de comisariado, organización y producción, mientras que con el nuevo formato de sus actividades, con el que producen montajes y exposiciones más pequeñas a lo largo del año, la organización está experimentando por primera vez la particularidad de



Fotografía titulada "The Eye of the Crow". /OMAR MALAS 2019

relacionarse con un grupo de artistas más reducido y delimitado.

Además, debido al cierre de las fronteras, su enfoque pasó de ser muy activo internacionalmente a centrarse más en el sector cultural tunecino y a comprometerse más con los artistas del país, cuyo potencial y creatividad son una enorme fuente de inspiración para Interference.

Create Syria, uno de los programas de Ettijah dirigido a dar apoyo a los artistas implicados en la transformación social, ha sido uno de los experimentos decisivos de la organización durante la pandemia.

Las ediciones anteriores del programa se centraron en artistas afincados en Líbano, e incluyeron la formación en las artes para la transformación social y un fondo inicial para proyectos ejemplares. La Home Edition, diseñada para responder a la pandemia, se abrió a artistas de cualquier país, siempre que plantearan la cuestión del cambio social. El paso a la versión digital requirió que se volvieran a diseñar la metodología y el enfoque del programa. Esto permitió a la organización llegar a artistas activos en plena zonas de crisis, algo que nunca habría sucedido en el formato tradicional.

Action for Hope puso en marcha Khoutua Step, un nuevo programa de apoyo para que jóvenes licenciados iniciaran un pequeño proyecto artístico o cultural que les proporcionase ingresos. A través de pequeñas subvenciones de 1.500 dólares, algunos licenciados de las escuelas de música han podido en-

señar desde casa, e incluso adquirir tres o cuatro instrumentos y preparar un lugar adecuado para dar clase. Otro ejemplo es la creación de un pequeño estudio casero de grabación y mezcla que requiere un equipo sencillo, capaz de proveer servicios de distribución musical para publicidad o materiales promocionales para las ONG. Los licenciados en cine han tenido la oportunidad de equiparse con cámaras y ordenadores para producir cortos para asociaciones y proyectos de promoción y desarrollo, que reportan unos ingresos mensuales de entre 200 y 300 dólares. Antes de la pandemia, Action for Hope exploró las posibilidades de apoyar la práctica profesional continua de sus licenciados, pero sus ideas se limitaban al sector cultural. La necesidad de salir adelante en la pandemia fue la razón principal del cambio al modelo de microempresa.

El cambio digital

La “era digital” es un tema esencial entre los expertos, así como en artículos y publicaciones científicas, que ha generado y sigue generando continuos debates acerca de lo que ganamos y lo que perdemos, de cómo superar el aislamiento, y de cómo lidiar con la necesidad de interacción humana directa. ¿Se ha convertido la realidad digital en la nueva norma de interacción y acción? ¿Cómo contribuye a agravar la injusticia y a encerrarnos en pequeñas burbujas controladas?

En los primeros días y semanas de la pandemia, apareció un enorme contenido digital como un acto de solidaridad y una estrategia para evitar la interrupción de la producción y la distribución artística.

Según Abdullah Alkafri, muchos artistas que viven, por ejemplo, en Siria, ven este contenido como una oportunidad perdida, ya que la mayoría de las plataformas digitales de las que se ha servido, o están prohibidas, o la velocidad de Internet no permite acceder a ellas. Mientras que antes a los artistas y al público en territorio sirio les era imposible asistir a las representaciones teatrales nacionales de Gran Bretaña, ahora ese contenido está a disposición de todos, pero no es posible acceder a él.

“En la región árabe, el entorno de trabajo digital queda algo lejos tecnológicamente, cognitiva y financieramente, así como por las medidas de seguridad. Pensemos en los numerosos filtros impuestos por los gobiernos en los países árabes. También debemos ser conscientes de que el mundo, en apariencia muy accesible a través de la comunicación digital, en realidad no lo es. El ejemplo más sencillo es que cualquier anuncio de pago en nuestra cuenta corporativa en Facebook es vetado si utilizamos la palabra ‘social’, porque, según las normas de la plataforma, todo lo que sea social está sometido a numerosos filtros. En la declaración hecha pública por Et-tijahat, decíamos que la crisis confirmaba la fragilidad

de las redes de seguridad y desafiaba nuestras suposiciones y opiniones sobre la comunicación digital. Todos estos mecanismos se derrumbaron inmediatamente, confirmando que la lógica de estar conectados excluye a una parte importante de la humanidad.

Hay personas que han estado en cuarentena forzosa y en aislamiento social, cognitivo y económico durante años, y con esto me refiero concretamente a Siria y a muchos otros países similares”.

También en Túnez, donde numerosas organizaciones y colectivos han trasladado sus actividades al mundo digital, Interference decidió que la transformación digital solo era posible en parte. Las razones son muchas, entre ellas, que sus actividades están estrechamente relacionadas con la arquitectura, los espacios públicos y la vivencia física del público. A una de sus actividades más pequeñas, Synergy, que formaba parte del festival para fomentar la colaboración entre artistas tunecinos y alemanes, se le dio un formato experimental. En un principio, estaba previsto que los artistas tunecinos viajasen a Alemania para trabajar con artistas alemanes y luego estos visitarían Túnez con el mismo objetivo. La alternativa fue que los dos grupos se reunieron al mismo tiempo, cada uno en su país, conectados por un proyector de vídeo que conformaba un espacio compartido de creación.

Para Action for Hope, el verdadero problema de trasladarse al mundo digital se encontraba en el terreno de la enseñanza y la formación. La enseñanza de cine y en las escuelas de música se interrumpió, y si bien es posible dar los apartados teóricos de las asignaturas por vía digital, el nivel de aprendizaje real no supera el 60% del que los estudiantes adquirían en las clases presenciales. El aspecto práctico de la adquisición de capacidades, ya sea filmar y editar o tocar un instrumento, es prácticamente imposible.

Temporalidad y permanencia

La adaptación a las nuevas condiciones mundiales, independientemente de su naturaleza pasajera, ha llevado a organizaciones de todo el mundo a explorar nuevas perspectivas y estrategias. La cuestión sigue siendo si un impulso temporal conducirá a una transformación sostenible. Las conversaciones con las tres organizaciones muestran que, de un modo u otro, estas llevarán a cabo algunos de los experimentos realizados en 2020.

Requiem for Justice, un encuentro telemático internacional de artistas, intelectuales y activistas contra la injusticia, es la versión en Internet de la segunda edición de Landscapes of Hope, organizado por Action for Hope en Berlín en 2016 y cuya siguiente edición estaba programada para otoño de 2020. En su lugar, a finales de agosto, se organizó Requiem for Justice en formato digital. Dado su gran éxito, en 2021 tendrá lugar una segunda edición.

La reflexión sobre la producción y la distribución artística también ocupa un lugar central en el discurso de Action for Hope. Basma el Husseiny cree que se han producido cambios duraderos. “No volveremos a ser los mismos, ya que las organizaciones han invertido en mejorar las aptitudes y la capacidad técnica para utilizar Internet como un espacio para producir y distribuir productos culturales. Ya sea a nivel de equipos o de capacidades, entre otros, es una inversión útil a la larga, y no habrá motivo para renunciar a ella incluso si vuelve cierto grado de normalidad. Todos seguiremos utilizando Zoom como una alternativa a los viajes, las reuniones y los congresos. También seguiremos creando experiencias vitales en las redes sociales, YouTube, Facebook y otras, una práctica muy limitada antes de la pandemia. Estos mecanismos suponen un ahorro económico y nos permiten llegar a públicos a los que nunca habíamos imaginado que llegaríamos”.

Ettijahat se quedará para el futuro con el aprendizaje de nuevas prácticas durante la pandemia, y creará explícitamente iniciativas basadas en mecanismos de solidaridad y cooperación entre diversas organizaciones para hacer frente a una crisis o defender una causa. La iniciativa Art Lives como respuesta rápida para dar apoyo a artistas y productores culturales durante la pandemia está siendo evaluada para valorar los posibles objetivos a más largo plazo de un marco de solidaridad entre diferentes organizaciones y, por tanto, de cambios estructurales más profundos en el plano institucional.

Uno de los principales factores que influyen en los cambios estructurales es la transformación de las políticas de financiación, analizada por Basma el Husseiny. “La economía sumergida, que constituye el grueso de la economía en la mayoría de los países árabes, no tiene prioridad en los planes gubernamentales. De hecho, la cultura tampoco tiene importancia en esos planes, así que preveemos que las dificultades aumenten en el futuro. Entre las instituciones donantes, la financiación extranjera se verá afectada de dos maneras: el presupuesto de las instituciones cuyos fondos proceden total o parcialmente de ingresos comerciales se ha visto drásticamente afectado, y la financiación de las instituciones privadas estadounidenses que dependen de la Bolsa va a disminuir. Al mismo tiempo, la dependencia de esta clase de financiación aumentará a medida que la filantropía y las donaciones individuales, que, por otra parte, son insignificantes, desciendan o desaparezcan.

Por otro lado, las actividades que generan ingresos propios, como la venta de entradas o de productos culturales, sufrirán un descenso radical.

En pocas palabras, la dependencia de la financiación internacional va a aumentar en un momento en el que se percibe una gran ambigüedad en la política de subvenciones en todo el mundo. No debemos olvi-

dar que la pandemia ha causado graves daños en Europa y Occidente. Por eso preveemos que, a lo largo del año próximo, gran parte de los fondos destinados a ayudas sociales se destinen también a las sociedades occidentales”.

El derecho al acceso a las actividades culturales

Ni que decir tiene que el derecho al acceso a la cultura se ha visto comprometido en todo el mundo. La interrupción de la interacción artística y cultural con las sociedades no ha terminado aún, y es uno de los efectos del confinamiento más difíciles de medir, especialmente en la región árabe, ya que no se prevé que se realicen estudios sobre el terreno.

Abdullah Akafri señala que, en su opinión, el impacto de la interrupción de las actividades artísticas debido al cierre de teatros, cines y espacios de arte es más significativo en los países árabes que en Europa. “Esta discontinuidad ha tenido como consecuencia un aumento de las carencias y la marginación. Representa la pérdida de los derechos mínimos de esas sociedades a disfrutar de las actividades artísticas, de la capacidad de imaginar una realidad diferente y apreciar la belleza, y de la posibilidad de reír, desahogarse y entretenerse. En la región árabe, el aislamiento se ha hecho insoportable”.

Conclusión

Se suele considerar que las organizaciones del mundo árabe están inspiradas por los conceptos y las prácticas europeas, en especial en su manera de entender la gobernanza, la sostenibilidad y la gestión. En las dos últimas décadas, las organizaciones han diversificado sus estructuras de trabajo y sus visiones institucionales, sobre todo a partir del estallido de las revoluciones en la región. Se ha producido un cambio hacia un movimiento cultural y artístico institucionalizado paralelo al movimiento creativo revolucionario, si bien este cambio también es consecuencia de las complejas realidades políticas, sociales, económicas, culturales y humanitarias.

Imaginar un cambio organizativo pospandémico es muy difícil, ya que se trata de un proceso amplio, dinámico y no lineal que abre numerosos ámbitos de reflexión. Las tradiciones y las concepciones establecidas de unas estructuras no gubernamentales sin ánimo de lucro se han visto sacudidas, pero todavía no se dispone de un espacio de análisis centrado. El siguiente paso es fomentar la investigación local, la solidaridad regional y la cooperación internacional para aprovechar el caudal de lo que ha presenciado el sector cultural y la manera en que ha evolucionado en medio de un año trascendental. ■

La cultura marroquí en tiempos de la Covid-19

“Marruecos ganaría mucho si promocionara mejor su patrimonio para convertirlo en cadena de transmisión de la política cultural, turística y educativa. Esto permitiría ofrecer a la juventud más medios de emancipación.”

ENTREVISTA con Neila Tazi Abdi por Batoul Benyamina Abdessadok

Neila Tazi Abdi es una mujer emblemática del Marruecos de hoy. Representa a la Confederación General de Empresas Marroquíes (CGEM) ante el Parlamento y es la primera mujer en ostentar la vicepresidencia de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos. Además de su participación en la vida política marroquí, es pionera en la internacionalización de la música gnaua, incluida en 2019 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Es fundadora y productora del Festival Gnaua y Músicas del Mundo de Esauira, uno de los festivales más queridos por los amantes de la música étnica, en general, y gnaua, en particular. Asimismo, Tazi Abdi sigue luchando por promover la cultura en Marruecos desde la presidencia de la Federación de Industrias Culturales y Creativas (FICC).

AFKAR/IDEAS la ha entrevistado por videollamada para conocer mejor el papel de la cultura y el arte en Marruecos y el impacto de la pandemia en este sector.

AFKAR/IDEAS: ¿Cuáles son los mecanismos adoptados para gestionar y afrontar la crisis provocada por la pandemia y para mantener vivo el sector cultural?

NEILA TAZI ABDI: Como en el resto del mundo, el sector cultural marroquí se ha visto muy afectado. En estos momentos, transcurrido un año, si-

guen sin reanudarse las actividades culturales, salvo la de las galerías, que pueden abrir ocasionalmente con medidas sanitarias muy estrictas. Además, siguen en marcha algunos rodajes de cine y televisión. Por el contrario, no se celebran espectáculos en vivo, ni conciertos, ni festivales, los teatros y los cines también están cerrados.

Como presidenta de la FICC, que se enmarca en la CGEM, hemos trasladado al gobierno los datos referidos al número de empresas y puestos de trabajo afectados, y que da una idea del impacto directo de la crisis sobre los gestores profesionales de las industrias creativas y culturales. Se han facilitado ayudas directas a los cines, cuyos ingresos conocemos al detalle, por la venta de entradas. Es necesario señalar que en Marruecos existe un sector cinematográfico muy organizado, con un centro cinematográfico marroquí y partidas presupuestarias destinadas a la producción nacional de cine.

En paralelo, se ha firmado con el gobierno un programa de ayudas para todas aquellas empresas cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parón de las actividades. Se trata de ayudas directas, aunque obviamente no son el equivalente a un salario completo. Se han dictado también moratorias y aplazamientos de créditos para estas empresas, porque algunas no van a poder devolverlos en el corto plazo. Además, se han concedido créditos equivalentes a un mes

de facturación para mantener la tesorería. Por desgracia, no son medidas que beneficien a los artistas de forma directa.

A/I: *Hablando de los artistas, ¿cuál es su situación en el contexto actual?*

N.T.A.: Cabe señalar que quienes trabajan en el mundo del arte o las artes escénicas bregan desde siempre con dificultades. Muchos artistas no se encuentran en una situación fácil, porque sus actividades se han detenido y muchos no recurren necesariamente a los mecanismos establecidos y que les permitirían tener una situación menos precaria. Por ejemplo, en Marruecos existe la tarjeta de artista, que da derecho a una mutua. Por desgracia, no todos los profesionales de este sector la solicitan o la administración tarda en darla.

Sin embargo, muchos artistas se han beneficiado de los programas de incentivos a la creación del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es poner a disposición de los creadores una serie de fondos para que puedan seguir creando durante este periodo de cese de actividad.

Esta crisis será un punto de inflexión y a largo plazo podría tener un impacto positivo en el sector, pues hemos cobrado conciencia de su fragilidad y de la necesidad de darle solidez. Hemos intentado convertir esta crisis en una oportunidad para abordar los problemas relacionados con los sectores cultural y creativo,

**Tras la pandemia,
la cultura será un
componente clave para
la recuperación mundial**

un motor de desarrollo económico y social para nuestro país, cuyo potencial no estamos aprovechando del todo.

A/I: Si he entendido bien, se pusieron en marcha mecanismos diversos. ¿Qué queda por hacer, en su opinión? ¿Puede el gobierno hacerlo mejor?

N.T.A.: El gobierno debería hacer más. Somos un país que tiene la suerte de tener un patrimonio con un gran potencial cultural en todos sus sectores. En cuanto a la creación contemporánea, tenemos talentos que destacan en varios ámbitos: en la industria cinematográfica hay directores que están haciendo cosas muy interesantes y cuyos trabajos están siendo seleccionados y premiados en los principales festivales del mundo. Celebramos festivales de música con éxito internacional y contamos con un verdadero patrimonio musical. Tenemos yacimientos prehistóricos muy importantes y una verdadera riqueza en el ámbito de la arquitectura, la moda o la gastronomía. Marruecos ganaría mucho si promocionara mejor su patrimonio para convertirlo en cadena de transmisión de la política cultural, turística y educativa. Esto nos permitiría brillar con luz propia y atraer aún a más turistas, y ofrecer a la juventud más medios de emancipación, desde edades más tempranas. La cultura puede crear muchos puestos de trabajo, pues es uno de los sectores más atractivos para los jóvenes. El amplio número de mujeres artistas demuestra que la cultura es un vector muy importante de emancipación.



Neila Tazi Abdi en el Festival Gnaua y Músicas del Mundo de Esauira./©FESTIVALGNAOUA

En octubre de 2019, la federación organizó la primera asamblea de las industrias culturales y creativas, en colaboración con el Ministerio de Cultura. La primera recomendación acordada por dicha asamblea fue desarrollar una gran estrategia nacional para las industrias culturales y creativas. Hoy esa estrategia está en estudio, y el Ministerio de Cultu-

ra ha puesto en marcha un plan de futuro para el sector cultural y creativo que en menos de un año presentará al gobierno, al sector privado, a la opinión pública y a la sociedad civil.

A/I: ¿Cuáles cree que serán las consecuencias sociales de la paralización

Estudios de la OCDE demuestran que el turista cultural gasta un 30% más que el convencional

de las actividades culturales, especialmente entre los jóvenes? ¿Qué papel desempeñará la cultura en la pos-pandemia?

N.T.A.: Toda la ciudadanía sufre el que no se lleven a cabo actividades culturales, no solo los jóvenes. Como en el resto del mundo, hemos recurrido a los libros y a Netflix, que son realmente lo único que nos queda para evadirnos y vivir momentos amenos en esta durísima crisis, que ha afectado tanto a la economía como a las relaciones humanas, en la que muchas familias han tenido que respetar las normas de distanciamiento. Todo el mundo ha sufrido los mismos efectos. Tanto los jóvenes como los no tan jóvenes demandan enérgicamente que se recupere la vida social a través de la actividad cultural. Tras la pandemia, la cultura será un componente fundamental para la recuperación mundial. Cualquier país que quiera decir “hemos vencido a la Covid” tendrá que enviar señales claras a través de la reanudación de la vida cultural, pues la vida cultural crea vida social. Si queremos que la gente, los turistas y los inversores recuperen la confianza, debemos enviar un mensaje firme, poniendo en marcha múltiples actividades y eventos culturales y artísticos. No obstante, hay que saber que si queremos programas y proyectos de calidad, debemos ocuparnos de ello ahora, pues estos requieren tiempo: se han de preparar las actividades culturales previas que ayuden a poner en marcha políticas de recuperación.

A/I: Usted fundó el Festival Gnaua y Músicas del Mundo de Esauira del

que, además, es productora desde el principio. ¿Cómo surgió la idea de crear este festival y cuál es el secreto de su éxito?

N.T.A.: Junto a un grupo de amigos apasionados tanto de la música como de Esauira, tuvimos la idea de organizar un festival de música fusión porque el gnaua fascinaba a tantos artistas del mundo. Muchos grandes músicos de los años setenta y ochenta se interesaron por este tipo de música, pero nadie en Marruecos imaginó que una música que los músicos callejeros tocaban en las plazas a cambio de unos pocos dirhams fuese tan popular. No sabíamos que el gnaua significaba tanto para los marroquíes. El festival se hizo popular precisamente porque tenía una dimensión mística, espiritual y musical, en él se juntaban personas de distintos lugares y clases sociales, generaciones y nacionalidades diferentes, una verdadera mezcla de población y culturas. El gnaua interesa a músicos de jazz y blues, pero también de otros géneros, así que empezamos a explorar rápidamente varias vías artísticas y tipos de fusión. Asimismo, se produjo una coincidencia muy interesante: un año después de la creación del festival, accedió al trono Mohamed VI, un joven rey que amaba la música y las artes, y a partir de entonces el festival contó con el patrocinio real. Este festival fue muy revelador, pues demostró que los marroquíes, en especial los jóvenes, están sedientos de cultura y de música, y disfrutan mucho reuniéndose con sus semejantes en eventos de este tipo. Son ya 22 años de festival, en los que hemos atravesado períodos

muy difíciles, sobre todo por los problemas de financiación, pero el festival ha conseguido perdurar en el tiempo. Hoy estamos reflexionando sobre cómo gestionar cada vez mejor estos proyectos, que deben blindarse contra cualquier vulnerabilidad. En otras palabras, proyectos como el festival no deberían lidiar con la búsqueda de financiación. Habría que garantizar su supervivencia para que los productores solo debamos ocuparnos de un reto: mantener la calidad artística.

A/I: Ha hablado brevemente de Esauira, esta pequeña localidad que acoge el festival. ¿Cómo resolvieron los posibles desequilibrios entre el pequeño tamaño de la ciudad y la enormidad del Festival Gnaua y Músicas del Mundo?

N.T.A.: Esauira es una de las claves del éxito del festival. En la ciudad se entendió muy pronto que el festival representaba una oportunidad muy importante para sus habitantes y su economía. Cuando pusimos en marcha el festival, en 1998, era una ciudad que agonizaba, inundada de problemas. Trabajamos juntos para poner en marcha el festival, para aprender a gestionar las cosas y dar una acogida adecuada a los asistentes. El festival siguió creciendo y nosotros seguimos colaborando estrechamente para gestionar ese crecimiento y para que Esauira fuera lo más acogedora posible, que a la gente le gustara venir y disfrutar de ese ambiente, del espíritu de Esauira y de los gnaua. Esauira es hoy una de las ciudades marroquíes de mejor

7 Las mujeres deben trabajar para crear más espacios para ellas en los ámbitos de toma de decisiones

fama en el extranjero. Se ha convertido en una verdadera capital cultural. Nuestro festival ha servido de inspiración a otros eventos culturales que atraen a visitantes de calidad, amantes del arte y la cultura. La ciudad acoge cuatro festivales durante el año.

Existen, por cierto, estudios de la OCDE que demuestran que el turista cultural gasta un 30% más que el convencional. En 2014 encargamos a una importante consultora un estudio acerca del impacto económico del festival en la ciudad. Se demostró que por cada euro que invertimos en el festival, 17 revierten directamente a la economía local. Este estudio ha hecho que los responsables políticos locales, provinciales y regionales cobren conciencia sobre la importancia de apoyar más este tipo de proyectos.

A/I: *El año pasado no se pudo celebrar la 22ª edición del festival. ¿Tiene esperanzas para este año? ¿Han preparado otro formato?*

N.T.A.: Desgraciadamente, el año pasado tuvimos que anular la edición de 2020, así que la próxima seguirá siendo la 22ª edición. Estamos trabajando ya en ella. No puedo dar aún fechas exactas, pues es demasiado pronto para saber si en seis o siete meses se podrán reunir 5.000, 20.000 o 30.000 personas en la ciudad. Tenemos las esperanzas puestas en el último trimestre de 2021, pues la campaña de vacunación va bien en Marruecos y el número de casos está disminuyendo considerablemente. El 2020 ha sido un año en blanco para la cultura, pero nos tememos

que 2021 sea también un año en blanco.

En cuanto al formato, en 2020 no llegamos a organizar conciertos en *streaming*. En cambio, estamos trabajando en varios programas de televisión, pues en 2020 estábamos en vísperas de una importante efeméride, la de la inscripción en 2019 de la música gnaua en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, que queríamos celebrar como el gran hito que supone, tras 22 años de trabajo.

En paralelo, la FICC está diseñando con el Ministerio de Cultura una gran plataforma digital, muy necesaria, para la difusión de la cultura.

A/I: *Usted fue la primera vicepresidenta mujer de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos. ¿Cómo valora esta experiencia? ¿Qué significa alcanzar un puesto como ese, normalmente reservado a los hombres?*

N.T.A.: Tuve el honor de ser la primera mujer vicepresidenta y, sobre todo, la primera mujer en formar parte de la mesa de la Cámara de Consejeros y presidir las sesiones plenarias. Lamento ver que se ha dado un paso atrás, pues me sucedió un hombre y hoy ya no hay mujeres en la mesa. Aparte de esta importante cuestión, porque nuestra Constitución hace de la paridad un objetivo fundamental de nuestro desarrollo, hago una valoración muy positiva, ya que esta experiencia me permitió ver muy de cerca el funcionamiento de las instituciones, comprender el funcionamiento de la política y me

enriqueció intelectualmente. Espero que muchas mujeres puedan tener esta experiencia.

Esta Cámara, cuya composición fue revisada en la Constitución de 2011, está integrada por parlamentarios elegidos por compromisarios. La integran representantes de la patronal, de los sindicatos de trabajadores, las cámaras profesionales y autoridades locales. Fui elegida parlamentaria en 2015 para representar a la CGEM, la patronal marroquí que representa a más de 100.000 empresas, presidida en ese momento por una mujer, Miriem Bensalah Chaqrour, que quería que la única mujer de los ocho parlamentarios de la CGEM tuviera un puesto en la mesa de la Cámara y así avanzar en la presencia femenina en los órganos de gobierno de las instituciones. Esta es una cuestión esencial porque son las mujeres en estos órganos de toma de decisiones las que trabajan para promover la causa de las mujeres. Las leyes electorales en proceso de adopción prevén un avance considerable en cuanto a la representatividad de la mujer en los próximos consejos municipales y regionales. Soy miembro de un colectivo llamado "Igualdad ahora" que lucha por modificar las leyes orgánicas para que haya más mujeres en el Parlamento y los consejos electos, y para que en el futuro las leyes contemplen la implementación del principio de paridad. ■

La resiliencia como un medio de supervivencia

Frente a la pandemia, los artistas del mundo árabe siguen sufriendo la mala gobernanza de los Estados. El virus no ha hecho sino exacerbar una situación ya deplorable.

Lilia Weslaty

Hace más de un año que la pandemia de la Covid ha alterado profundamente el mundo entero, especialmente el sector cultural y artístico. El virus se instaló y cambió por completo la vida cotidiana de todo el mundo. El espacio donde uno podía desplazarse se ha reducido repentinamente, a raíz de las restricciones de movimiento impuestas por los Estados. La mayoría de países árabes, que sufren desde hace mucho graves problemas de infraestructuras, falta de materiales y déficit de la sanidad pública, no tenían más alternativa que confinar a las poblaciones para limitar la propagación del virus y *de facto* la saturación de los hospitales.

En este contexto inédito, las excepciones con ciertos comercios llamados “esenciales” para que prosiguieran la actividad han planteado un problema real con respecto a nuestra percepción de las artes relegadas a la categoría de actividades “no esenciales”. Los artistas, especialmente en la región MENA, han vivido la misma frustración experimentada en otros lugares debido a esa pérdida de libertad, una frustración aún mayor, dado que los sistemas de salud pública de la mayoría de esos países son ya bastante deficientes en cuanto a equipos y atención.

Como en todas partes, los espectáculos, exposiciones y conciertos siguen posponiéndose, lo que genera una actitud expectante fastidiosa. Las consecuencias siguen afectando a muchos artistas, especialmente en el plano económico. Los hay que cuentan con el apoyo de la familia, otros recurren a los préstamos, otros tratan de utilizar internet para vender sus creaciones, utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales para contactar con su público. Avanzando en la incertidumbre, el anuncio de las vacunas ha devuelto la esperanza de un regreso probable y cercano a la “vida normal” de antes de la Covid-19.

En Túnez, el ministro de Cultura se niega a suspender las actividades culturales

La pandemia de la Covid-19 ha afectado en primer lugar la libertad de movimiento del artista y, en segundo lugar, su relación con el público. Después de los confinamientos y toques de queda que se aplican

desde hace un año, las posibilidades de reunión se han reducido a la nada. De la noche a la mañana, las manifestaciones culturales se suspendieron en todos los países árabes. En Túnez, el 5 de octubre de 2020, el ministro de Cultura, Walid Zidi, fue destituido. El motivo fue su oposición absoluta a la decisión del jefe de gobierno, Kais Said, sobre la prohibición de toda reunión y manifestación cultural, debido a la Covid-19. En su opinión, “los artistas han trabajado meses en sus espectáculos, respetan a rajatabla el protocolo sanitario y no pueden prohibirse sus actividades”.

Además, se establecieron disposiciones en colaboración con el comité científico de lucha contra la Covid-19, afirma el Sr. Zidi. Para el ministro saliente, el gobierno no escucha ni a los artistas ni a los actores del sector en general, ni tiene en cuenta la opinión del comité.

La reacción del mundo artístico fue desigual: por un lado, los había que estaban a favor de la decisión gubernamental y, por otro, quienes abogaban por proseguir las actividades. El sindicato de músicos, entre otros, organizó manifestaciones en la plaza del gobierno en la Kasba de Túnez, para protestar por el toque de queda impuesto. También se creó un *hashtag*, #Sayeb_Ellil (“Dejadnos trabajar de noche”). Según el sindicato, “esta decisión no tiene en cuenta la situación económica precaria de los agentes del sector”.

Frente a la pandemia, la resiliencia

Mientras el mundo gira lentamente, para la artista tunecina Sana Tamzini, también investigadora universitaria especialista en gestión de proyectos de cooperación cultural, una convicción se hizo evidente: “No había que parar”, nos confía, añadiendo que “los aplazamientos y las anulaciones hasta llegar a la imposibilidad de seguir con los proyectos no pueden ser razones suficientes para adoptar el ritmo de la pandemia o detenerse. ¿Acaso no corresponde al artista abrir nuevos caminos en tiempos de crisis?”.

Aprovechando el confinamiento, se dedicó a acabar su tesis “Diseño de las políticas culturales y práctica del patrimonio local”. Para sobrevivir, trabaja de profesora,



Artistas y trabajadores del sector de la cultura protestan frente a la ópera de Túnez para exigir la reanudación de las actividades culturales y artísticas, paralizadas debido a la crisis sanitaria.

Túnez, octubre de 2020./FETHI BELAID/AFP VIA GETTY IMAGES

porque el arte no le da dinero. Sus proyectos, por lo tanto, son a menudo autofinanciados. Según Tamzini, con o sin la Covid, "la administración no está vinculada ni con los expertos culturales, ni con los artistas ni con los investigadores y aún menos con los ciudadanos". No obstante, se repartieron ayudas financieras, pero se consideraron insuficientes para cubrir los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Lo cierto es que el Estado tunecino está muy endeudado (la deuda exterior bruta ha superado el 100% del PIB) y no puede ayudar directamente al sector en crisis.

Según Tamzini, la pandemia no solo ha dejado al descubierto la precariedad del sistema de salud de Túnez, sino también la del sector cultural, consecuencias lógicas de décadas de autoritarismo, corrupción y mal gobierno.

Acostumbrada a colaborar con otros artistas del mundo árabe, alabó la capacidad de respuesta de Emiratos Árabes Unidos frente a la crisis. Dubái, organizador de la Exposición Universal que debía celebrarse del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021, tuvo que posponer el acontecimiento a 2022.

Para contener la propagación de la pandemia, la ciudad puso en práctica un confinamiento estricto en la primera ola. Desde principios de febrero, también se ha impuesto una restricción del 30% a los hoteles y clubes

de playa. En cuanto a los otros lugares, como los teatros y los cines, podían proseguir sus actividades, pero al 50% de su aforo. Además, EAU registró uno de los índices más elevados de vacunación del mundo, con más de cuatro millones de dosis administradas a una población total de 10 millones de habitantes.

Las estrellas de los Emiratos contribuyeron también al esfuerzo nacional por la prevención. En sus redes sociales, apelaron al público a vacunarse. La actriz emiratí Ahlam fue la primera en prestarse voluntaria para la vacuna, seguida por los cantantes Hussein al Jasmi y Fayed al Saeed, que expresaron en Instagram su agradecimiento al gobernador de su ciudad y a la autoridad sanitaria de Dubái.

Recurrir a la alternativa digital para superar las restricciones

La alternativa digital para sobrevivir a la pandemia fue la solución por excelencia para muchos artistas del mundo árabe. Para la directora Selma Ferrriani, las ventas de las obras expuestas en su galería, en la zona elegante de Túnez en Sidi Bou Said, descendieron un 50%. Por consiguiente, exponer en internet se

convirtió en una solución primordial para salvar la actividad de su galería y mantener a los pintores.

Otros artistas, como los raperos, ya acostumbrados a trabajar de ese modo, prosiguieron sus proyectos principalmente a través de la plataforma YouTube. Al cobrar por número de visitas, se diría que se las arreglan mejor que otros. Además, en el top de las tendencias en Túnez, el rapper Sanfara se clasificó en primer lugar en plena pandemia, lo que confirma el papel preponderante de estos nuevos canales de relación entre el artista y su público.

En Marruecos, donde el toque de queda no deja de prolongarse, la situación es aún más preocupante, debido a la precariedad social previa a la Covid-19. En una declaración pública a principios de 2021, el presidente de la Unión marroquí de las artes dramáticas, Abdelkébir Rgagna, alertó del “peligro y el impacto negativo en la psicología de los artistas y de los ciudadanos en general”.

Sin protección social, sin ingresos fijos, abandonados a su suerte, los profesionales del teatro no pueden, por tanto, recurrir a las plataformas digitales que sustituirían los teatros, puesto que se trata “de un arte vivo”.

Por otro lado, para otros artistas marroquíes como el director Saad Chraibi, esta etapa de reclusión es una bendición para escribir. “Este período de confinamiento me ha permitido tomarme el tiempo de reflexionar y de escribir mi guion”, afirma.

Líbano, un país acorralado

Empujados a la resiliencia, los artistas árabes, sobre todo en países que sufren cambios profundos tras la ola de protestas desde 2011, tratan mal que bien de sobrevivir. Para Líbano, el año 2020 ha sido el peor. Crisis financiera, política, social, económica y sanitaria se acumulan seis meses después de las dos explosiones destructivas del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que causaron 207 muertos, más de 6.500 heridos y obligaron a 300.000 personas a abandonar su hogar. Según la ONU, la mitad de los libaneses se sitúa por debajo del umbral de la pobreza.

“El país agoniza”, se lamenta Mansur Aziz, un activista cultural que tenía su pequeño restaurante en el barrio de El Hamra, en la capital, Beirut. Acostumbrado a convertir su negocio en un lugar de reuniones *underground* para los músicos y grupos nuevos, solo piensa en emigrar a Túnez o a otro lugar donde poder sobrevivir. Vivir en Líbano se ha vuelto “imposible”, afirma. Los cortes de electricidad se han vuelto aún más recurrentes, los bancos son incapaces de facilitar liquidez a los clientes y los hospitales están saturados ante al número creciente de contagios.

Según la Universidad John Hopkins, “Líbano se ha convertido en el tercer país del mundo en número de contagios por millón de personas. Más de 5.000 nuevos casos de media se registran a diario en una población que no supera los seis millones de habitantes”. Sin embargo, un hombre, autoproclamado “Capitán Tony Kat-

toura” ha encontrado el modo de convertir su arte en un modo de evasión para el disfrute de los libaneses. Su canción “Chaud, chaude, ce soir, la fête est chaude” [“Animada, animada, esta noche la fiesta está animada”], además de sus actuaciones grabadas –convertidas en una bocanada de aire fresco para relajar el ambiente sombrío– se compartió masivamente en las redes sociales.

En Egipto, la pandemia ha fortalecido la política represiva del régimen

En el país del general Abdelfattah al Sisi, no se sabe con certeza el número de contagiados ni de muertos de Covid-19. La censura, las detenciones y las torturas son el pan de cada día de los ciudadanos y, sobre todo, de los militantes antigubernamentales. A principios de año, las autoridades egipcias detuvieron al artista caricaturista y director de películas de animación Ashraf Hamdi, después de que publicara un vídeo destacando el décimo aniversario de la revolución egipcia del 25 de enero, que derrocó al histórico autócrata Hosni Mubarak. “Me detienen”, publicó Hamdi en su cuenta de Facebook, tras lo cual miles de personas expresaron su inquietud y preguntaron adónde le habían llevado y qué le ocurriría.

Hamdi, que trabajaba anteriormente de dibujante para la revista gubernamental *Sabah al Khair* y el sitio web *Masrawy*, fue reconocido por sus vídeos de animación, que comentan los problemas sociales a través de los personajes de dibujos animados.

Tras el golpe de Estado de 2013, miles de personas siguen siendo detenidas arbitrariamente, solo por haber ejercido derechos garantizados por el derecho internacional, incluidos la libertad de expresión y de reunión pacífica, o a partir de juicios manifiestamente injustos, incluyendo juicios colectivos y militares. Según Human Rights Watch (HRW), las fuerzas de seguridad egipcias llevan a cabo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura de disidentes, incluidos niños. En su carta abierta a la Unión Europea, enviada el 21 de enero de 2021, HRW afirma que a lo largo del año pasado, “las autoridades egipcias han utilizado la Covid-19 como pretexto para conferir nuevos poderes abusivos al presidente e intensificar las restricciones a los derechos y libertades”.

Frente a la pandemia, los artistas del mundo árabe siguen sufriendo la mala gobernanza de sus Estados. El virus no ha hecho sino exacerbar una situación ya desplorable, a diferentes niveles, según su pasado y su historia. Egipto, Yemen o Líbano, por citar solo esos tres países, son sin duda algunas de las zonas donde el coronavirus ha encontrado un terreno abonado de profunda precariedad que castigar duramente. En estos momentos, la carrera por las vacunas se acelera para calmar el descontento de las poblaciones necesitadas. Solo los países árabes ricos como EAU o Catar constituyen la excepción y recurren en ayuda de sus vecinos con la donación de vacunas. ■

Leído en AFKAR/IDEAS



L'apprentissage de la démocratie

Khadija Mohsen-Finan,
Nouveau monde éditions,
París 2021
240 pág.

Una década después del inicio de la oleada de protestas antiautoritarias en el mundo árabe, Túnez es el único país en el que el movimiento revolucionario que derrocó a Zine Abidine Ben Ali ha dado lugar a un proceso de transición política en el que se han alcanzado grandes logros pero que todavía afronta importantes desafíos. El análisis crítico de ese proceso de aprendizaje de la democracia en el que Túnez sigue inmerso es el objeto de la obra de la profesora e investigadora Khadija Mohsen-Finan, contribución de obligada lectura para todas aquellas personas interesadas en profundizar en las dinámicas de cambio político en el Norte de África.

Aplaudida desde el exterior como el ejemplo de éxito de la llamada *Primavera Árabe*, la transición tunecina ha alcanzado grandes logros políticos e institucionales: celebración periódica de elecciones libres, alternancia pacífica de los gobiernos, redacción de una Constitución consensuada en 2014 que garantiza las libertades fundamentales, incluida la de conciencia y consolidación de una sociedad civil dinámica como instancia de mediación impulsora de consensos en momentos de crisis, pero también fiscalizadora de la actividad política, parlamentaria y de la administración. Sin embargo, las reivindicaciones de carácter socioeconómico, que también se encontraban en el origen del *élan* revolucionario surgido en el interior menos desarrollado del país, no han

sido atendidas. Las desigualdades sociales y regionales entre el Sur y el interior del país, y la costa más desarrollada, han aumentado durante la última década empujando a un número creciente de jóvenes a emigrar ante la falta de respuestas a las demandas de una mayor justicia social en un contexto de deterioro de la situación económica a causa de la Covid-19.

El ensayo de Mohsen-Finan reconstruye la evolución política de Túnez durante la última década a través de un minucioso análisis de las dinámicas internas de este proceso de transformación política, así como sus interacciones con un contexto regional en el que las presiones contrarrevolucionarias impulsadas por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se intensifican a partir de 2013. La lectura de los 11 capítulos que componen el libro ayuda a comprender por qué esa visión laudatoria hacia la transición tunecina, muy extendida en los análisis realizados desde el exterior, es matizada por amplios sectores de la sociedad en el interior del país. Para la autora no es la experiencia revolucionaria que acabó con la dictadura de Ben Ali en 2011 lo que una parte de la población cuestiona, sino el modo en el que las élites han pilotado un proceso de transición política que ha priorizado los aspectos institucionales en detrimento de las expectativas de justicia social, dignidad, fin de la corrupción y superación de las desigualdades sociales, económicas y territoriales que hace una década estuvieron en el origen de las movilizaciones.

Este divorcio de agendas entre las élites políticas y el pueblo, que en 2011 se autoerigió en sujeto político con el eslogan “al-chaab yurid isqat al-nizam”, se encuentra en el origen del aumento de la desafección hacia el sistema político y sus actores ins-

titucionales, claramente visible en las últimas convocatorias electorales de 2018 (municipales) y 2019 (presidenciales y legislativas). Junto al aumento de la tasa de abstención en los sucesivos comicios, la autora del ensayo considera el importante respaldo obtenido por las listas independientes un indicador adicional de la desafección de la sociedad tunecina por los partidos y la clase política. Ese distanciamiento queda reflejado también en el apoyo obtenido por candidatos con opciones populistas y programas antisistema. Ningún candidato de los partidos políticos con representación parlamentaria consiguió pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2019 en las que el empresario Nabil Karui compitió con Kais Said, un *outsider* sin respaldo de ninguna estructura política, que finalmente consiguió ser elegido presidente de la República con el 72,7% de los votos con un programa político sustentado en el proyecto de refundar el sistema político establecido en la Constitución de 2014.

El creciente apoyo a opciones populistas y *antiestablishment* supone una clara penalización del electorado a la estrategia de consenso pactada en 2013 por el líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi, y el líder del partido secularista Nida Tunes, Beji Caid Essebsi. Aunque aquel compromiso histórico entre fuerzas ideológicamente antagónicas permitió desactivar el clima de polarización identitaria que estuvo a punto de hacer descarrilar la transición durante el periodo de redacción de la Constitución, la vía consensual sobre la que se articuló la vida política entre 2014 y 2018 consagró un *statu quo* alejado de las expectativas de cambio que la revolución había alimentado. En un contexto regional adverso para las

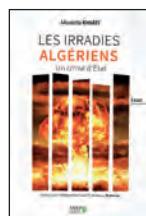
fuerzas islamistas que llevó a que los Hermanos Musulmanes en Egipto sufrieran una feroz represión tras el golpe de Estado liderado por el mariscal Al Sisi, el acuerdo alcanzado se sustentó en la normalización de Ennahda a cambio de su respaldo a la reintegración en el juego político y económico de la antigua élite benalista, abandonando las posiciones que en este tema habían mantenido hasta entonces.

Este consenso y los acuerdos transaccionales suscritos en el marco de gobiernos de unidad nacional perpetuaron el *statu quo* económico y social, alimentaron el malestar en las regiones periféricas del país y en los sectores más vulnerables como el de los jóvenes y los diplomados en paro, al no ver satisfechas sus expectativas de acceso al mercado laboral. A la parálisis en la acción gubernamental producida por la existencia de gobiernos heterogéneos y poco cohesionados se añade las recurrentes tensiones competenciales entre las principales instituciones del país en el marco de un sistema político de carácter semipresidencialista, lo que ha dificultado la acción de los diferentes gobiernos. La opción por este sistema híbrido en el que la Presidencia de la República solo mantiene competencias en los ámbitos de la defensa y las relaciones exteriores, respondía a la voluntad de impedir la concentración de poderes. A ese mismo objetivo respondía el sistema electoral proporcional adoptado para dificultar la consecución de mayorías absolutas, lo que ha dado lugar a parlamentos muy fragmentados y en muchos casos disfuncionales.

Mohsen-Finan pone el foco en estas dinámicas intra-élites y en las tensiones institucionales que han mermado la confianza de la población tunecina en una clase política incapaz de responder a unas demandas que no solo no han desaparecido, sino que siguen activas tal y como ha demostrado la oleada de protestas que ha tenido lugar en muchas regiones del país coincidiendo con el décimo aniversario de la revolución y en las que se volvieron a co-

rear eslóganes similares a los de 2011.

Miguel Hernando de Larramendi-Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Castilla-La Mancha



Les irradiés algériens. Un crime d'Etat

Mostéfa Khiati. ANEP Editions, Argel, 2018
308 págs.

La cuestión de la memoria histórica entre Argelia y Francia está de plena actualidad, suscitando un debate mediático a ambos lados. La obra de Mostéfa Khiati, médico-investigador, profesor de la Universidad de Argel, nos ilumina sobre un “crimen contra la humanidad” que ha permanecido en los archivos secretos de una guerra calificada de “acontecimientos” en el discurso oficial francés. Este libro nos describe con todo lujo de detalles páginas de historia, de estrategia militar, de derecho internacional, de salud pública, de medio ambiente. Destaca especialmente esa crueldad inhumana de las víctimas de pruebas nucleares francesas en el Sáhara argelino, víctimas sin “estatus ni atención”, los desposeídos que heredó la Argelia independiente.

Más de medio siglo después del cierre de las instalaciones de pruebas nucleares en el Sur argelino, Francia elude su responsabilidad. No se ha indemnizado a ningún ciudadano argelino irradiado, a diferencia de algunos polinesios y numerosos veteranos franceses. Hasta la fecha, no se ha emprendido ningún programa de descontaminación, cuando los residuos radioactivos cubren vastas extensiones.

“La ley Morin sobre la indemnización de las víctimas de las pruebas nucleares” se promulgó un año después de la visita de Nicolas Sarkozy a Argelia en diciembre de 2007. En ese momento, se decidió establecer un grupo de trabajo argelino-francés

“para evaluar las instalaciones nucleares, hacer un análisis de su peligrosidad y un diagnóstico para una descontaminación”. En diciembre de 2012, le tocó a François Hollande, en visita oficial a Argelia, declarar que “la ley Morin debería aplicarse plenamente... Esta ley no se ha aplicado en absoluto con la determinación necesaria...” El resto de aspectos de la cuestión se evitan intencionadamente: protección de las instalaciones, descontaminaciones, residuos radioactivos, cartografía de los vertederos y planos de las instalaciones.

La ley Morin ha mostrado sus límites puesto que, en ausencia de documentos que prueben su presencia en esas instalaciones, documentos confiscados por los militares franceses después de los experimentos, a los habitantes del Sur les resulta imposible reunir la documentación exigida por dicha ley. Las poblaciones argelinas y subsaharianas empleadas como mano de obra en las instalaciones de ensayos nucleares ignoraban por completo los efectos de las radiaciones.

Además, esta obra permite al lector comprender mejor las cuestiones políticas que llevaron a Francia a dotarse del arma nuclear, en plenos “acontecimientos de Argelia”. Una documentación profusa acompaña los preparativos y el desarrollo de las distintas pruebas nucleares, tanto atmosféricas como subterráneas, llevadas a cabo en el Sáhara. Se enumeran los incidentes y la falta de precaución que salpicaron esos ensayos nucleares, subrayados en un informe elaborado por el Senado francés en 2009. Las autoridades militares francesas expusieron ampliamente a los pueblos del Sur, y a veces incluso a los soldados y periodistas franceses, a las radiaciones. Este amplio estudio plantea, asimismo, el problema de los cobayas humanos, unos 150 prisioneros de guerra argelinos, utilizados en la explosión “Gerboise blanche” en abril de 1960, el segundo lanzamiento atómico en Reggane, donde tuvieron lugar las primeras pruebas nucleares francesas. El gobierno, en plena carrera atómica, llevó a cabo sin duda experimentos con cuerpos, vivos o muertos, como reco-

noció imprudentemente Jean-François Bureau, en 2007, cuando era portavoz del Ministerio de Defensa.

El Centro Sahariano de Experimentos Militares (CSEM) de Reggane se implantó a finales de 1957, agrupando a varios miles de personas, civiles y militares, de la región del Tanezruft en un gran complejo situado a unos 40 kilómetros de la meseta de Hamudia, en el valle del Tuat. Esta región, con un relativo sedentarismo de la población, es atravesada por nómadas y encierra varias fuentes de agua.

Los negociadores de los Acuerdos de Evian que pusieron fin al conflicto armado habían cedido las bases nucleares de Reggane e In Ekker a Francia por un periodo de cinco años, para evitar la división de Argelia. En la actualidad, los argelinos representantes de instituciones de los derechos humanos se plantean la cuestión de las cláusulas secretas de esos acuerdos, después de que la prensa nacional diera a conocer la última instalación nuclear, en Oued Namus, ¡que Francia no liberó hasta 1986!

El libro presenta varios testimonios de supervivientes. El jeque Hadj Abdellah de Reggane recuerda: "La víspera de la 1^a explosión, nos repartieron collares donde figuraban los números de nuestros documentos profesionales y nos recomendaron no salir al día siguiente. ¡Cierren los ojos y no miren el cielo! ¡Díganlo a su familia y vecinos!". Al día siguiente, el 13 de febrero de 1960 a las 7.04 h, una fuerte explosión despertó a los habitantes del lugar. Había nubes negras en el cielo y la tierra temblaba bajo los pies. Para muchos, era el Día del Juicio Final". Otros testigos cuentan que una caravana de tuaregs procedentes de Bordj Badji Mokhtar, una zona cercana al Sahel, constituida por una treintena de hombres con sus dromedarios, cabras y corderos, desapareció de repente tras la explosión nuclear. Sus restos se encontraron mucho más tarde en avanzado estado de descomposición.

En el capítulo dedicado a los efectos en la salud de la población expuesta a las radiaciones, el autor alu-

de al plutonio, que se considera mucho más agresivo y más tóxico que el uranio, y que utilizaron exclusivamente los franceses en sus pruebas nucleares en Argelia. Una vez dentro del organismo humano, el plutonio se concentra preferiblemente en determinados órganos –los pulmones, el hígado, el esqueleto, los riñones y el sistema nervioso–, asegura el autor, que es profesor de medicina. ¿Es necesario recordar que el primer lanzamiento a la atmósfera es cuatro veces más potente que el de Hiroshima? ¿Que hubo 57 ensayos nucleares entre febrero de 1960 y abril de 1966?

Más de 400 documentos con el sello "secreto de defensa" del periodo de las pruebas nucleares, desclasificados en 2013, dan fe de la responsabilidad plena y total del ejército francés en las patologías de las poblaciones locales residentes cerca de las antiguas instalaciones, especialmente las de los oasis próximos a Reggane. Se mencionan graves problemas de salud, oncológicos, oftalmológicos y cardiovasculares. Hoy doctores y profesores argelinos de oncología coinciden: más de 20 tipos de cáncer, malformaciones genéticas y abortos en la región de Reggane se dan entre los descendientes de los habitantes que estuvieron expuestos a las radiaciones ionizantes. Sin duda, hay un riesgo real genético que se trasmite de generación en generación.

En cuanto al medio ambiente, el autor cede la palabra a los descendientes de las víctimas que todavía residen en el lugar de la tragedia: en la región de Hamudia, lugar de la explosión, el dromedario, el zorro del desierto y la cabra han desaparecido; ni siquiera hay mosquitos. Además, la producción agrícola, de cereales y de dátiles, ha ido agotándose hasta desaparecer por completo, cuando se trataba de su única actividad económica. Un agricultor de Arak, en la región de Tamanrasset, donde el agua se vio muy contaminada, formula amargas conclusiones: "Muerte de los animales y desaparición de la vegetación. Ovejas y camellos pariendo 'monstruos', criaturas afectadas por anomalías incompatibles con la vida".

Como prólogo de esta obra, el historiador Mohamed el Corso insiste en dar la palabra a las víctimas de ambos bandos, para que esta palabra se mantenga y se oiga aquí y allá, para hacer valer el Derecho: "Devolvamos la Historia a la Historia y esforzémonos por conocerla bien y darla a conocer".

Sadjia Guiz-periodista-Argelia



IEMed Mediterranean Yearbook 2020

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona, 2020
483 págs.

La edición 2020 del *Anuario IEMed del Mediterráneo* sale tras un año muy especial. En 2020 se produjo el estallido mundial de una pandemia desencadenada por la Covid-19 que ha alterado el ritmo de nuestras vidas a una escala que muy pocos podían imaginar. Por otro lado, 2020 es el 25º aniversario del Proceso de Barcelona (Euromed) que pretendía proporcionar una plataforma para el diálogo euromediterráneo y un marco para el establecimiento de una estrecha cooperación entre los países de ambas orillas de la región euromediterránea.

El *Anuario* cuenta con las aportaciones de más de 60 analistas y especialistas internacionales. El punto central de esta edición es una reflexión sobre el Proceso de Barcelona y un replanteamiento de las relaciones euromediterráneas en tiempos de Covid-19. En el dossier, los autores hacen un repaso del Proceso y de sus logros y tratan cuestiones esenciales como cuáles son los retos actuales y futuros, las oportunidades, o qué puede y debe hacerse para mejorar las perspectivas para el futuro de la región. Las repercusiones de la pandemia se dejarán sentir durante muchos años y, sin duda, afectarán a la región euromediterránea, así como a

sus relaciones sociales, políticas y económicas.

Entre los retos a los que se enfrenta la región se encuentran la irrupción de nuevos actores que compiten económica, militar e ideológicamente. Como describe acertadamente Marc Pierini en su artículo, mientras la Covid-19 ocupaba toda la atención de los gobiernos occidentales, los nuevos actores han aprovechado una serie de vacíos en la política exterior –*policy vacuums*– provocados por la propia pandemia, la desvinculación y retirada de Estados Unidos de la región y la falta de políticas de la UE. La gobernanza de la migración ha sido otro de los grandes desafíos de la zona euromed en los últimos años. Anne Knoll sostiene que será esencial aprender las lecciones del pasado y poner en marcha un sistema flexible y funcional para la gestión de la migración y la afluencia de refugiados y acabar con las tendencias actuales de securitización de la migración. Asimismo, el autoritarismo y el populismo ya estaban antes en auge en Oriente Medio y el Norte de África, así como en Europa. Según Paolo Magri, estas tendencias solo se han consolidado y reforzado durante este periodo. No obstante, por el momento, esa observación sigue siendo una especulación, como indica el autor, ya que las implicaciones a largo plazo de la pandemia están aún por llegar. Queda esperar que algunas de las expectativas se vuelvan inesperadamente positivas.

Además de esas tendencias, la Covid ha exacerbado las divisiones y desigualdades ya existentes, pero también las más recientes, como las brechas digitales y de género en todo el mundo. La región euromediterránea no ha sido una excepción, como destacan Tin Hinane El Kadi y Lina Abou-Habib en sus artículos. Sin embargo, hay muchas oportunidades para salvar las diferencias y lograr una sociedad más igualitaria. Las mujeres están al frente de esa lucha que exige la igualdad social y de género.

A pesar de los retos, la pandemia de Covid-19 puede ser una ocasión

para lograr una asociación más equilibrada y pragmática entre los países de Europa y África, como señala Larabi Jaidi. No hay que aprovechar la respuesta de la región al cambio climático, un reto tanto global como euromediterráneo. Aizza Moneer sostiene que la pandemia ha vuelto a presentar a los países de la Asociación Euromediterránea la posibilidad de comprometerse para trabajar juntos por un futuro más sostenible mediante esfuerzos combinados y la aplicación de políticas integradas.

Como de costumbre, el *Anuario IEMed del Mediterráneo 2020* es un excelente recurso para todos aquellos interesados en la región euromediterránea. Además de centrarse en los retos y oportunidades tras 25 años del Proceso de Barcelona y el impacto de la COVID-19, esta edición identifica cuatro áreas clave que han marcado a la región durante el pasado año y que seguirán haciéndolo en el futuro: movilizaciones populares en la región MENA y más allá; cambio climático en el Mediterráneo; relación de la UE con África; conflictos mediterráneos y el contexto geopolítico.

Asimismo, el *Anuario*, como en ediciones anteriores, ofrece un panorama en profundidad del año mediterráneo, de las diferentes regiones –Magreb, Oriente Próximo, Europa mediterránea, Balcanes– así como de los países y sectores estratégicos –seguridad y política; economía y territorio; cultura y sociedad. Es una fuente excepcional de recursos y datos primarios que iluminan el pasado año mediterráneo con mapas; cronologías de los principales acontecimientos, conflictos e iniciativas; datos electorales; tablas comparativas cubriendo distintos aspectos como la cooperación mediterránea, la migración, las relaciones comerciales, los tratados y convenios, además de datos demográficos, medioambientales, y económicos, entre otros.

Olivia Isabell Glombitza-profesora asociada, facultad de Ciencia Política y Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona



Europa frente a Europa. Mapa de crisis y vía de escape

David Perejil (ed.), Lengua de Trapo, Madrid, 2020
212 pág.

A lo largo de su historia, la Unión Europea (UE) ha trabajado para lograr una unión segura, protegida, prospera, sostenible, social y más fuerte en el plano internacional. Pero, ¿realmente ha sido así? *Europa frente a Europa* repasa los principales desafíos, déficit y debates internos, tanto actuales como pasados, a los que se enfrenta la UE. Asimismo, permite al lector aproximarse a los aspectos políticos, económicos y sociales de la UE, fomentando una visión más clara de la entidad que decide y regula muchos aspectos cotidianos de nuestras vidas.

En un primer capítulo, Santiago Alba Rico nos presenta la crisis de valores e ideas de Europa. La UE siempre se ha caracterizado por su sólido compromiso de promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo. Alba Rico define la historia europea como un cruce entre una guerra civil europea –ya que hasta la Segunda Guerra mundial siempre ha habido disputas entre potencias europeas–, y una guerra expansiva, es decir, políticas exteriores que han sometido y explotado a otros pueblos. Por ello, afirma que los derechos humanos son el resultado del cruce entre una guerra civil europea y una guerra expansiva.

En el segundo capítulo, Gabriel Flores hace una aproximación a la situación económica europea derivada de la crisis financiera de 2008 y las consiguientes políticas de austeridad y devaluación salarial que dieron lugar a la crisis del proyecto de unidad europeo. También apunta que la UE, como consecuencia del coronavirus, se enfrenta a una crisis inédita y de inciertos resultados y duración que ha modificado su tra-

vectoria y sus políticas. No obstante, esta vez no se ha optado por los recortes, la austeridad y la devaluación salarial que prevalecieron a partir de 2010.

Emma Rose Álvarez Cronin repasa las políticas sociales europeas y aborda las respuestas que ofrece la economía feminista y ecológica para plantear nuevos modelos de bienestar para el siglo XXI. Además, pone de manifiesto que la desigualdad y la exclusión social no han hecho más que aumentar en las últimas décadas en todos los países de la UE. Por último, Álvarez Cronin destaca que para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales actuales no se deben seguir aplicando las políticas anticuadas y fallidas que hasta ahora se han llevado a cabo.

Por su parte, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta analiza la historia de los derechos humanos desde la Segunda Guerra mundial, su aplicación real y los obstáculos para entender su dimensión política, económica y social. También subraya que los valores sobre los cuales se construyó el continente-democracia europeo, el Estado de Derecho y los derechos humanos, se encuentran en la actualidad en crisis y requieren más protección que nunca. Al mismo

tiempo, afirma que no se puede concebir la ultraderecha como una excepción y se debe examinar qué políticas estructurales han permitido su auge en Europa.

En el quinto capítulo, Javier Martín examina las respuestas antiterroristas europeas en la larga relación con el mundo árabo-musulmán. En su opinión, el desafío para la sociedad europea no es solo la integración, sino la clase y el nivel de relación y convivencia, además de la importancia de crear comunidades pluriculturales educadas en la equidad y el diálogo, tanto para los que migran como para los que se sienten amenazados en su casa, para evitar fenómenos como la islamofobia y la consolidación del discurso

supremacista, ya que el obstáculo no es la religión, sino la estructura de la sociedad.

David Perejil, editor del libro, hace un análisis de la política exterior europea y afirma que la UE debe combinar intercambios económicos con derechos humanos, democracia y dimensión de género. Al mismo tiempo, asegura que, en la actualidad, la política internacional será para la UE más decisiva para su desarrollo que las crisis internas. Asimismo, defiende la necesidad de que la UE no deje de promover

ver sus valores, los cuales ha contradicho en sus acciones o en las de sus Estados.

Por último, Tica Font repasa la política de seguridad europea y destaca que los riesgos o amenazas a la paz europea se sitúan en dos entornos: el primero fuera de las fronteras europeas y el segundo en el interior de la UE, siendo la población europea, las personas radicalizadas y el radicalismo islámico los elementos percibidos como un peligro para la seguridad europea. Por ello, se implementan políticas paliativas para frenar los efectos de estos riesgos y amenazas, pero no se diseñan políticas para terminar con las causas de estos peligros para la seguridad europea.

David Perejil cierra con un epílogo sobre los impactos sociales, económicos y políticos consecuencia de la crisis de la Covid-19.

A lo largo de estos siete capítulos, a través del repaso de la historia de Europa hasta la actualidad, *Europa frente a Europa* busca orientar y ayudar al lector a comprender las distintas crisis y retos que atraviesa la UE, al tiempo que nos ofrece vías de escape a estas crisis. Una reflexión indispensable para todos los ciudadanos europeos.

Oumaya Amghar Ait Moussa-IEMed

FUNDACIÓN AL FANAR: Traducción y análisis del mundo árabe desde 2002



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre Apellidos
Dirección Localidad
Provincia C.P País
Teléfono e.mail

Deseo suscribirme a **afkar/ideas** desde el número

- al precio para **España** de 15 € (3 números)
al precio para **Marruecos** de 15 € (3 números)
al precio para **Túnez** de 15 € (3 números)
al precio para **Argelia** de 15 € (3 números)
al precio para **Europa** de 30 € (3 números)
al precio para **resto del mundo** de 30 € (3 números)

FORMA DE PAGO

- Contra reembolso del primer número + 6€ de gastos de envío.
 Domiciliación bancaria (sólo para España, hasta nuevo aviso)

Banco

IBAN

Transferencia bancaria a:

Estudios de Política Exterior SA

Entidad: OF 1815-C/ Serrano, 64 – 28001 MADRID

Nº IBAN: ES44 2038 1815 8168 0008 4016

SWIFT / BIC: CAHMESMMXXX

TODA LA INFORMACIÓN EN **politicaexterior.com**

LLÁMANOS O ESCRÍBENOS:

Tel.: 0034 91 431 27 11 // suscripciones@politicaexterior.com

ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR SA y el INSTITUTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO le informan de que los datos de carácter personal que voluntariamente ha proporcionado serán incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de prestarle satisfactoriamente nuestros servicios, informarle acerca de publicaciones, promociones y productos de nuestras sociedades y hacerle llegar otras informaciones comerciales que puedan ser de su interés por cualquier vía, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente. Al entregar sus datos usted consiente expresamente su tratamiento con dichas finalidades. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, junto con una fotocopia de su DNI, a nuestras oficinas en Núñez de Balboa, 49 - 5a planta - 28001 Madrid.



a f k a r / i d e a s - a f k a r / i d é e s

afkar/ideas



Sexualidad y cambio social
Mariano Fernández / Brigitte Hervé / Sébastien Hébrard / François De Bel Air

Contra la financiación del terrorismo
Magali Koenig / Jean-Pierre Courtois / Noël Waddington

afkar/idées



Processus et lieux de radicalisation
Réserves sociales / Mosquées / Prisons / Femmes
Jordi Moneta / Étienne Briffaut / Jean-Louis Pichot / Léa Moussy

Géopolitique du football
James M. Sherrard / Robert Goris / James Mattingly / Francis Thionne

afkar/ideas



Factores de cambio en Argelia
Cédric Butefille / Jeunesse / Economie / Europe
Laurence Thivierge / Hélène Mahe / Mégane Pommerehne / Léa Moussy

Sudán, Israel, Irán
Mohamed Lachemi / Al Fatah / Al Aqsa

afkar/idées



Migrants dans les pays arabes
Le Liban et le système de la 'Kafala' / Travailleurs dans le Golfe
Soushalement au Maroc / Réfugiés

Claire Beaupied / Jean-Michel Ménard / Michel Allouche / Yves Jaffet
Récupérer le patrimoine syrien
Anne Barthe-Pastor / Michel Arbach / Jean Salaté

afkar/ideas



Nuevo pulso en la calle
Líbano / Egipto / Túnez / Irak / Argelia
Sergio Carrizosa / Carsten Schröder / Michael Gremper / Léa Moussy

Las izquierdas en el Mediterráneo sur
Luis Pella / Pierre Roye / Nelly Del Picciotto / Louise Trullier / Hélène N. Amadou

Santander reconocido por la revista Euromoney como
Mejor banco del Mundo para PYMES



Queremos agradecer este reconocimiento a nuestros profesionales y clientes, particulares y empresas, por confiar siempre en nosotros.

Además Euromoney nos ha nombrado

Mejor Banco del Mundo en Diversidad e Inclusión.

Seguiremos trabajando por el progreso de las personas y de las empresas.
Porque esa es nuestra misión.

#TheRightWay





SER LOS PRIMEROS EN ESTAR CONTIGO

CaixaBank y Bankia se unen para, juntos, ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores.

Para ser los primeros en estar contigo.